

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, sobre convivencia, buen trato y
bienestar de las comunidades educativas, con el
objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la
discriminación y todo tipo de violencia en los
establecimientos educacionales

**BOLETINES N^{os} 16.901-04, 16.781-04 Y 16.881-
04, REFUNDIDOS**

**Objetivo / Constancias / Normas de Quorum Especial (no tiene) /
Consulta Excma. Corte Suprema (no hubo) / Asistencia / Antecedentes
de Hecho / Aspectos Centrales del Debate / Discusión en General /
Votación en General / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo**

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Educación tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, iniciado en el mensaje y las mociones que constan a continuación, con urgencia calificada de “suma”.

- Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font (Boletín N° 16.901-04).

- Moción de los Diputados señoras Ahumada, Arce, Concha, Olivera, Pérez (doña Joanna) y Schneider, y señores Camaño, Cornejo, Rey y Saffirio (Boletín N° 16.781-04).

- Moción de los Diputados señoras Molina, Rojas, Schneider, Serrano y Tello, y señores Barría, Cifuentes, Cornejo, Durán (don Eduardo) y Rey (Boletín N° 16.881-04).

Se hace presente que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Corporación, la Comisión discutió solo en general esta iniciativa de ley, la que resultó aprobada por la unanimidad de sus integrantes presentes, Senadores señores Espinoza, Quintana, Sanhueza y Velásquez (4x0).

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

Establecer el deber del Estado y de los distintos actores del sistema educativo de adoptar medidas para la promoción de la buena

convivencia al interior de los establecimientos, resguardando que los estudiantes se eduquen en espacios libres de violencia, acoso y discriminación. Asimismo, propender al desarrollo de mecanismos para la protección de todos los integrantes de la comunidad educativa.

- - -

CONSTANCIAS

- **Normas de quorum especial:** No tiene.
- **Consulta a la Excma. Corte Suprema:** No hubo.

- - -

ASISTENCIA

- **Senadores no integrantes de la Comisión:** los Senadores señora Provoste, y señores Castro Prieto y Kusanovic.

- **Representantes del Ejecutivo e invitados:**

Del Ministerio de Educación: el Ministro señor Nicolás Cataldo; la Jefa Nacional de Convivencia para la Ciudadanía, señora María Teresa Ramírez; el Coordinador Legislativo, señor Leonardo Vilches; los asesores, señoras Francisca Córdova, Daniela Poblete, Valentina Ríos y Melissa Varas, y señores Eduardo Díaz y Sebastián Henríquez; y la periodista, señora Camila Canales.

De Subsecretaría de Prevención del Delito: la Subsecretaria, señora Carolina Leitaó; el asesor, señor Alonso Boegeholz; y la Asesora de Prensa, señora Leslie Neira.

De la Agencia de Calidad de la Educación: el Secretario Ejecutivo, señor Gino Cortez.

Del Observatorio de Salud Mental Chile: la Psicóloga especialista en Psiquiatría, señora Danae Cerda.

Del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva: la Directora, señora Verónica López; la Investigadora, señora Paula Ascorra; y el Encargado de Políticas Públicas, señor José Saúl Bravo.

De la Defensoría de la Niñez: el Defensor de la Niñez, señor Anuar

Quesille; la Jefa de Gabinete del señor Defensor, señora Grace Schmidt; y la profesional de Seguimiento de Legislación y Políticas, señora Katherine Llanos.

Del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile: el Presidente Nacional, señor Mario Aguilar; la Primera Vicepresidenta, señora Patricia Muñoz; el Segundo Vicepresidente, señor Guido Reyes; la Directora, señora Ligia Gallegos; y la Protesorera, señora Graciela Álvarez.

De Acción Educar: el Director Ejecutivo, señor Daniel Rodríguez.

De Escuelas Abiertas: la Directora Ejecutiva, señora María Teresa Romero, y la señora María Paz Larraín.

De la Fundación Trabün: el Director Ejecutivo, señor Juan Antonio Álvarez; y el el Director de Implementación, señor José Manuel Parodi.

De la Escuela Piloto Pardo de Valparaíso: la Directora, señora Gisela Rivera; y el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, señor Daniel Villegas.

De la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo: la Presidenta, señora Erika Castro; las Directoras, señoras Celinda García y Macarena Reyes; y la Vicepresidenta de FENORED, señora Marcia González.

De la Municipalidad de Temuco: el Alcalde, señor Roberto Neira; los asesores, señora Catalina Mardones y señor Miguel Pérez; y de la Comisión de Educación, las señoras Hilda Cuevas y Elba Balboa, y señores Héctor Segura y Héctor Vera.

Del Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón de Temuco: el Coordinador TP, señor Leonel Angulo.

De la Fundación Educación 2020: la Directora Ejecutiva, señora Ingrid Olea; y la Asesora de Incidencia, señora Francisca Koppmann.

Del Movimiento con mis hijos no te metas: la Presidenta, señora Ingrid Bohn.

De la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (CONFEPa): la Presidenta, señora Erika Muñoz.

De la Escuela de Educación Emocional (CECE): su Fundador, señor Juan Casassus.

- Otros:

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el asesor, señor Cristián Abarca.

De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Coordinador del Área Políticas Sociales, señor Luis Castro; y el investigador, señor Mario Poblete.

De la Fundación Jaime Guzmán: el asesor, señor Juan José Llorente.

Equipos parlamentarios: del Senador señor Castro Prieto, el asesor, señor Daniel Quiroga; del Senador señor García, el Jefe de Gabinete, señor Benjamín Sáenz, y la periodista, señora Andrea González; del Senador señor Kusanovic, los asesores, señores Benjamín Rodríguez y Sebastián Urrea; de la Senadora señora Provoste, los asesores, señor Enrique Soler y Rodrigo Vega; del Senador señor Sanhueza, la asesora, señora Carolina Navarrete; del Senador señor Quintana, los asesores, señora Sabina Quiroga y señor Cristóbal Barra; del Senador señor Velásquez, el asesor, señor Mauricio Vásquez; del Comité Partido Renovación Nacional, el asesor, señor Gustavo Baehr; y del Comité Partido Socialista de Chile: la asesora, señora Martina Riveros.

ANTECEDENTES DE HECHO

Para el debido estudio de este proyecto de ley, se ha tenido en consideración el mensaje y las mociones que le dieron origen, a saber:

- [Mensaje](#) de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font (Boletín N° 16.901-04).

- [Moción](#) de los Diputados señoras Ahumada, Arce, Concha, Olivera, Pérez (doña Joanna) y Schneider, y señores Camaño, Cornejo, Rey y Saffirio (Boletín N° 16.781-04).

- [Moción](#) de los Diputados señoras Molina, Rojas, Schneider, Serrano y Tello, y señores Barría, Cifuentes, Cornejo, Durán (don Eduardo) y Rey (Boletín N° 16.881-04).

ASPECTOS CENTRALES DEL DEBATE

El estudio de la iniciativa se enfocó en la pertinencia de abordar, integralmente y desde una perspectiva preventiva, los problemas asociados a

la convivencia educativa, que a lo largo del territorio ha generado graves consecuencias para las comunidades de los establecimientos escolares y parvularios.

Si bien hubo amplio consenso sobre la idea de legislar en torno a esta materia, los integrantes de la Comisión plantearon la necesidad de revisar algunos aspectos del proyecto en las etapas siguientes de tramitación. Más concretamente, hicieron un llamado por:

- Potenciar la figura del profesor jefe y diseñar incentivos adecuados para que los docentes asuman ese rol.

- Redefinir el papel de los orientadores escolares e inspectores en este ámbito.

- Asegurar una debida formación y capacitación de quienes se desempeñan al interior de los establecimientos educacionales.

- Reforzar la enseñanza de habilidades socioemocionales entre los alumnos.

- Fortalecer el vínculo entre los establecimientos y las familias de los estudiantes.

- Garantizar un efectivo trabajo intersectorial, a fin de manejar adecuadamente los múltiples factores que inciden en un mal clima educativo.

- Evitar una mayor carga administrativa para los docentes y equipos directivos.

- Reconsiderar los recursos con cargo a los cuales se financiarán las nuevas tareas que impone la proposición de ley.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL¹

A.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEBATE PRELIMINAR

Al iniciar el estudio de la proposición de ley, el **Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo**, efectuó una presentación², por medio de la cual revisó sus principales aspectos.

I. Antecedentes

Puso de relieve que la convivencia educativa es uno de los desafíos más sentidos y demandados por las comunidades educativas y la ciudadanía en general. En efecto, remarcó, un 56,52% de los padres declaran que los problemas de convivencia escolar son el motivo por el cual descartan un establecimiento, mientras que un 22,67% lo hace debido a conflictos en la relación entre los estudiantes y el personal del recinto educativo.

Añadió que constituye una de las principales preocupaciones para la gestión educativa post pandemia, debido al alza de situaciones de violencia, ausentismo docente y denuncias por conflictos en este ámbito.

La lógica de la mano dura, expresó, ha demostrado ser insuficiente para atender los problemas que se han presentado en este

¹ A continuación, figura el link de las sesiones transmitidas por TV Senado, que la Comisión dedicó al estudio en general del proyecto:

- Sesión de 22 de enero de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-01-22/065949.html>

- Sesión de 29 de enero de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-01-29/064643.html>

- Sesión de 5 de marzo de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-03-05/065136.html>

- Sesión de 12 de marzo de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-03-12/074514.html>

- Sesión de 19 de marzo de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-03-19/064102.html>

- Sesión de 26 de marzo de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-03-26/125305.html>

- Sesión de 9 de abril de 2025:

<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion/comision-de-educacion/2025-04-09/082615.html>

² El documento que utilizó como apoyo puede ser descargado desde el siguiente link:

<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/4a4212c4-2db1-4729-bec6-c9e95e2cf82c?includeContent=true>

campo. En tal sentido, sostuvo que, durante los últimos años, la cantidad de alumnos que han sido sancionados por Aula Segura o que, por otras vías, han sido expulsados es la más alta en el tiempo; sin embargo, la situación no ha mejorado.

Enseguida, hizo hincapié en que la convivencia educativa tiene un impacto directo en la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes. Es más, comentó que, ya desde los años 90', se concluyó que un buen clima es el factor que más influye en la escuela para efectos del aprendizaje.

Luego, subrayó que la Agencia de Calidad de la Educación ha estado monitoreando la convivencia con instrumentos que se incorporaron al Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), que identifican la situación de bienestar socioemocional de los alumnos. Señaló que, de acuerdo a los resultados de 2023, cuando las escuelas se constituyen como ambientes protegidos -esto es, lugares en que los estudiantes no son víctimas de agresiones por parte de sus compañeros- obtienen 28 puntos más en 4° básico en comparación con aquellas que no.

Agregó que, si bien hay un incremento de los casos de violencia, hay indicadores que permiten afirmar que aún se está a tiempo para abordar las causas de ese fenómeno. En esa línea, puntualizó que las mediciones demuestran que un 59,38% de los estudiantes de 4° básico indica que confía en sus compañeros, y que un 37,72% de los alumnos de II medio manifiestan que en su curso ayudan a mantener un ambiente tranquilo de clases. Es decir, constató, en 4° básico el escenario es más auspicioso, y eso se ve reflejado en mejores puntuaciones.

Resaltó que es indispensable orientar, durante toda la trayectoria educativa, la formación de ciudadanos respetuosos, que a través del diálogo y el buen entendimiento enfrenten los conflictos interpersonales y sociales. En este orden de ideas, relató que, desde el Ministerio se ha preferido hablar de la "convivencia educativa", en lugar de la "convivencia escolar", pues la convivencia es un aprendizaje que debe estar presente en todos los niveles del sistema, incluidos los iniciales.

Más adelante, consignó que, en los últimos años, se han presentado diversas iniciativas legislativas para regular aspectos específicos de la convivencia que, analizadas en conjunto, permiten identificar un propósito común, cual es asegurar que los establecimientos sean espacios protegidos para todos sus integrantes.

Comentó que la Cartera que dirige tomó en consideración algunas mociones parlamentarias para la elaboración del proyecto de ley en trámite, entre las cuales destacó las siguientes:

a) Acoso escolar y cyberbullying:

- Proyecto de ley, que modifica la Ley General de Educación, para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos de violencia al interior de los establecimientos educacionales ([Boletín N° 11.963-04](#)).

- Proyecto de ley, que modifica la Ley General de Educación y la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, para reforzar la normativa sobre convivencia escolar, considerando el respeto de la identidad sexual y de género, y sancionar toda forma de discriminación basada en estas circunstancias ([Boletín N° 13.893-04](#)).

- Proyecto de ley, que modifica la Ley N°20.370, General de Educación, en materia de ciberacoso o cyberbullying ([Boletín N° 12.022-04](#))

b) Prevención del delito juvenil y protección de trayectorias: proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas ([Boletín N° 15.895-04](#)).

c) Salud mental y educación socioemocional:

- Proyecto de ley, que modifica la Ley N° 20.370, General de Educación, para crear la figura del coordinador de buena convivencia escolar ([Boletín N° 16.781-04](#)).

- Proyecto de ley, que Modifica la Ley N° 20.370, General de Educación, en materia de gestión del acoso escolar ([Boletín N° 16.881-04](#)).

d) Bienestar de los equipos educativos:

- Proyecto de ley, que modifica la Ley N° 20.370, General de Educación, para fortalecer la protección del personal docente y otros profesionales de la educación ante situaciones de violencia, y rinde homenaje póstumo a la profesora Katherine Yoma ([Boletín N° 16.706-04](#)).

- Proyecto de ley, que modifica diversos cuerpos legales para otorgar mayor protección a personas que ejerzan funciones en posición de garante, en situaciones de violencia corporal o psicoemocional ([Boletín N° 16.721-07](#)).

II. Datos de contexto

Con posterioridad, remarcó que el incremento de las denuncias relativas a la convivencia genera una sobredemanda institucional que repercute en órganos como la Superintendencia de Educación. Al efecto,

planteó que:

- Un 72,1% de las denuncias recibidas por la referida Superintendencia dicen relación con situaciones de convivencia.

- Ha habido un 34% de aumento de denuncias por discriminación, lo que representa el 70,9% del alza total de las denuncias de convivencia.

En lo tocante al SIMCE, detalló que sus resultados dan cuenta de:

- Un incremento de los estudiantes en 4° básico que perciben “discriminación por la propia personalidad y forma de ser”.

- Un aumento entre los alumnos de II medio de la “normalización de la violencia como mecanismo de interacción”.

III. Diagnóstico

Pese a los esfuerzos que se han hecho desde la perspectiva legislativa y administrativa, enunció que existe una percepción generalizada entre distintos actores del sistema en cuanto a que existen impedimentos para abordar de manera integral y oportuna los desafíos de la convivencia educativa, dificultando que los establecimientos sea espacios protegidos y de bienestar para todos sus integrantes. En esta línea, expresó que se han detectado los siguientes fenómenos:

- a) Marco normativo con concepciones contradictorias de convivencia escolar (Ascorra et al, 2019).

- b) Falta de institucionalización de estrategias y de articulación de las respuestas respecto a conflictos de grave vulneración de derechos (UNICEF, 2021).

- c) Encargados de Convivencia enfocados en la contingencia, con escaso dominio sobre su tiempo y tareas, y cuyo quehacer está orientado a las acciones individuales (Cortez & Zoro, 2018).

- d) Aumento en la resolución violenta de conflictos, ausentismo docente; y demandas de apoyo en salud mental (Agencia de Calidad de la Educación, 2018; Educación 2020 & ACHS, 2021; Bellei & Contreras, 2024).

IV. Recomendaciones de instancias técnicas

Más adelante, hizo presente que, en el contexto de la redacción de la iniciativa, se tuvieron en consideración las sugerencias efectuadas por el Consejo Asesor para la Convivencia Educativa y la Mesa Técnica de Espacios Protegidos, instancias en que participaron expertos, académicos y

comunidades educativas.

V. Análisis del proyecto de ley en estudio

1. Objetivo general

A continuación, señaló que esta proposición legislativa se enmarca en una serie de esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación para atender la base de los conflictos que surgen al interior de las comunidades educativas.

Puso de relieve que se propone abordar la convivencia desde un enfoque formativo; esto es, dimensiona la convivencia con un aprendizaje transversal de la trayectoria educativa, fijando una regulación de carácter general, con énfasis en:

- a) Promoción de la buena convivencia.
- b) Prevención de hechos de violencia, acoso y discriminación.
- c) Mitigación de los factores de riesgos, y actuación oportuna y coordinada.

Añadió que el propósito es resguardar los derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa, para lo cual se dispone una actualización institucional y mejoras en la gestión interna.

2. Ejes de la iniciativa

2.1. Rol del Estado en la promoción de la buena convivencia y orientación general hacia un enfoque pedagógico

En lo que concierne a este eje del proyecto, destacó las siguientes ideas:

- Se consagra la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) -que en la práctica ha operado desde el año 2002- como una política permanente del Ministerio que establece un marco general para el sistema, proporcionando lineamientos y orientaciones a la educación parvularia y escolar.

- Se establecen líneas de coordinación permanente desde el Ministerio de Educación con otras Carteras, en el marco del desarrollo y ejecución de la PNCE.

- Respecto a la Superintendencia de Educación, se reestructura la línea de reclamos y se consagra la de gestión colaborativa de conflictos,

cuyo objeto es formar a las comunidades educativas y mejorar sus capacidades, otorgando atribuciones alternativas a la fiscalización y sanción.

- Se encomienda a la Agencia de Calidad de la Educación implementar el Sistema Nacional de Monitoreo de la Convivencia Educativa, a fin de contar con información adecuada para tomar decisiones a nivel de la política pública, y proveer a los establecimientos herramientas para su seguimiento interno.

2.2. Nuevo estándar para la gestión de la convivencia en establecimientos: rol de coordinación y los instrumentos de gestión

En lo tocante a este punto, revisó las innovaciones que constan enseguida:

- Se introducen modificaciones a la regulación del Plan de Gestión de Convivencia y los Reglamentos Internos de los establecimientos.

- Se impone la obligatoriedad de todos los establecimientos de contar con un coordinador de convivencia de dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades.

- Se contempla una adecuación normativa para habilitar el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial para cubrir brechas horarias.

2.3. Reforzamiento y precisión de los deberes de los sostenedores y establecimientos

En términos generales, planteó que la iniciativa ahonda en los deberes de sostenedores y establecimientos respecto a la prevención y actuación para el adecuado resguardo de los integrantes de la comunidad. Así, subrayó, se busca un efectivo control de los protocolos, pero al mismo tiempo, evitar una sobrecarga de los equipos directivos y docentes para responder frente de la Superintendencia. Hoy en día, enunció, los conflictos escalan fuera de los establecimientos, tensionando aún más la convivencia y deteriorando el rol de liderazgo pedagógico que deben tener los equipos directivos.

En esa línea, se refirió a los siguientes:

- Deber de los integrantes adultos de la comunidad de informar cualquier hecho de que tomen conocimiento y que pueda constituir conductas de acoso, violencia o discriminación.

- Deber del establecimiento de adoptar medidas preventivas de

protección y activar los protocolos respectivos de forma oportuna.

- Deber del sostenedor de garantizar la actuación oportuna e idónea del establecimiento para la protección de cualquier integrante de la comunidad.

- Deber del sostenedor de garantizar, a través del director del establecimiento, la promoción de la participación de la comunidad y, especialmente, facilitar y proporcionar las condiciones y medios para la conformación y desarrollo de las instancias de participación que determina la normativa educacional.

2.4. Promoción y protección del bienestar de los equipos educativos

Sobre el particular, hizo hincapié en que:

- Se busca reconocer las características específicas del sector educación a propósito del deber de prevención del acoso sexual laboral, acoso laboral y violencia en el trabajo.

- Se introduce regulación especial en torno a las medidas de protección de trabajadores afectados por agresiones ejercidas por estudiantes, apoderados u otros.

- Se incorporan indicadores de convivencia y seguridad en la calificación de enfermedades profesionales de patologías de salud mental.

- Se refuerza el deber de protección de docentes y asistentes de la educación frente a hechos constitutivos de delito, imponiendo la obligación del establecimiento de denunciar a todo evento (a través del director) y la asistencia jurídica al trabajador agredido por terceros.

3. Aspectos a perfeccionar

Finalmente, reconoció que aún hay espacios de mejora del articulado. En este orden de ideas, recalcó que es posible:

- Fortalecer la coordinación, la actuación interinstitucional y la colaboración de los Ministerios que se relacionan con este tema; especialmente, con el Ministerio del Interior, para ajustar y orientar la oferta pública en el seguimiento, monitoreo e intervención de la prevención del delito juvenil, y el resguardo de la seguridad de los entornos de los establecimientos.

- Profundizar en una regulación que entregue herramientas específicas que aborden las necesidades propias de los trabajadores de la

educación para la prevención, el cuidado y el reconocimiento de enfermedades profesionales, por medio de la creación de instrumentos técnicos orientadores de las entidades administradoras. Agregó que la colaboración entre las Carteras de Educación y del Trabajo en la elaboración y aplicación de instrumentos de evaluación diagnóstica es un elemento clave, y también lo es el reforzamiento del trabajo de las entidades fiscalizadoras de ambos Ministerios.

Finalizada la exposición, intervinieron los señores Senadores presentes.

La **Senadora señora Aravena** manifestó que las cifras entregadas por el señor Ministro, aunque denotan un escenario muy grave en materia de convivencia, no causan sorpresa. A modo ilustrativo, comentó el caso de un profesor de la Región de La Araucanía que, no teniendo problemas de salud y pudiendo seguir haciendo clases, optó por retirarse apenas cumplió la edad de jubilación, ya que no quería continuar rodeado del clima escolar actual. Esta clase de situaciones son todavía más preocupantes, si se tiene presente el déficit de docentes que afecta al país.

En su opinión, es necesario ahondar en los problemas de salud mental de los miembros de las comunidades educativas, toda vez que tienen un alto impacto en el ámbito de la convivencia. Indicó que hay patologías que no están siendo detectadas en los estudiantes y que están generando conflictos al interior de los recintos educacionales, añadiendo que los docentes no están capacitados para abordar esta realidad. Tal como se realizan controles médicos de salud física, estimó que deberían implementarse evaluaciones de salud mental para detectar y tratar a tiempo algunas enfermedades.

El **Senador señor Quintana** concordó en cuanto a la incidencia que los problemas de salud mental tienen en el clima en los establecimientos educacionales.

En tanto, el **Senador señor Sanhueza** solicitó informar sobre el financiamiento destinado a esta proposición de ley.

A su turno, el **Senador señor Velásquez** sostuvo que es indispensable revisar los planes de formación de los docentes en esta área. Tal vez, coligió, es necesario reforzar las capacitaciones y el perfeccionamiento, respetando la autonomía de los SLEP y, en general, de las organizaciones educativas.

Seguidamente, remarcó que, de acuerdo a ciertos estudios, la falta de liderazgo de los equipos directivos influye también en los conflictos de convivencia. No obstante, previno que la capacitación en este ámbito es insuficiente y, generalmente, se limita a la realización de algunos seminarios.

Por último, aseveró que los inconvenientes que se advierten en los establecimientos educacionales son reflejo de un clima social complejo.

Coincidió con este último punto el **Senador señor Quintana**, quien recalcó la importancia de una debida coordinación interinstitucional para abordar el problema en comento desde una perspectiva integral.

Luego, el **señor Ministro** constató que el vínculo interinstitucional con el área de la salud dice relación, esencialmente, con temas de salud mental. Asimismo, relató que desde el Ministerio de Educación también se están haciendo esfuerzos en algunas líneas que permiten avanzar en esta materia. Así, por ejemplo, informó que se ha reforzado el Programa Habilidades para la Vida, el cual cuenta con una larga trayectoria y evaluaciones positivas. Con todo, reconoció que, por el alto costo que implica, su alcance todavía es algo limitado.

Afirmó que, para solucionar esa y otras dificultades, es imprescindible la coordinación, y la colaboración entre las Carteras y reparticiones públicas involucradas. Sin embargo, observó que ese diálogo hoy no se desarrolla de manera apropiada; de ahí que el proyecto de ley busca fortalecer el trabajo interinstitucional y de ese modo entregar una respuesta adecuada a cada fenómeno. Teniendo presente lo anterior, consignó que no correspondería que por medio de esta iniciativa se regulen asuntos que son propios del Ministerio de Salud.

En lo tocante al financiamiento, destacó que los recursos adicionales estarán enfocados en reforzar la capacidad de la Superintendencia de Educación y, más concretamente, en reforzar los equipos de gestión colaborativa de conflictos. Por su parte, agregó, los montos de la Subvención Escolar Preferencial que se pondrán a disposición permitirán cubrir las necesidades asociadas a los coordinadores de convivencia.

Refiriéndose, después, a la formación docente en materia de convivencia, sugirió a la Comisión escuchar a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE); el Consejo Nacional de Decanos de las Facultades de Educación de las Universidades de Chile (CONFAUCE); y a la Corporación de Universidades Privadas (CupChile).

En cuanto a la falta de liderazgo de los equipos directivos, dijo coincidir en que es un factor que influye en el ámbito de la convivencia educativa. Al efecto, planteó que el Ejecutivo está trabajando en un proyecto de trayectorias directivas que, al menos, debería quedar ingresado en este gobierno para su posterior discusión.

A continuación, el **Senador señor Velásquez** comentó que, antes,

se intentaba resolver los conflictos al interior de las unidades educativas; en cambio, ahora se tiende a externalizarlos a la Superintendencia, los tribunales, etcétera. A su juicio, los orientadores escolares de los propios establecimientos deberían jugar un rol más importante a la hora de solucionar las dificultades de convivencia.

El **Senador señor Quintana** estimó que esta iniciativa representa una gran oportunidad para contribuir a resolver los inconvenientes que se han detectado en materia de clima educativo. Junto con reforzar los actuales dispositivos disponibles, señaló que es pertinente pensar en nuevas herramientas que puedan crearse.

Después, el **señor Ministro** declaró que la iniciativa es ambiciosa, en cuanto busca aplicar una concepción diferente a la actual en relación con la convivencia, agregando que esta será la primera regulación que abarque este fenómeno de forma más integral, no centrándose únicamente en los estudiantes. En ese sentido, subrayó que no se puede dejar de lado la situación de toda la comunidad educativa -incluyendo al personal-, pues de otra manera, la mirada sería incompleta. Con todo, aclaró que el proyecto no contiene una propuesta de ley marco en este ámbito, sino que constituye un primer paso para hacerse cargo de las dificultades del clima educativo desde un punto de vista más global.

Enseguida, el **Senador señor Quintana** indicó que un punto a tratar durante la discusión será la contribución que pueden hacer las escuelas y liceos para mejorar el clima de inseguridad que existe en el país.

B.- EXPOSICIONES DE LOS INVITADOS Y DEBATE SUSCITADO EN LA COMISIÓN CON OCASIÓN DE ELLAS

1. Observatorio de Salud Mental Chile³

La **sicóloga y representante del Observatorio de Salud Mental Chile, señora Danae Cerda**, realizó una presentación, que dividió en los siguientes puntos:

I. Concepto de convivencia educativa

Puntualizó que, de conformidad con la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030, la convivencia educativa se refiere al conjunto de interacciones y relaciones que se dan entre los miembros de una comunidad educativa, incluyendo estudiantes, padres, educadores, asistentes de la educación, directivos y sostenedores.

³ El documento acompañado puede ser revisado en el siguiente link:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/a5aefcb8-12f0-4601-bd18-ebef803e9ad2?includeContent=true>

II. Enfoque de los aportes y sugerencias

Declaró que los comentarios que realizaría respecto de la iniciativa estaban inspirados en una mirada constructiva que busca fortalecer y potenciar el bienestar de las comunidades educativas.

Desde su génesis en 2018, relató, el Observatorio de Salud Mental está centrado en la educación y la salud mental, principalmente, a través del Programa de Acompañamiento Psicosocial para Comunidades Educativas, el cual mide, previene, analiza, controla y mitiga los riesgos psicosociales de convivencia en los establecimientos del país. Asimismo, señaló que el referido programa ha sido patrocinado por los dos últimos gobiernos.

III. Programa de Acompañamiento Psicosocial para Comunidades Educativas

1. Objetivos

En lo tocante a las acciones que se desarrollan, indicó que todas ellas están orientadas a cambiar el paradigma desde lo reactivo a lo preventivo, lo que supone implementar mecanismos para:

- a) Evaluar - prevenir.
- b) Activar - mitigar.
- c) Psicoeducar - mantener.

Añadió que todas las actividades se dan en el marco de una medición continua, que permite lograr mejoras.

2. Proceso – metodología

Acerca de este asunto, exhibió la siguiente lámina, que da cuenta de los distintos pasos y herramientas del Programa:

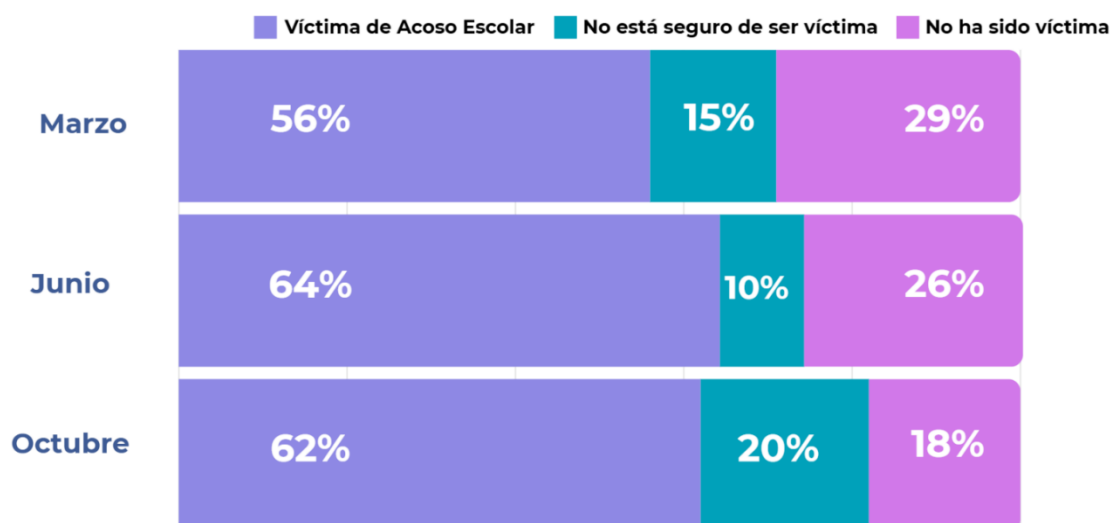


Enseguida, expresó que, afortunadamente, varios de estos elementos están presentes en el proyecto de ley. Así, por ejemplo, mencionó que está contemplada la atención de equipos multidisciplinarios -que incluye una vinculación con el área de la salud- y el uso de la tecnología para emitir alertas.

En su opinión, la metodología a aplicar debe responder a una expansión nacional, que vaya desde los establecimientos a las comunas respectivas, y luego a cada región para finalmente llegar a todo el territorio.

3. Índices de acoso escolar

Más adelante, manifestó que las mediciones de 2024 tuvieron los siguientes resultados en materia de acoso escolar:



Al efecto, planteó que las cifras son muy elevadas y que la tendencia es que la situación empeora durante el año. Esto da cuenta de la necesidad de fortalecer las medidas que se están adoptando e introducir otras nuevas

IV. Oportunidades de mejora y recomendaciones

1. Artículo 1° número 2) de la iniciativa, que propone reemplazar el artículo 15 de la Ley General de Educación por otro

Al efecto, sugirió agregar que el equipo de convivencia educativa tendrá como uno de sus objetivos gestionar la medición de la convivencia educativa, convocando a diversas organizaciones que analicen (mensual o trimestralmente) y entreguen soluciones concretas y personalizadas a cada comunidad educativa.

En su opinión, si las tareas de análisis y diseño de soluciones quedan entregadas a los equipos de los establecimientos, estos se verán sobreexigidos y no podrán cumplir adecuadamente los objetivos de la ley.

Adicionalmente, sentenció que la medición debe ser mensual o trimestral, ya que una menor frecuencia puede llevar a que los conflictos se vuelvan más graves.

2. Artículo 4° número 1) del proyecto, que incorpora un artículo 11 bis, nuevo, a la ley N° 20.529

Acerca de la letra b) del inciso primero del artículo 11 bis propuesto, recomendó disminuir la frecuencia con que deben ser ejecutadas las tareas que allí se contemplan. Más concretamente, instó por sustituir el carácter bienal del informe que debe emitir la Agencia de Calidad de la

Educación por uno trimestral. Del mismo modo, abogó por que el reporte de la Superintendencia de Educación deba ser elaborado mensualmente y no una vez al año. Afirmó que la temporalidad de las medidas es central para lograr mejoras sustanciales, que tengan bases sólidas.

En lo tocante a la letra c) del mismo artículo, hizo un llamado a incluir a las organizaciones expertas dentro de las entidades con que pueden celebrarse convenios de interoperabilidad para disponer de informes, bases de datos y estudios, toda vez que los antecedentes que se encuentran a disposición de los órganos administrativos podría ser insuficiente. Además, propuso que la sistematización de las bases de datos intersectoriales se realice cada mes y no anualmente.

3. Correlación de temporalidad e incidencia de riesgos psicosociales en materia de convivencia educativa

Insistió en que una menor frecuencia de las acciones aumenta los riesgos psicosociales, y de ahí la importancia de realizar mediciones constantes y sistematizadas.

4. Reforzamiento de la obligatoriedad

A su juicio, es pertinente procurar que el articulado sea más categórico y menos ambiguo respecto a la obligatoriedad de la implementación de los procesos en las comunidades educativas (como los relativos a mediciones, programas, acciones, plazos, etcétera).

V. Comentarios finales

Por último, valoró que la propuesta no solo se aboque a sancionar las transgresiones del marco regulatorio, sino que incluye pilares fundamentales para mejorar la convivencia; esto es, la prevención, la medición y la mitigación de los factores psicosociales.

A su parecer, la iniciativa posibilita avanzar hacia un cambio de paradigma desde lo reactivo -cuando es más complejo resolver los conflictos- a lo preventivo.

2. Centro de Investigación para la Educación Inclusiva⁴

La **Investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señora Paula Ascorra**, valoró la tramitación de este proyecto de ley, toda vez que entregará un marco regulatorio que permitirá articular políticas de convivencia y resolver algunos déficits que aún no están

⁴ La presentación puede ser descargada desde:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/774412fc-e637-4b96-a95b-9fb431546dc5?includeContent=true>

solucionados. Luego, efectuó una exposición centrada en resultados de distintas investigaciones⁵.

1. Estado actual de la convivencia y la violencia en espacios educativos

Revisó algunos resultados del SIMCE -entre 2014 y 2022- que están vinculados a esta materia y se refirió a las conclusiones que pueden obtenerse a partir de ellos respecto a:

1. Relaciones entre estudiantes:

- 4° básico: la situación ha mejorado y, muy especialmente, en los establecimientos públicos. Los colegios particulares pagados se han mantenido más estables, pero su nivel de mejora es más bajo.

- II medio: los que más han empeorado en el tiempo son los colegios particulares pagados, seguidos por los particulares subvencionados.

2. Relaciones con los profesores:

- 4° básico: todos los tipos de establecimientos han mejorado, aunque levemente. Las instituciones públicas son las que experimentan el mayor nivel de mejora.

- II medio: hay una disminución de la calidad de las relaciones con los profesores, aunque no es tan pronunciada.

3. Sentimiento de discriminación múltiple (violencia indirecta):

- 4° básico: se ha visto un incremento de esta clase de discriminación en todas las clases de dependencias.

- II medio: ha disminuido en el tiempo en todos los establecimientos.

4. Victimización entre alumnos (violencia directa):

- 4° básico: ha habido un descenso significativo, fruto de una política que ha funcionado exitosamente.

- II medio: la violencia ha aumentado en todo tipo de establecimientos, alcanzando todos ellos niveles similares.

Más adelante, explicó que las variables convivencia y violencia

⁵ Los autores de cada estudio se encuentran debidamente citados en el documento señalado en la nota anterior.

son distintas y, en ese sentido, indicó que podría darse el caso de una mejora de la convivencia, con altos grados de control y un bajo nivel de participación, que igualmente dé lugar a episodios de violencia. Añadió que las acciones orientadas a mejorar la convivencia son de un orden totalmente diferente a aquellas que buscan enfrentar hechos de violencia. Detalló que en relación con la convivencia se aplican estrategias promocionales, que buscan generar contextos en que se puedan desarrollar relaciones positivas; en cambio, las acciones que se adoptan frente a la violencia buscan erradicarla y no pretenden dar paso a un contexto.

Puso de relieve que los principales factores que inciden en los problemas de convivencia y la violencia son el carácter punitivo de la regulación; el tipo de participación en las escuelas; y la exclusión de ciertos grupos de personas. Luego, ahondó en cada uno de ellos.

II. Énfasis e impacto del enfoque punitivo

Expresó que las prácticas punitivas consisten en sanciones contra estudiantes que implican el abandono de la clase por un período significativo de tiempo, y que no suponen diálogo ni reparación.

Previno que su aplicación se asocia a un peor desempeño -tanto individual como del establecimiento educacional- en el SIMCE, en los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS), y en el ingreso a la educación superior. En esa línea, planteó que aquellos establecimientos que más aplican una disciplina punitiva:

- Caen entre 9 y 10 puntos en la prueba SIMCE.
- Disminuyen un 6% la probabilidad de ingreso a la educación superior.

Advirtió que esta clase de medidas son ampliamente utilizadas en unidades educativas de todas las dependencias y, muy especialmente, respecto de estudiantes hombres, de nivel socioeconómico bajo, con sobriedad y con déficit atencional. Este escenario, manifestó, da cuenta de la necesidad de implementar políticas focalizadas orientadas a ajustar la reglamentación interna de los establecimientos.

En atención a las consideraciones precedentes, hizo hincapié en que es indispensable un cambio de enfoque, para ir de lo punitivo a lo formativo. En este orden de ideas, destacó que:

- El clima escolar positivo es un factor protector, pues reduce la probabilidad de recibir prácticas de disciplina punitiva, tanto a nivel individual (el estudiante que percibe un mejor clima) como de establecimiento (los estudiantes tienen un alto grado de percepción de buen clima escolar).

- Los equipos de convivencia escolar han transitado de enfoques reactivos hacia estrategias preventivas y promocionales, implementando talleres y actividades que fomentan habilidades socioemocionales, lo que resulta valorable.

III. Relevancia de la participación

Resaltó que, en Chile, los estudios muestran que las políticas no han facilitado las condiciones para garantizar la participación como una práctica institucionalizada. Citó algunas de las conclusiones que han arrojado las investigaciones:

- La participación de los estudiantes tiende a ser restringida, tutelada y decorativa; y alejada de sus intereses y de una aplicación práctica.

- La participación de los apoderados tiende a ser consultiva, con “mayor” incidencia en la toma de decisiones.

- La participación de los profesores tiende a ser consultiva respecto a limitadas decisiones institucionales.

- Los espacios de participación interstamental son escasos y restrictivos; y actualmente, solo se garantizan a través los consejos escolares para establecimientos con aportes del Estado.

- Se ha observado que en los reglamentos internos se vulnera el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes.

- La participación se ha abordado desde un enfoque cognitivo y no experiencial; y hay una baja capacidad reflexiva, pensamiento crítico y habilidades ciudadanas.

- La implementación de los planes de formación ciudadana es irregular y los establecimientos los realizan motivados por la necesidad de cumplir con la normativa vigente, teniendo escasa relevancia práctica.

Después, se refirió al porcentaje de estudiantes que dice estar de acuerdo con diferentes dimensiones de participación y formación ciudadana en 2018 y 2022:

- Ante la afirmación “he colaborado en actividades del curso”: en 4° básico la cifra disminuyó de 68% a 61%, mientras que en II medio subió de 17% a 22%. A su juicio, la diferencia entre ambos niveles dice relación con la también distinta calidad de la convivencia que fue revisada antes.

- En materia de vida democrática, ante la aseveración “en el

colegio se organizan debates sobre temas de interés público”, el porcentaje creció de 40% a 47% entre alumnos de II medio, cifra que sigue siendo bastante baja.

- El porcentaje de adolescentes entre 15 y 17 años que ha participado activamente en centros de alumnos o federaciones estudiantiles pasó de 12% a solo un 15%.

En síntesis, recalco, la cultura de la participación aun no está plenamente desplegada ni institucionalizada en el sistema escolar, constituyendo un importante desafío para las comunidades educativas.

Constató que, de acuerdo a la evidencia, en los establecimientos más participativos, donde los estudiantes pueden expresar sus opiniones y son escuchados, se desarrolla un mayor sentido de pertenencia, se mejora el clima escolar, y hay menores tasas de abandono. De ahí que, a su juicio, es correcto hablar de “convivencia democrática”, tal como planteaba el texto originalmente. Como alternativa, puntualizó que tal expresión podría ser reemplazada por “convivencia participativa”.

Advirtió que, en el país, generalmente, se asocia la convivencia únicamente al buen trato y al respeto, dejando fuera la dimensión de la participación -especialmente de los alumnos-; en tanto, en el ámbito internacional, la gran mayoría de los estudios sí considera este eje. Añadió que es por ello que, a nivel nacional, solo se logra mantener una paz negativa, que implica conservar el control entre los alumnos, sin que estos puedan manifestar lo que piensan. En ese sentido, comentó que los jóvenes en Chile declaran “obedecer” a los adultos, mientras que en el contexto anglosajón ellos dicen “respetar” a los adultos.

En definitiva, estimó que la participación es un eje que debería ser considerado como una estrategia promocional de la convivencia y como un factor protector contra la violencia.

IV. Formación y jornada de los coordinadores de convivencia educativa

Más adelante, recordó que la iniciativa considera a un coordinador de convivencia educativa -y ya no a un encargado de convivencia escolar-, lo que resulta interesante, pues da cuenta de la existencia de un equipo a cargo de la materia.

Luego, revisó algunos aspectos vinculados a los actuales encargados:

- Distribución de profesionales: el 67% de los establecimientos cuenta con un equipo compuesto por el encargado de convivencia escolar y

otros profesionales, mientras que el 33% tiene únicamente un encargado. Expresó que hay un espacio para mejorar; no obstante, hay un importante nivel de avance.

- Título de los encargados de convivencia: un 49.3% posee título de profesor, un 23.8% de psicólogo y 13.9% de trabajador social. Señaló que ello da cuenta de la profesionalización de este rol, lo que resulta valioso.

- Formación continua: la mayoría de los profesionales (77.4%) ha participado en charlas o talleres, y solo un 3.7% ha cursado un magíster en los últimos dos años (este grupo se concentra en dependencias particulares pagadas y zonas urbanas). Este aspecto, remarcó, es problemático, ya que solo estudios más profundos permiten un cambio efectivo en la manera de ejercer el cargo. Agregó que el proyecto no aborda claramente este asunto, indicando que se debería especificar las exigencias de ingreso al cargo, el aporte que debe hacer el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), el rol de la Superintendencia, etcétera.

- Condiciones laborales: la mayoría de los profesionales en convivencia escolar se encuentra contratado indefinidamente o a plazo fijo con 44 horas de dedicación semanal (70.6% y 64.2%, respectivamente), lo que demuestra las mejoras que se han producido en este ámbito.

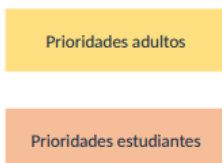
Hizo hincapié en que los establecimientos con mejores Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) se asocian a profesionales involucrados en la gestión de la convivencia escolar que tienen formación continua en la materia. En definitiva, razonó que la formación hace una diferencia importante.

V. Consideración de un enfoque de género y diversidades

Posteriormente, consignó que debería abrirse la discusión para incluir en los reglamentos internos de las escuelas ciertas necesidades que plantean los propios estudiantes. Enseguida, se refirió a algunos estudios realizados en Valparaíso, con muestras representativas, que arrojan algunos resultados interesantes para el debate de este asunto:

1. En primer término, revisó una investigación en que se preguntó a los integrantes de las comunidades educativas por aquellos aspectos que identificaban como prioritarios para la educación del futuro. Enunció que los adultos -con independencia de su estamento- entregaron respuestas coincidentes en relación con fortalecer la educación, transparentar la administración y lograr una formación integral. Detalló que los estudiantes mostraron interés, además, por impulsar una educación no sexista (61,3%). Todo ello se refleja en la siguiente tabla:

Preocupación de los estudiantes por implementar una educación no sexista (caso Valparaíso)



Objetivos	Muestra completa (N=1019)	1. Apoderados (N=72)	2. Directivos (N=53)	3. Profesores (N=111)	4. Asistentes de la Educación (N=79)	5. Estudiantes (N=704)	Post-hoc
	% (DE)	% (DE)	% (DE)	% (DE)	% (DE)	% (DE)	
Fortalecer educación	69,6% (.46)	66,7% (.47)	73,6% (.44)	88,3% (.32)	78,5% (.41)	65,7% (.47)	3>1, 2, 4, 5
Transparentar administración	43,2% (.50)	43,1% (.50)	45,3% (.50)	64,9% (.48)	58,2% (.50)	38,0% (.49)	3, 4>1, 2, 5
Lograr formación integral	55,6% (.50)	61,9% (.49)	67,9% (.47)	65,8% (.48)	54,4% (.50)	52,6% (.50)	1=2=3=4=5
Impulsar educación no sexista	52,8% (.50)	41,6% (.50)	11,3% (.32)	31,5% (.47)	44,3% (.50)	61,3% (.49)	5>4, 1, 3>2
Integrar escuelas	33,3% (.47)	31,9% (.47)	26,4% (.44)	31,5% (.47)	29,1% (.46)	34,7% (.48)	1=2=3=4=5
Vinculación universidades	25,4% (.44)	25,0% (.44)	18,9% (.39)	14,4% (.35)	15,2% (.36)	28,9% (.45)	5, 1>2, 3, 4

Fuente: Ascorra et al. (2024)

Explicó que, entonces, los temas que preocupan a los alumnos no son los mismos de los adultos y, pese a ello, el país ha operado con un enfoque adultocéntrico que genera desmotivación entre los niños y jóvenes por sus escuelas.

2. En segundo lugar, se refirió a un diagnóstico en la Región de Valparaíso sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, en el marco del cual se consultó por distintos tipos de victimización. Al efecto, revisó las respuestas entregadas por hombres (H), mujeres (M) y personas que se identifican dentro de otros grupos (O):

Victimizaciones	Vida%	ranking	H%	M%	O%
delitos comunes	30,1	2	32,7	23	41,9
por cuidadores	23,3	4	18,2	27,2	47,7
por pares	25,3	3	23,1	26,5	45,3
sexuales	7,4	7	9,2	26,6	48,6
indirectas en la comunidad	40,9	1	40,1	40,3	67,3
indirectas en la familia	11,7	6	8,7	13,5	32,4
digitales	20,4	5	16	30	51,4

Fuente: Diagnóstico Regional sobre los derechos de la niñez, adolescencia y juventud en la Región de Valparaíso (2024)

Acerca de los resultados, puso de relieve que quienes pertenecen a otras identidades sexogenéricas perciben una mayor vulneración de sus derechos y, por lo tanto, sería pertinente estudiar la necesidad de adoptar políticas focalizadas o analizar si es necesario hacer mención especial a ciertas situaciones.

VI. Importancia del abordaje intersectorial

Más adelante, consignó que es urgente conectar las necesidades de los establecimientos con sectores diferentes al de la educación.

1. Eje salud (Ministerio de Salud)

En este ámbito, destacó lo siguiente:

- La OMS reporta que el 20% de niños, adolescentes y jóvenes chilenos padecen de algún tipo de enfermedad mental (2022).

- Un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo señaló que durante la pandemia la sensación de agobio de niños, niñas y adolescentes aumentó en un 52%.

- Se ha evidenciado una falta de acceso a atenciones de salud mental para estudiantes derivados desde establecimientos educativos al intersector, así como de una baja calidad de ellas en el sector público.

2. Eje seguridad (Ministerio de Seguridad Social, y Ministerio de Desarrollo Social y Familia)

Al efecto, entregó los siguientes antecedentes:

- La evidencia muestra que los nuevos territorios ocupados por el narcotráfico se correlacionan positivamente con violencia, pobreza y mayor rezago escolar.

- La proximidad a los barrios ocupados por el narcotráfico es un predictor de niveles más bajos de rendimiento y nivel socioeconómico a nivel de escuela.

- Estar expuesto a una nueva zona roja de narcotráfico tiene un efecto negativo sobre el desempeño escolar en octavo grado, controlando por rendimiento previo y selección. Al sumar los efectos directos e indirectos el efecto total alcanza hasta un 20% de una desviación estándar en los puntajes de matemáticas de los estudiantes permanentes.

VII. Recomendaciones

Finalmente, realizó una serie de propuestas sobre la base de la evidencia examinada a lo largo de su presentación:

1. Garantizar instancias equitativas de participación en todos los tipos de dependencia escolar, asegurando que ningún establecimiento quede excluido, ya que promover la participación activa de la comunidad escolar contribuye a la reducción de la violencia escolar.

2. Consolidar el cambio de un enfoque punitivo a uno formativo en la gestión de la convivencia escolar, puesto que las prácticas punitivas afectan negativamente los aprendizajes y las trayectorias educativas, mientras que una mirada formativa favorece el desarrollo integral de los estudiantes.

3. Asignar dedicación exclusiva a los coordinadores de convivencia educativa, estableciendo como requisito una formación o capacitación especializada.

4. Incorporar un enfoque de género y diversidades en las políticas de convivencia escolar, con el fin de atender la polivictimización, y responder a los intereses y necesidades de los estudiantes.

5. Implementar un abordaje intersectorial e interinstitucional para responder ante las crecientes complejidades que enfrentan los establecimientos educativos, promoviendo la articulación entre educación, salud, protección de derechos y otros sectores clave.

Al término de las dos exposiciones anteriores, los señores Senadores presentes efectuaron sus reflexiones y consultas.

El **Senador señor Quintana** valoró que se hayan entregado datos reunidos a partir de investigaciones, ya que constituyen un insumo importante para el debate de un tema que debe ser resuelto con urgencia.

Dijo compartir las afirmaciones realizadas en torno a la importancia de la participación de las comunidades educativas para mejorar la convivencia, y la relevancia de la formación y capacitación de los profesionales dedicados a este ámbito. Asimismo, señaló que, de acuerdo a su experiencia en terreno, la educación no sexista y la preocupación por la discriminación contra grupos de las diversidades sexogenéricas, son temas que generan un alto interés entre los estudiantes.

Después, el **Senador señor Sanhueza** coincidió en que los problemas de convivencia escolar deben ser abordados con prioridad. Seguidamente, consultó si se ha medido el impacto del Sistema de Admisión

Escolar (SAE) en la convivencia. Al efecto, planteó que el SAE, al no considerar el esfuerzo de cada familia o estudiante para ingresar a un determinado establecimiento, ha generado una falta de adhesión a los proyectos educativos.

Por su parte, el **Senador señor Velásquez** valoró también que se haya entregado evidencia que es clave para adoptar decisiones en torno a un asunto que, sin duda, debe ser tratado con premura y, a la vez, con profundidad.

Acerca de la inquietud del Senador señor Sanhueza, se preguntó si las familias realmente revisan el proyecto educativo, o sencillamente buscan el establecimiento ubicado cerca de sus hogares o aquel en que ya estudian los hermanos mayores. En su opinión, la poca adhesión guarda relación con el bajo nivel de participación que se observa, en general, en las distintas instancias de la sociedad.

En lo que concierne al SAE, la **sicóloga del Observatorio de Salud Mental Chile, señora Danae Cerda**, constató que, desde la organización que representa, se ha detectado una incidencia negativa en el sentido de pertenencia y en la motivación de los estudiantes, generando una caída de entre 5% y 8%. A modo de ejemplo, comentó que hay alumnos que deben cambiarse a un establecimiento nuevo para cursar la enseñanza media.

En tanto, la **Directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, señora Verónica López**, precisó que los datos anteriores dicen relación, más bien con las transiciones obligatorias y no con el SAE. Al efecto, recordó que la mayoría de los establecimientos -con excepción de los particulares pagados- no imparte educación básica y media; en consecuencia, la pérdida del sentido de pertenencia está asociado a esta realidad.

A continuación, el **Senador señor Velásquez** consultó cómo permear el currículum, de manera permanente -y no con intervenciones pasajeras-, con las ideas sugeridas durante las presentaciones. A su parecer, es menester construir soluciones desde la base, es decir, desde las mismas escuelas.

Adicionalmente, planteó que las unidades de orientación de los establecimientos podrían participar más activamente en los procesos para mejorar la convivencia educativa.

Sobre el particular, **la señora Danae Cerda** expresó que -a su juicio- es relevante que intervengan organizaciones externas que apoyen constantemente esos procesos, ya que pueden contribuir a los cambios curriculares y transmitir sus conocimientos a los orientadores. A modo

ilustrativo, señaló que, una de las propuestas de su organización ha sido llevar a cabo, una vez a la semana, jornadas de autocuidado.

A su turno, la **señora Verónica López** razonó que hay dos posibles enfoques: uno consiste en recurrir a profesionales externos y otro en instalar capacidades internas. Explicó que su postura es la segunda. En ese sentido, comentó que, en otros países, los profesionales encargados del área de convivencia de las escuelas deben contar con postgrado para acceder al puesto. En Chile esto no ocurre; no obstante, se podría avanzar en esa dirección, lo que requeriría un importante trabajo de parte de las universidades. Mencionó que, hoy en día, aunque existen instancias de capacitación, no hay total claridad sobre su número, su calidad, ni su nivel de apego a la Política Nacional de Convivencia Educativa.

En otro orden de ideas y refiriéndose a las mediciones, estimó que es importante confiar en la Agencia de Calidad de la Educación, por cuanto ha desarrollado adecuadamente su tarea de monitorear datos constantes, durante largo tiempo, para tomar decisiones en materia de políticas educativas. A su parecer, no sería apropiado entregar esta labor a agentes externos, pues la confiabilidad en los resultados del análisis se vería debilitada.

En lo que respecta a los orientadores, coincidió con el Senador señor Velásquez. Lamentó que haya disminuido su cantidad y que se haya circunscrito su rol, principalmente, a lo vocacional. Afirmó que se trata de profesionales que están formados y capacitados para trabajar en tareas de prevención y promoción.

El **Senador señor Quintana** preguntó si, en el marco del proyecto de ley, los orientadores forman parte de los equipos de convivencia o no.

Acerca de esta inquietud, la **asesora del Ministerio de Educación, señora Francisca Córdova**, comentó que la Cartera ha estado trabajando en conjunto con las agrupaciones de orientadores para recibir sus recomendaciones. Hasta el momento, apuntó, la iniciativa solo considera al coordinador como integrante necesario del equipo de convivencia educativa. Añadió que los demás miembros pueden variar de conformidad con las características de cada establecimiento y podrían incluir, por ejemplo, a las duplas psicosociales. Aclaró que, en la estructura tradicional de las escuelas, los orientadores están asociados, más bien, a la Unidad Técnico Pedagógica. En definitiva, explicó que se trata de un asunto propio de la gobernanza interna de los establecimientos y, por tanto, la decisión de incorporar al orientador al equipo de convivencia será de los equipos directivos.

El **Senador señor Quintana** pidió ahondar en la conexión que debe existir entre las escuelas y los centros de salud, pues hoy estaría bastante ausente.

Al respecto, la **sicóloga, señora Danae Cerda**, comentó que ese nexo siempre ha sido una debilidad del sistema. En esa línea, relató que, en casos de ideaciones suicidas, y pese al alto riesgo que tal escenario representa, la derivación es excesivamente lenta. A su parecer, debería existir un mecanismo de alerta instantánea, para cuya implementación es necesario el uso de la tecnología, y una apropiada gestión de recursos y de personas. Complementando lo anterior, indicó que un trabajo colaborativo dentro de los establecimientos educacionales permitiría realizar hallazgos y activar oportunamente protocolos apropiados.

Más adelante, el **Senador señor Quintana** declaró que llamó su atención que quienes se sienten más afectados por medidas punitivas son jóvenes hombres, de estrato socioeconómico bajo y con sobreadad. Al efecto, enunció que son estudiantes que tienen conductas disruptivas para la convivencia, pero que, por las dificultades que enfrentan, se van quedando sin oportunidades. En esa línea, preguntó cuáles son las probabilidades de caer en acciones delictivas por parte de estos alumnos.

Acerca de este punto, la **señora Verónica López** remarcó que el enfoque punitivo, efectivamente, produce consecuencias en el rendimiento de los estudiantes, especialmente en hombres que cursan enseñanza media. Por el contrario, señaló, las mujeres que obtienen buenas notas se ven protegidas de medidas sancionatorias. Subrayó que en la literatura anglosajona se habla de una *school to prison pipeline* (“tubería de la escuela a la cárcel”) para referirse a la conexión que existe entre las prácticas de castigo escolar -que no ofrecen al alumno otra alternativa más que la sanción y la exclusión- y mayores niveles de actividades delictivas. Acotó que no hay datos disponibles sobre este fenómeno en Chile; no obstante, las líneas de investigación siguen esa dirección.

Por último, el **Senador señor Quintana** instó por tener presente el impacto que generan los barrios al interior de los establecimientos educacionales. En su opinión, es indispensable pensar en la incidencia que tiene lo que ocurre dentro de los hogares como causa de los conflictos escolares. A propósito de este tema, consignó que el Programa Lazos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se encuentra presente solo en el barrio y no en la escuela.

3. Defensoría de los Derechos de la Niñez⁶

El **Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille**, efectuó una exposición, a lo largo de la cual trató los temas que constan a continuación:

I. Facultades en materia de convivencia escolar y buen trato

⁶ La presentación realizada puede ser revisada en el siguiente enlace:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/5ae8aff8-b551-4163-bcd7-159c799678fd?includeContent=true>

Se refirió a las atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez que dicen relación con la convivencia escolar y el buen trato, las cuales se encuentran contempladas en las letras c), d) y e) de la [ley N° 21.067](#), que crea dicho organismo. En concreto, hizo alusión a las siguientes:

- Recepción de requerimientos de establecimientos educacionales referidos a la elaboración, revisión u orientaciones sobre protocolos de detección de vulneración de derechos y reglamentos internos (o normativa interna similar).

- Intermediación.

- Remisión de denuncias a la Superintendencia de Educación, en caso que estas no hayan sido realizadas.

- Recomendaciones a establecimientos educacionales y a organismos del Estado.

- Seguimiento de indicadores de derechos humanos, entre ellos, los relativos al derecho a la educación y el estar libres.

- Seguimiento de los compromisos y actuar del Estado (de conformidad con los Informes del Comité de los Derechos del Niño; la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y su Plan de Acción; el Plan de Reactivación Educativa).

- Estudios y publicaciones relativas al derecho a la educación y buen trato.

- Actividades de promoción y difusión de derechos (charlas, campañas audio visuales, material pedagógico. entre otras).

- Asistencia a instancias intersectoriales o mesas relacionadas a la materia (por ejemplo, la mesa “Centros educativos como espacios protegidos”).

II. Panorama estadístico

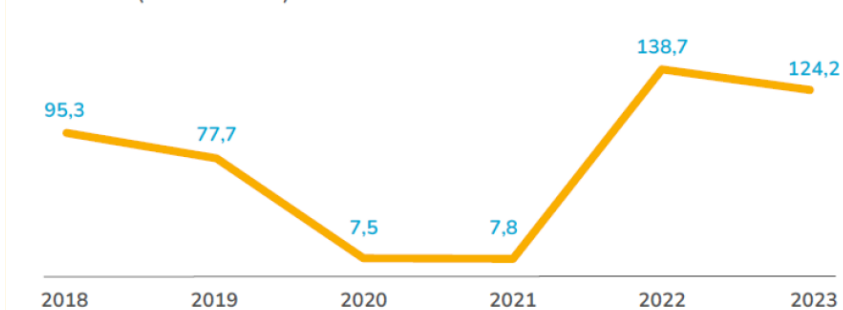
1. Convivencia educativa y denuncias

Más adelante, previno que la convivencia educativa ha empeorado significativamente, especialmente, en lo que respecta a agresiones de estudiantes. En ese sentido, comentó que las tasas de denuncias de agresiones han aumentado de forma progresiva desde 2018 hasta alcanzar su nivel más alto en 2022, con una leve disminución en 2023. Detalló que, en este contexto, los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula

ingresados a la Superintendencia de Educación han mostrado una tendencia al alza, con un aumento del 123% entre 2018 y 2023.

Sobre el particular, exhibió el siguiente gráfico:

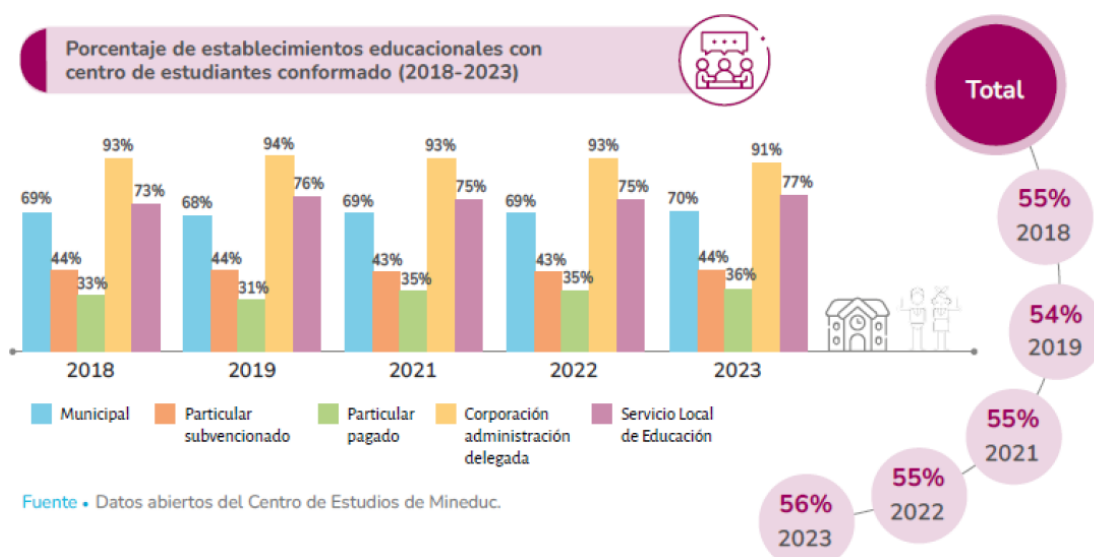
Gráfico N.º 1: Tasa de ingreso de denuncias de agresiones de estudiantes por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes a la Superintendencia de Educación (2018-2023)⁴



2. Participación de niños, niñas y adolescentes, y convivencia educativa

Enseguida, destacó que el 56% de los establecimientos educacionales cuenta con un centro de estudiantes conformado, aunque esta cifra disminuye significativamente en el caso de establecimientos particulares. Sin embargo, advirtió que la existencia de los centros de estudiantes no permite asegurar la participación en aspectos cotidianos de la vida educativa. En esa línea, apuntó que el 48% de los estudiantes considera que no participaron en la construcción de normas de convivencia en sus cursos.

En relación con este asunto, examinó la siguiente imagen:



3. Informe Anual de la Defensoría (año 2024)

En materia de convivencia educativa, relató, se identificaron algunos desafíos relativos a las medidas de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes. Aclaró que frente a casos de violencia escolar hay sanciones que resultan procedentes; sin embargo, se debe optar por aquellas que no vulneren el derecho a la educación de los alumnos involucrados.

Subrayó que, en el marco de la elaboración de este informe, se recogieron las opiniones de los estudiantes, quienes manifestaron su interés por participar en instancias en que se escuche su opinión acerca de la convivencia; y en actividades orientadas al bienestar, que operan como mecanismos preventivos respecto de un mal clima escolar.

III. Valoración general del proyecto

Más adelante, calificó como positivos algunos aspectos de la iniciativa, a saber:

- Aborda una de las problemáticas mayormente relevada por niños, niñas y adolescentes a la Defensoría de la Niñez.
- Recoge recomendaciones realizadas por la Defensoría de la Niñez en sus Informes Anuales y durante el primer trámite constitucional de esta proposición de ley.
- Fortalece la gestión colaborativa de los conflictos.
- Incluye elementos de evaluación y monitoreo, tanto de los instrumentos de gestión como de las políticas.
- Refuerza la gobernanza y la coordinación interinstitucional en la materia.

IV. Observaciones específicas

Con posterioridad, realizó una serie de sugerencias relativas al articulado propuesto.

1. Derechos de los integrantes de la comunidad educativa

Recordó que el numeral 3) del artículo 1° del mensaje del

Presidente de la República contenía modificaciones al artículo 10 de la [Ley General de Educación](#). La letra a) de este último precepto establece, entre otros, el derecho de los alumnos y alumnas “a que se respeten su libertad personal y de conciencia”, expresión que se pretendía reemplazar por “a que se respeten y reconozcan su libertad personal y de conciencia, estatus migratorio, identidad cultural, pertenencia étnica, indemnidad sexual, identidad y expresión de género, orientación, características y diversidades sexuales y/o afectivas”. Tal enmienda, recalcó, fue descartada durante el primer trámite constitucional.

Instó por reintegrar la categorización de grupos prioritarios, de manera de concretar garantías reforzadas, en concordancia con el artículo 8° de la [ley N° 21.430](#), sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia⁷.

2. Equipo de convivencia educativo y coordinador

Luego, analizó el texto que propone el número 2) del artículo 1° de la iniciativa para reemplazar el artículo 15 de la [Ley General de Educación](#). Al efecto, celebró que se establezca, en el inciso quinto- que el equipo encargado de la convivencia educativa “tendrá especial preocupación por la activa participación del estudiantado en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades de reflexión, promoción y resguardo de la buena convivencia y el buen trato”. Agregó que ello es concordante con las recomendaciones que hizo la Defensoría de la Niñez en la Cámara de Diputados.

Enseguida, hizo presente que la misma disposición -en su inciso sexto- establece como requisito que el coordinador de convivencia tenga “formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa”. Sobre el particular, sugirió exigir que la formación de este coordinador esté, necesariamente, vinculada a temáticas de convivencia escolar. Asimismo, abogó por articular este requisito con el rol que tiene el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio del ramo.

Después, alertó que, en el inciso final, se exige de contar con un

⁷ Su inciso segundo dispone: “Ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia, situación de discapacidad o socioeconómica, de maternidad o paternidad, nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, diferencias que el niño, niña o adolescente tenga o haya tenido a causa de su desarrollo intrauterino, salud, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres y/o madres, familia, representantes legales o de quienes lo tengan legalmente a su cuidado”.

equipo de convivencia educativa liderado por un coordinador a los establecimientos en contexto de encierro, rurales, aulas hospitalarias, de educación parvularia y aquellos que tengan una matrícula inferior a ciento cincuenta párvulos o estudiantes. A su juicio, lo anterior podría constituir una situación de discriminación en cuanto a la implementación de condiciones que permitan garantizar la promoción de la buena convivencia educativa y el buen trato de toda la comunidad educativa, y el resguardo de los derechos de los párvulos y estudiantes.

En ese sentido, manifestó que son los contextos de alta vulnerabilidad y complejidad -y no la cantidad de personas de la comunidad escolar- lo que determina que esa medida pueda tener mayor incidencia en la convivencia escolar. Subrayó que genera especial preocupación la exclusión de los establecimientos de educación parvularia, ya que -dada la alta exigencia que recae en sus profesionales- no cuentan con los recursos para asumir la tarea de coordinación de la convivencia escolar, particularmente, en el caso de grandes sostenedores como Fundación Integra y JUNJI.

3. Definición de buena convivencia educativa

A continuación, se refirió al número 4) del artículo 1° de la iniciativa, el cual busca sustituir el artículo 16 A de la [Ley General de Educación](#). El inciso primero de la disposición propuesta introduce un nuevo concepto de buena convivencia educativa, entendiendo por tal “aquella en donde se promueven relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomentan la cohesión entre todos los integrantes de la comunidad educativa, a través de prácticas y procesos de aprendizaje que se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos de forma pacífica, con atención siempre al bien común, respeto por los derechos de sus integrantes y el ejercicio de la autoridad pedagógica y directiva”.

Acerca de esta definición, instó por sustituir la expresión “directiva” por la palabra “formativa”, u otra afín, pues ello se ajusta más a un enfoque que considera siempre las interacciones dentro de una comunidad educativa como democráticas y con un irrestricto respecto por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA). Puso de relieve que la experiencia de NNA en su trayectoria educativa no se reduce a una posición estudiante-docente, en que se enfatiza la disparidad de poder. Esta consideración reduccionista, estimó, podría afectar el fomento de la participación estudiantil y la relevancia de los alumnos como sujetos de derechos.

4. Elaboración de la Política Nacional de Convivencia Escolar y su Plan de Acción

Más adelante, revisó el número 6) del artículo 1° de la iniciativa, que propone sustituir el artículo 16 C de la [Ley General de Educación](#) por

otro. En lo tocante a este precepto, destacó que el inciso segundo establece que tanto la Política Nacional de Convivencia Escolar como su Plan de Acción “serán elaborados por la Subsecretaría de Educación en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con los órganos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en las materias que corresponda”.

Acerca del procedimiento de formulación y aprobación de ambos instrumentos, instó por incorporar la participación de niños, niñas y adolescentes -a través del Consejo de la Sociedad Civil Estudiantil del Ministerio de Educación-, la Defensoría de los Derechos de la Niñez, expertos y organizaciones de la sociedad civil, en particular, aquellas entidades sin fines de lucro que trabajen en materias de convivencia escolar, erradicación de la violencia y restauración de la convivencia en comunidades escolares.

A modo ilustrativo, relató que a partir de esta fórmula -contemplada por el artículo 82 de la [ley N° 21.430](#)- se han recogido diversas experiencias y detectado nudos críticos, todo lo cual ha permitido mejorar la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia, y su Plan de Acción.

5. Prevención de conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa

Continuó con la presentación la **profesional de Seguimiento de Legislación y Políticas de la Defensoría, señora Katherine Llanos**, quien se abocó a analizar el numeral 5) del artículo 1° del proyecto, que pretende reemplazar el artículo 16 B de la [Ley General de Educación](#). Al efecto, recordó que la versión original del precepto propuesto -que estaba contenida en el número 7) del artículo 1° del mensaje del Presidente de la República- incluía el siguiente inciso tercero:

“Respecto a los actos u omisiones que constituyan discriminación, se estará a lo dispuesto en la ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación. Asimismo, se deberán contemplar medidas especiales de prevención y protección, cuando concurren razones de pertenencia étnica, nacionalidad, posición socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, orientación sexual o afectiva, género, identidad y expresión de género, enfermedad, discapacidad, características genéticas o condición de salud mental o física.”.

Abogó por concordar el artículo 16 B con el artículo 2° de la [ley N° 20.609](#) -que establece medidas contra la discriminación-, el cual define claramente qué se entiende por discriminación. Sin embargo, aclaró que su sugerencia consiste en hacer una referencia al concepto y no una remisión más amplia a ese cuerpo normativo, ya que ello podría llevar a activar únicamente la acción de no discriminación arbitraria, liberando al

establecimiento educacional de su responsabilidad de activar sus propios protocolos o procedimientos de su reglamento interno de convivencia escolar con medidas específicas.

6. Difusión del reglamento interno y del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa

Posteriormente, examinó el número 9) del artículo 1° de la proposición de ley, que incorpora un nuevo artículo 16 G a la [Ley General de Educación](#), el cual dispone el deber de los establecimientos educacionales de informar a la comunidad educativa acerca de los contenidos del Plan de Gestión de Convivencia Educativa y del reglamento interno. El inciso tercero de este precepto tiene el siguiente tenor:

“La difusión de los instrumentos señalados precedentemente deberá ser continua, a través de contenidos o acciones con un lenguaje comprensible para todas las edades, con el fin de alcanzar el mayor conocimiento, difusión y apropiación de la regulación interna.”.

Valoró que se exija una difusión continua; no obstante, recomendó determinar fechas mínimas o plazos que permitan una mayor organización y coordinación de los responsables, de modo que se hagan efectivas sus obligaciones. Asimismo, consideró importante la elaboración de una estrategia de difusión especialmente diseñada para párvulos y estudiantes, en los diferentes niveles educativos, con necesidades educativas especiales y contando con diferentes traducciones. También estimó relevante definir los canales y estrategias para brindar esta información, o bien, establecer condiciones mínimas para ello. Al respecto, previno que, al dejar abiertos estos temas, se podría recurrir, por ejemplo, al envío de un correo electrónico a los padres, madres y apoderados, lo que no asegura una toma de conocimiento y comprensión suficientes de estos instrumentos.

7. Facultades del Consejo Escolar

Abordó, luego, el contenido del número 10) del artículo 1°, que propone incorporar un nuevo artículo 16 H a la [Ley General de Educación](#), disposición que regula el proceso de actualización del Plan de Gestión de Convivencia Educativa y del reglamento interno. Su inciso tercero tiene la redacción que se indica:

“El director, a través del coordinador de convivencia, presentará un informe al Consejo Escolar con los principales resultados de los procesos participativos y las propuestas recogidas. El Consejo Escolar, si así lo estima, podrá acordar observaciones al informe, siempre que no contravengan la normativa educacional o el proyecto educativo institucional del establecimiento. Sancionado el informe, se pondrán a disposición de la comunidad educativa los instrumentos con sus respectivas actualizaciones,

en el plazo que fije su reglamento.”.

Acerca de las atribuciones del Consejo Escolar en esta materia, puntualizó que el texto aprobado por la Cámara de Diputados le permite a aquel órgano formular observaciones. En cambio, remarcó, la versión original del artículo 16 H propuesto -contenido en el numeral 13) del artículo 1° del mensaje presidencial- exigía que las modificaciones al Plan o al reglamento interno fueran aprobadas por el Consejo Escolar.

Hizo un llamado a reconsiderar esta innovación, pues -a su juicio- la facultad evaluativa de instrumentos y de aprobación del Consejo Escolar permitía potenciar su rol, tanto en establecimientos públicos como privados, como canalizador de la participación de la comunidad educativa.

8. Monitoreo de la convivencia educativa a través de la Agencia de Calidad de la Educación

Enunció que el numeral 1) del artículo 4° de la iniciativa busca introducir un nuevo artículo 11 bis a la [ley N° 20.529](#), sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización. Celebró el contenido del inciso final propuesto, cuyo tenor es el que sigue:

“La Agencia, al menos una vez al año, pondrá a disposición de todos los establecimientos educativos del país un instrumento de evaluación diagnóstica de la convivencia educativa, para el uso interno de los equipos directivos y de educación, de utilización voluntaria, cuyo objeto será monitorear y favorecer la toma de decisiones en torno a los planes de gestión de la convivencia.”.

Al respecto, destacó que es importante haber especificado las atribuciones de la Agencia y agregó que poner a disposición de todos los establecimientos educativos un instrumento de evaluación diagnóstica de la convivencia educativa -según establece la disposición en comento- permitirá contar con una evaluación de alto nivel técnico e imparcial para medir el cumplimiento de las obligaciones que contempla el proyecto.

Asimismo, planteó que, de no ser posible incorporar en la propuesta legislativa contenidos mínimos para los reglamentos internos, esta es una buena forma de lograr uniformidad y orientar hacia un mismo estándar a todos los establecimientos educacionales.

De igual modo, hizo hincapié en que el instrumento de evaluación a que alude el precepto debería quedar a disposición, no solo de los equipos directivos y de educación, sino también del Consejo Escolar para su utilización voluntaria.

9. Sistema integrado de información

Manifestó que el mismo artículo 11 bis contempla un sistema integrado de información que quedará a cargo de la Agencia de Calidad de la Educación. Estimó que dicho sistema debería operar bajo las siguientes condiciones:

a) Articulación con la información que deben levantar las SEREMI de Educación ante expulsiones.

Constató que la [ley N° 21.128](#) -Aula Segura- dispone que la SEREMI respectiva informará sobre cada expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Sin embargo, consignó que, actualmente, el Ministerio del ramo no tiene acceso a la información, pues el organismo que lleva el registro es la Superintendencia de Educación.

De ahí que sugirió revisar este proceso de entrega de antecedentes, su finalidad y responsables. Adicionalmente, recomendó que la Agencia de Calidad pueda acceder también a esta información para monitorear que la expulsión de estudiantes sea una medida de última ratio.

b) Mecanismos para obtener información sobre los procedimientos sancionatorios en los establecimientos educacionales privados.

Expresó preocupación por la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados y, al efecto, detalló que estos no tienen la obligación de comunicar tal medida a la Superintendencia de Educación, lo que invisibiliza una realidad importante que debe ser monitoreada.

Por último, el **Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille**, reiteró que la institución que dirige valora la iniciativa de ley, toda vez que es indispensable que se incorpore regulación acerca de uno de los problemas más profundos que afecta a NNA. Hizo un llamado por vincular este cuerpo normativo con la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. En tal sentido, remarcó que el resguardo administrativo de los derechos -que está a cargo de las Oficinas Locales de la Niñez- es un componente primordial para efectos de abordar conflictos menos graves, sin llegar a la sede judicial. En este orden de ideas, expresó que la Subsecretaría de la Niñez tiene un rol importante como organismo articulador y responsable de las políticas públicas en el ámbito de la niñez.

Al término de la presentación, se dio paso a una ronda de comentarios y preguntas.

El Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, comentó que

el aumento en las denuncias por situaciones de violencia es un dato que la propia Cartera ha dado a conocer y es uno de los elementos que motivó la presentación de este proyecto. No obstante, señaló que no se trata de un fenómeno generalizado en el sistema educativo, sino que se encuentra concentrado, especialmente, en la enseñanza media. Es más, apuntó que a nivel de educación básica las cifras han mejorado. De ahí que las medidas deben enfocarse en el grupo que presenta mayores dificultades, reflexionó.

Coincidió con el expositor en cuanto a la relevancia de la participación efectiva de las comunidades educativas, es decir, una participación con algún grado de incidencia o vinculación, incluso a propósito de decisiones mayores. Subrayó que el mensaje -tal como se indicó durante la presentación- contenía algunos aspectos que fueron eliminados durante la tramitación, siendo uno de ellos la facultad del Consejo escolar para aprobar ciertos instrumentos. Sin embargo, previno que hubo posturas contrarias a ello, fundadas en una defensa de la autonomía de los sostenedores.

Enunció que, al identificar los casos de mayor complejidad, no solo se advierte que hay más dificultades en la enseñanza media, sino que estas son superiores en establecimientos particulares subvencionados y pagados. Añadió que este tipo de instituciones son las que exhiben menores niveles de participación formalmente organizada de los estudiantes. Ello da cuenta de la relación entre la participación y mejor clima escolar.

Enseguida, planteó que las expulsiones también se han visto incrementadas, detallando que en 2023 se llegó a las 1.600. Con todo, puso de relieve que ello no ha contribuido a mejorar la convivencia educativa. En esa línea, manifestó que es imprescindible pensar en otro ángulo para abordar los conflictos desde los formativo y los pedagógico.

Luego, dijo compartir la preocupación expresada por la Defensoría de la Niñez acerca de la supresión de categorías prioritarias de protección. A su juicio, para una adecuada aplicación de la normativa resulta necesario reincorporar algunos conceptos que, por lo demás, ya están consagradas en cuerpos legales vigentes, como la [ley N° 20.609](#), que establece medidas contra la discriminación. Lamentó las enmiendas que se introdujeron en este sentido durante el primer trámite constitucional, toda vez que debilita una ley de convivencia que pretende ser un instrumento efectivo a la hora de abordar los problemas en análisis.

A continuación, el **Senador señor Sanhueza** mencionó que, sin duda, es imprescindible contar con una normativa orientada a erradicar la violencia que se ha observado en el sistema escolar durante el último tiempo. Razonó que la violencia siempre ha estado presente en la sociedad; sin embargo, lo importante es canalizarla adecuadamente y disminuir los efectos nocivos que puede ocasionar en los establecimientos educacionales. Agregó que la escuela es el espacio en que pueden corregirse ciertas conductas

que, de lo contrario, pueden derivar en hechos de violencia más graves en el futuro. En esa línea, remarcó que la educación es la principal herramienta para combatir escenarios complejos -como el consumo de drogas y la delincuencia- y lograr un clima de paz a nivel social.

Después consultó cómo se puede equilibrar una participación vinculante de los estudiantes con el carácter técnico de los instrumentos involucrados en este tema, recalcando que los alumnos carecen de conocimientos suficientes a este respecto.

Adicionalmente, solicitó profundizar en la relevancia de la gestión colaborativa de conflictos, ya que el proyecto de ley no contendría suficientes elementos en ese sentido.

De igual modo, preguntó si el articulado propuesto constituye un instrumento útil de cara al rol y fines de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Finalmente, pidió al defensor expresar su parecer en torno al financiamiento de la proposición de ley, dado que los recursos asignados podrían estimarse como insuficientes.

Por su parte, el **Senador señor Velásquez** sostuvo que los conflictos relativos a la convivencia educativa se dan en un contexto más amplio de hostilidad y violencia generalizada que se presenta a nivel nacional. En este orden de ideas, afirmó que la participación que se busca canalizar por medio de distintas instancias en la sociedad -como juntas de vecinos o sindicatos- es meramente aparente. A nivel escolar, detalló, es bajo el interés en este ámbito, no solo entre los estudiantes, sino también entre los padres y los docentes. En su opinión, mejorar la convivencia al interior del país exige pensar en instrumentos de planificación en el plano nacional, que vayan más allá de campos específicos, como el educacional. En definitiva, aseveró que un mayor nivel de participación y una política nacional de convivencia son esenciales para avanzar en la dirección correcta.

Más adelante, hizo un llamado a recurrir a mecanismos ya presentes en los establecimientos escolares para combatir los problemas de mal clima. Así, planteó que los orientadores podrían jugar un rol en esta materia, destacando que la estructura que históricamente se ha observado en las escuelas incluye a un director, un inspector y un orientador como parte del plantel. Añadió que cargos como el actual encargado de convivencia y varios otros son relativamente nuevos y pueden mutar en el tiempo.

Con posterioridad, el **señor Defensor de la Niñez** abordó los temas planteados por quienes le antecedieron en el uso de la palabra. Se refirió al derecho de participación consagrado en la [Convención sobre los](#)

Derechos del Niño y en la **ley N° 21.430** -sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia- y, al efecto, consignó que es necesario aclarar en qué consiste.

Así, explicó que la participación tiene que ser formal e incidente, es decir, debe generar efectos y cambios. En otras palabras, agregó, no debe consistir en algo meramente simbólico, pues de lo contrario, el interés por formar parte de las instancias creadas para ello decae. Sin embargo, sostuvo que lo anterior no implica acceder a todo lo que plantean los participantes. Lo relevante es que en el proceso de toma de decisiones se adopte una metodología que considere las opiniones entregadas y que aplique mecanismos de negociación para finalmente aceptar o descartar las sugerencias efectuadas, pero siempre de manera justificada. Puso de relieve que esto permite que los destinatarios finales de las políticas públicas se sientan parte de ellas. Entonces, señaló, la participación de niños, niñas y adolescentes debería ajustarse a los estándares descritos, tanto en este proyecto como, en general, en las políticas públicas que afecten a este grupo.

Complementando lo anterior, la **profesional de Seguimiento de Legislación y Políticas de la Defensoría, señora Katherine Llanos**, remarcó la importancia de una participación informada, que permita a los alumnos opinar sobre aspectos técnicos atinentes a la convivencia escolar. En su opinión, el CPEIP podría aportar en materia de capacitación.

En lo tocante al rol de la entidad que dirige, el **señor Defensor de la Niñez** puntualizó que sus facultades son amplias y están asociadas al monitoreo y al impulso de políticas públicas relativas a NNA, en coordinación con las demás instituciones del Estado. Asimismo, remarcó que el organismo -de conformidad con su independencia- también debe representar aquello que debe ser corregido. Hizo hincapié que, en materia educacional, hay un flujo importante de trabajo producto de los requerimientos que son presentados o de la derivación de casos con la Superintendencia de Educación. A partir de los estándares que fija el proyecto de ley, estimó que la Defensoría podría jugar un papel de orientación respecto de la gestión de dichos requerimientos y derivaciones, así como de la forma en que las escuelas deben dar cumplimiento a la normativa.

En lo que atañe al financiamiento de la iniciativa, declaró que no se había efectuado un análisis detallado al respecto. Sin perjuicio de ello, recalcó que la especialización del personal educativo y, especialmente, la de los equipos encargados de la convivencia escolar requiere una cantidad significativa de recursos adicionales para permitir que la regulación cumpla exitosamente sus objetivos.

Luego, en cuanto a las políticas nacionales, constató que varias de ellas abordan de alguna manera la convivencia escolar, como ocurre en el

caso de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia o la Política Nacional de Seguridad. A su juicio, es relevante que esta proposición de ley sea armónica y opere en coordinación con el contenido de tales instrumentos de planificación.

4. Colegio de Profesoras y Profesores de Chile⁸

El Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, señor Mario Aguilar, inició su intervención manifestando su apoyo a la iniciativa en estudio, por cuanto contiene herramientas que -si bien pueden ser perfeccionadas- contribuirán a abordar un problema que debe ser resuelto con urgencia. En efecto, planteó que los conflictos de convivencia - que pueden implicar violencia, agresiones, acoso, entre otros fenómenos- han llevado a algunas comunidades escolares a situaciones límite.

Subrayó que las dificultades que se han presentado en este ámbito, y que se han traducido -como es de público conocimiento- en hechos muy graves, son un elemento central dentro de las demandas del profesorado e incluso han motivado movilizaciones. A modo ilustrativo, recordó el caso de docentes que han necesitado cirugías después de ser agredidos por alumnos y apoderados; y el de profesores, como Katherine Yoman de Antofagasta y Albano Muñoz de Molina, que decidieron suicidarse, debido a los maltratos que sufrían y al abandono de parte del sistema ante esta situación.

Enseguida, indicó que el debate público se centra, con frecuencia, en los resultados de las pruebas estandarizadas que buscan medir los aprendizajes. Sin embargo, llamó a no perder de vista que en un entorno con mala convivencia es prácticamente imposible lograr un adecuado aprendizaje; de ahí la prioridad con que debe ser tratado el problema concerniente al clima escolar que afecta a la gran mayoría de los establecimientos.

Más adelante, realizó una serie de comentarios y recomendaciones en torno al articulado de la proposición de ley; a saber:

1. Eliminación de los cambios propuestos al literal a) del artículo 10 de la [Ley General de Educación](#)

Lamentó que se hayan suprimido las enmiendas que planteaba el numeral 3) del artículo 1° del mensaje del Presidente de la República, ya que

⁸ Se acompañó una minuta que puede ser descargada desde:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/85849056-df65-4fa4-b8b0-54c52b4dd922?includeContent=true>

por un lado, reconocía el derecho de los alumnos a “estudiar en un ambiente tolerante, seguro, saludable, de respeto mutuo y libre de violencia” -y no solo en un ambiente tolerante y de respeto mutuo-; y por otro, aludía al derecho de los estudiantes a que se respeten distintas características que corresponden a categorías especialmente vulnerables.

2. Artículo 15 propuesto para la [Ley General de Educación](#) (numeral 2) del artículo 1° del proyecto)

Recordó que el inciso sexto del artículo 15 propuesto tiene el tenor que se indica:

“El equipo de convivencia será liderado por una persona a cargo de la Coordinación de la Convivencia Educativa, que deberá ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa, de jornada completa con dedicación exclusiva.”.

Al efecto, estimó que el coordinador de convivencia debe ser un profesional de la educación -y no uno de otras áreas-, de manera de mantener el enfoque pedagógico a propósito de la convivencia, que no se restrinja a lo sancionatorio.

De igual modo, sugirió incorporar la siguiente oración final al inciso antes citado: “Este equipo de convivencia deberá actuar en coordinación constante con los profesores jefe de cada curso. Las tareas que deban asumir estos docentes, asociadas con la convivencia escolar, serán consideradas dentro de las actividades curriculares no lectivas.”.

En relación con lo anterior, sostuvo que el rol del profesor jefe se ha desvalorizado dentro del sistema educacional, lo que ha generado un impacto negativo, pues históricamente se trataba de una figura que ejercía un rol importante. Consignó que los entornos en que hay profesores jefes más empoderados y compenetrados con su función, donde tienen facilidades para desarrollar su labor, exhiben un mejor clima escolar y una reducción de la violencia.

Dada la responsabilidad que esto implica, consideró que su papel debería ir acompañado de mejores condiciones laborales y remuneracionales. Además, subrayó, debería haber una mayor inversión en su formación y un apoyo continuo, evitando la sobrecarga de trabajo a que se ven expuestos estos docentes. La ausencia de estas medidas, recalcó, ha desincentivado a los profesionales para asumir esa tarea. Agregó que los profesores jefes son, por lo demás, los que más se ven enfrentados a

posibles agresiones y malos tratos, pues son quienes tienen que lidiar de forma más directa con los apoderados.

3. Cambios en el inciso primero del artículo 16 A propuesto para la Ley General de Educación (numeral 4) del artículo 1° del proyecto)

Enunció que el referido inciso contiene una definición de buena convivencia educativa y, al efecto, lamentó que se hayan introducido enmiendas al texto originalmente planteado por el Ejecutivo en el numeral 6) del artículo 1° del mensaje. En particular, criticó que la mención a las “interacciones inclusivas y democráticas” haya sido reemplazada por “interacciones inclusivas y participativas”. Si bien la participación es, por cierto, un elemento positivo, señaló que no tiene la misma fuerza que la democracia. Asimismo, dijo no entender el motivo por el cual la alusión a la democracia podría ser problemática, considerando que es un concepto que debería generar consenso.

4. Nuevas enmiendas al artículo 16 C propuesto para la Ley General de Educación (numeral 6) del artículo 1° del proyecto)

Posteriormente, formuló una propuesta de modificación al artículo 16 C de la LGE. Así, instó por exigir -mediante un nuevo inciso tercero- que se considere la opinión de las organizaciones más representativas de los trabajadores de la educación al momento de elaborar la Política Nacional de Convivencia Educativa.

Después, hizo un llamado a introducir una nueva modificación por medio del proyecto de ley, que modifica la ley N° 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública ([Boletín N° 16.705-04](#)). En concreto, sugirió incorporar la siguiente letra, nueva, al artículo 52 de la [ley N° 21.040](#) -que crea el Sistema de Educación Pública-, el cual contiene un listado de atribuciones del Consejo Local:

“...) Emitir opinión respecto de la Política Nacional de Convivencia Educativa a que hace referencia el artículo 16 C del decreto con fuerza de ley N°2, de 2010, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N°1, de 2005.”.

5. Supresión del artículo 16 E propuesto para la Ley General de Educación

Consignó que el mensaje presidencial -en la versión original del numeral 10) del artículo 1°- sugería reemplazar el texto del artículo 16 E de la LGE. Sin embargo, acotó que el precepto citado fue eliminado en la Cámara de Diputados. Sobre el particular, manifestó que la norma exigía que los

reglamentos internos incorporaran diferentes materias, entre otras, el respeto y reconocimiento a la identidad sexoafectiva y de género, y procedimientos de investigación y sanción de conductas de acoso violencia o discriminación ajustados a la perspectiva de género, lo que habría molestado a algunos sectores.

Si la mención al género es lo que ocasiona dificultades, coligió que, tal vez, se puede buscar una fórmula alternativa de redacción. Más allá de eso, instó por reincorporar esta disposición, toda vez que contiene procedimientos que vuelven operativa la ley y sin los cuales las innovaciones que se busca implementar serán meramente declarativas.

6. Nuevo numeral para el artículo 4° del proyecto, que modifica la [ley N° 20.529](#)

Más adelante, abogó por agregar el siguiente literal nuevo al artículo 76 de la [ley N° 20.529](#) -sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización-, que contiene un listado de infracciones graves:

“j) Cuando el sostenedor de un establecimiento o el personal de su dependencia, habiendo tomado conocimiento o debiendo conocer de situaciones de acoso sexual o escolar, violencia o discriminación contra cualquier integrante de la comunidad educativa, no disponga las medidas contempladas en el reglamento interno, de acuerdo a lo establecido en el art. 16 E de la Ley de convivencia escolar, dicha responsabilidad también le será aplicable al representante legal de la entidad sostenedora. Esta infracción, en caso de reiteración, sólo podrá ser sancionada con la revocación del reconocimiento oficial del Estado. Se entenderá por reiteración el caso en que dicho evento ocurra más de una vez.”.

Al efecto, comentó que, según información entregada por la Superintendencia de Educación, las infracciones consideradas graves son sancionadas, como máximo, con la privación temporal de un porcentaje de la subvención, dado que el artículo 73 de la misma ley dispone que el Director Regional “podrá” aplicar las sanciones según la gravedad de las mismas, otorgando cierto grado de discrecionalidad al respecto. Constató que, si bien el fundamento para ello es no afectar gravemente a una comunidad escolar determinada, no queda claro qué tan efectivas serían estas sanciones para asegurar que las obligaciones se cumplan.

7. Enmiendas al inciso final del artículo 8° bis propuesto para el [Estatuto Docente](#) (numeral 1) del artículo 5° del proyecto)

Acerca del artículo propuesto, expresó que, en términos generales, valora su contenido, pues le da operatividad al derecho de los profesores a trabajar en espacios seguros, libres de violencia y acoso, en

que se resguarde y respete su integridad física, psicológica y moral. Sin embargo, lamentó las modificaciones que experimentó el inciso final que proponía la letra d) del numeral 1) del artículo 5° del mensaje presidencial.

Detalló que el texto, en su versión original, establecía que “en el caso de que el docente sea afectado por hechos constitutivos de delitos, ejercidos por terceros, sean estos estudiantes, padres y apoderados u otros, el sostenedor del establecimiento deberá proporcionarle asistencia jurídica”. Previno que en la Cámara de Diputados se sustituyó el deber del sostenedor de brindar asistencia jurídica por la obligación de proporcionar “apoyo y orientación para el ejercicio y protección de sus derechos, al menos, hasta la presentación de la denuncia”.

En su opinión, la redacción inicialmente planteada resguardaba de mejor forma el derecho de los docentes a buscar justicia. En efecto, remarcó que un profesor que es agredido debería obtener asistencia jurídica hasta la total resolución del asunto que lo afectó, pues de lo contrario podría verse impedido de ejercer sus derechos. Relató que, por lo demás, la capacidad del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile para otorgar apoyo en este sentido es bastante limitada.

Adicionalmente, instó por introducir una referencia expresa a la denominada Ley Karin, esto es, la [ley N° 21.643](#), que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo.

8. Innovaciones respecto a las licencias médicas.

A continuación, se refirió a las licencias médicas derivadas de hechos de violencia o agresiones sufridos por los docentes en el contexto escolar. Consignó que los efectos que producen estas circunstancias no solo impactan en lo físico, sino también -y en ocasiones, de forma más profunda- en lo psicológico. Dado lo anterior, afirmó que es necesario reforzar la protección de los profesores en este ámbito.

En consideración a los planteamientos precedentes, propuso incorporar obligaciones adicionales para los organismos administradores del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, el Fondo Nacional de Salud (FONASA), y las instituciones de salud previsual (ISAPRES). En concreto, sugirió introducir la siguiente norma:

“Una vez iniciada la aplicación de los protocolos contenidos en los reglamentos internos a que hace referencia la presente ley, las licencias médicas asociadas a estos contextos, o bien, a casos de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, no podrán ser rechazadas por los organismos correspondientes.”.

5. Acción Educar⁹

El **Director Ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez**, aseveró que, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, hay una diagnóstico transversal acerca de la gravedad de los problemas de convivencia escolar y de la urgencia con que deben ser tratados. Consignó que el mal clima escolar que afecta el proceso de aprendizaje es un fenómeno que engloba diversas dificultades, las cuales resultan difíciles de resolver con una única herramienta. En términos generales, señaló que la idea central del proyecto es elevar el estándar en materia de convivencia educativa; no obstante, la principal dificultad para ello radica en que no se asignan recursos suficientes para dotar a las escuelas de personas y capacidades que permitan cumplir con los objetivos que se han definido.

Luego, se refirió con mayor detalle a distintos aspectos vinculados a la iniciativa de ley.

I. Necesidades

1. Autoridad pedagógica

Puso de relieve que es menester reconocer el rol de autoridad que tienen no solo los profesores jefes, sino especialmente el equipo directivo, ya que de otra forma es muy complejo implementar las medidas que se están planteando y permitir que actúen de manera preventiva.

A su juicio, este proyecto representa una oportunidad para entregarles a las autoridades escolares más atribuciones y reducir los espacios para cuestionarlas permanentemente.

2. Equipos con competencias

Asimismo, estimó que es indispensable que los equipos escolares tengan las competencias pertinentes para adoptar decisiones.

3. Apoyos y recursos

Expresó que el Estado debe, por un lado, llegar con sus instituciones a los establecimientos para brindarles asesoría y orientación; y por otro, entregar recursos para reforzar el personal de las escuelas. Instó por instalar capital humano avanzado y especializado en convivencia, particularmente, en la enseñanza media, que es el nivel en que se han detectado las mayores dificultades.

⁹ La presentación realizada puede ser revisada en el siguiente link:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/b685f56d-db50-485a-975b-e8257abb9143?includeContent=true>

4. Derivación efectiva al sector salud, y más y mejores prestaciones

Después, remarcó que es imprescindible mayor coordinación con el sector sanitario, toda vez que hay una estrecha relación entre la convivencia educativa y la salud mental.

5. Prevención

En su opinión, la proposición de ley no estaría lo suficientemente enfocada en la prevención y, por tanto, habría que reforzar esta dimensión.

6. Monitoreo

Valoró la tarea de monitoreo que se encomienda a la Agencia de Calidad de la Educación, señalando que tal idea resulta interesante y está en línea con el rol de dicha institución.

II. Análisis de algunas propuestas contenidas en el proyecto

Más adelante, nombró algunos elementos que considera la iniciativa y que -a su parecer- es necesario corregir:

- Consejo Escolar para todos los establecimientos.
- Más burocracia y carga de trabajo para docentes, directivos y funcionarios en general.
- Coordinación interministerial “en el papel”.
- Falta de acciones concretas.
- Rigidez normativa que impide otras visiones para abordar la convivencia escolar.
- Obligaciones sin recursos.

Enseguida, se refirió con mayor profundidad a algunos de ellos. Así, razonó que buena parte del texto supone introducir mayor regulación, lo que finalmente rigidiza la administración de los establecimientos, sin que ello necesariamente permita abordar el problema. En otras palabras, manifestó que no es la falta de trámites ni de reglamentos los que ha llevado a un mal clima escolar. Afirmó que los conflictos que se viven al interior de las comunidades educativas van mucho más allá de eso.

Aunque apoyó que se proponga consagrar a nivel legal la existencia y principales contenidos de la Política Nacional de Convivencia Educativa, criticó que se busque forzar a los establecimientos a alienarse con ese marco nacional, no porque su orientación vaya a ser equivocada, sino debido al enorme esfuerzo administrativo que ello implicará y a la posterior fiscalización que tendrá que realizar la Superintendencia.

Seguidamente, se abocó a analizar la participación de los distintos estamentos escolares. Sobre el particular, clarificó que la participación, sin dudas, debe jugar un rol a la hora de elaborar los instrumentos, ya que ello permite elevar el conocimiento y la adhesión a ellos. Con todo, lamentó la rigidez y nivel de detalle con que se regula, así como la posibilidad de una posterior sanción frente al incumplimiento de las normas planteadas. Señaló que esto lleva a desviar los esfuerzos hacia una excesiva burocracia, en lugar de la educación.

III. Observaciones en torno a aspectos específicos

1. Financiamiento

Enunció que, para efectos del financiamiento, la iniciativa recurre a la flexibilización de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), con el objeto de cubrir el mayor gasto que implicará contar con un coordinador de convivencia con dedicación exclusiva. Sin perjuicio del momento de estrechez fiscal que atraviesa el país, advirtió que esta no sería la fórmula adecuada.

En efecto, indicó que la aludida subvención tiene otro propósito. En tal sentido, mencionó que la medida en comento quita autonomía al establecimiento para decidir cómo invertir los recursos y le impide usarlos, por ejemplo, para implementar su Plan de Mejoramiento Educativo.

Por lo demás, previno que el financiamiento de que dispone el sistema educativo para enfrentar los conflictos de convivencia, en definitiva, será el mismo, pues no se inyectan mayores recursos. Si se aumentan las exigencias en esas condiciones, disminuye la calidad del servicio, reflexionó.

Adicionalmente, manifestó que los históricos problemas de ejecución de la SEP no constituyen un argumento del todo robusto para permitir su utilización, toda vez que ello implicará premiar a los sostenedores que sub ejecutan los montos asignados. En cambio, aquellos establecimientos que invierten los recursos e implementan su Plan de Mejoramiento tendrán que buscar un financiamiento adicional para cumplir con esta ley.

2. Gestión colaborativa de conflictos

Al efecto, puso de relieve las siguientes ideas:

- La solución de los conflictos debe estar prioritariamente radicada en los establecimientos.

- La Superintendencia es un mal mediador, pues confunde ese papel con su rol sancionatorio.

- La “valoración positiva” de una iniciativa piloto no es suficiente para sustentar el esfuerzo económico y legislativo que se está realizando.

3. Libertad de enseñanza

Respecto a la libertad de enseñanza -que es un tema fundamentalmente de principios-, subrayó que la imposición de exigencias sin recursos necesariamente implica desviar recursos humanos y financieros a objetivos distintos de los fijados originalmente por el propio establecimiento y por la legislación.

Agregó que lo anterior importa, además, rigidizar la inversión de los recursos, coartando la autonomía de las instituciones educacionales. Esto impide que quienes están a cargo de los establecimientos tomen decisiones sobre lo que estiman más conveniente para llevar adelante el respectivo proyecto educativo.

IV. Resumen

A continuación, realizó una síntesis de la presentación y entregó sus conclusiones:

1. La mala convivencia es un problema a abordar, pero mucho de lo establecido en el proyecto ya existe; por lo tanto, no deberían esperarse cambios relevantes.

2. La dirección del proyecto es errónea, puesto que los reglamentos y protocolos ya están disponibles, y lo que se requiere es autoridad, apoyo y recursos para implementarlos, en lugar de mayor burocracia y sanciones para los sostenedores.

3. No se puede aspirar a un mejor estándar en este ámbito si:

- No se proveen recursos proporcionales a las nuevas exigencias.

- Estas últimas se imponen centralmente.

Por último, razonó que, de no corregirse estos aspectos, no se producirá ningún desastre, sino algo peor: nada.

Al término de las exposiciones del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, y de Acción Educar, intervinieron los señores Senadores e invitados presentes.

El **Senador señor Quintana** manifestó que, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de iniciativas, a propósito de este proyecto hay bastantes coincidencias entre los diferentes sectores, pues el foco está puesto en lo que ocurre en las propias escuelas, pasando otros temas a ser secundarios.

Luego, remarcó que se está intentando dar respuesta a dos problemas vinculados a la convivencia: uno que experimentan los profesores y los demás funcionarios de la educación, y otro que sufren los alumnos. En ambos casos, subrayó, se producen consecuencias de la máxima gravedad; sin embargo, el fenómeno tiene características particulares según quiénes sean las personas involucradas. Estimó que, más allá de los instrumentos genéricos de planificación -como la Política-, deben existir herramientas específicas que permitan atender cada una de estas situaciones, de acuerdo a su naturaleza. En esa línea, expresó preocupación por la eliminación del artículo 16 E que el mensaje presidencial proponía para la [Ley General de Educación](#).

En otro orden de ideas, instó por relevar el papel del profesor jefe, pues se trata de una figura que genera confianza y que tradicionalmente ha estado encargada de guiar a los estudiantes. Consideró que el CPEIP debería realizar esfuerzos por generar instancias de formación especializada al respecto, lo que debe ir acompañado de los incentivos correctos. Junto con lo anterior, juzgó que es necesario también revisar el rol de los orientadores para avanzar hacia un mejor clima.

A su turno, el **Senador señor Sanhueza** previno que un financiamiento insuficiente puede llevar a que esta iniciativa termine siendo letra muerta, al no contar con los recursos que permitan implementarla adecuadamente.

Enseguida, planteó que hay una circunstancia que también debería ser incluida dentro de la discusión: la realización de paralizaciones y tomas. Al efecto, razonó que se trata de situaciones que generan, igualmente, ambientes violentos. Consignó que estas actividades están asociadas a diversas demandas -algunas de las cuales podrán ser válidas y otras no-, pero siempre afectan o impiden el ejercicio del derecho constitucional a la educación de los alumnos no involucrados. Agregó que las movilizaciones convocadas por los propios docentes generan un escenario particular, cual es que las propias personas que imparten la enseñanza las están obstaculizando. En su opinión, es menester estudiar fórmulas para evitar que se vulneren las garantías de los estudiantes.

Más adelante, compartió la importancia que reviste la figura del profesor jefe y, en esa línea, expresó que históricamente había representado la autoridad y la institucionalidad, todo lo cual se fue perdiendo en el tiempo. Aunque la falta de incentivos económicos podría explicar en parte el menor interés por desempeñar este rol, recalcó que antes tampoco existían y, pese a ello, se ejercía igualmente por vocación.

Hizo hincapié en la pertinencia de profundizar la capacitación en materia de liderazgos dentro de los establecimientos. En ese sentido, advirtió que la carrera directiva es un tema pendiente que debe ser abordado, pues los equipos directivos, por sí solos, pueden hacer una gran diferencia. Añadió que, dentro de dicha carrera, podría enmarcarse la jefatura de curso.

Posteriormente, el **Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo**, dijo valorar que existan ciertos consensos, pues ello genera un piso común que facilita el debate. Así, destacó que, por un lado, existe un diagnóstico compartido; y por otro, hay consciencia acerca de la estrecha relación entre la convivencia educativa y los aprendizajes.

Declaró estar de acuerdo con la importancia de la autoridad pedagógica. Al efecto, comentó que los literales b) y c) del numeral 3) del artículo 1° (que modificaban el artículo 10 de la [LGE](#)) aprobados por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados hacían referencia, precisamente, a la autoridad pedagógica y a la autoridad de los asistentes de la educación; sin embargo, tales normas fueron rechazadas en la Sala de dicha Corporación por motivos que no están del todo claros. A partir de las posturas expresadas por los señores Senadores, razonó que es posible pensar en la reposición de disposiciones como las citadas.

Asimismo, celebró que se esté cuestionando el excesivo énfasis que ha existido en las sanciones. Sobre el particular, puso de relieve que el número 11) del artículo 1° (que introducía un nuevo artículo 15 F a la [LGE](#)) aprobado por la Comisión técnica durante el primer trámite constitucional también fue eliminado en la Sala. Este precepto, detalló, contenía importantes innovaciones respecto a la gestión colaborativa de conflictos; la capacitación de docentes y equipos directivos al respecto; y medidas alternativas a la aplicación de sanciones. A su parecer, muchas circunstancias pueden ser resueltas con mecanismos que no suponen un castigo. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró, si es del caso imponer una sanción, no se debe debilitar a quienes deben adoptar esa decisión.

Más adelante, se refirió a los recursos asociados al proyecto. En lo tocante a la tarea de monitoreo de la convivencia que se asigna a la Agencia de Calidad de la Educación, mencionó que se busca reforzar y fijar por ley algo que esta entidad ha estado realizando desde gobiernos anteriores y que ha tenido efectos positivos. Es más, remarcó que se prevé financiamiento destinado a un nuevo funcionario dentro de la División de Estudios de la

Agencia.

En lo que atañe a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), explicó que no supone recursos de libre disposición, sino que estos deben gastarse en los propósitos definidos por la ley, y de acuerdo con los convenios que suscriben los sostenedores y el Plan de Mejoramiento Educativo respectivo. Agregó que, en atención a la relación que existe entre convivencia y nivel de aprendizajes, no queda sino concluir que invertir en un mejor clima escolar es un factor de mejoramiento educativo.

De igual modo, clarificó que no se está imponiendo una obligación de utilizar los recursos de la SEP, sino habilitando su uso para el caso en que la subvención general no permita cubrir la mayor dedicación horaria que esta iniciativa exige a los coordinadores de convivencia educativa. Al efecto, comentó que los actuales encargados de convivencia escolar tienen dedicación exclusiva (con un promedio de 34 horas semanales) en un 67% del sistema, y dedicación parcial en el tercio restante. Entonces, agregó, respecto de este último grupo, se podrá recurrir a la SEP, si las demás fuentes son insuficientes para llegar a la dedicación exclusiva. Manifestó que, por cierto, siempre es deseable un mayor financiamiento, no obstante, en el contexto actual, ello se vuelve bastante complejo; de ahí que es central buscar espacios de eficiencia en el uso de los recursos.

Seguidamente, sostuvo que hay otras discusiones que tienen un carácter más bien ideológico. Así, indicó que diversos preceptos de la iniciativa hacían alusión a categorías especiales -como las relativas al género- que fueron eliminados durante la tramitación en la Cámara de Diputados, con motivo de la incomodidad que provocaban en algunos sectores. Enunció que se intentó buscar fórmulas para resolver ese punto sin desvirtuar el fondo de la política, por ejemplo, introduciendo remisiones a otros cuerpos normativos vigentes, como la [ley N° 21.430](#), sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. De esa manera, consignó, las categorías especiales se encuentran igualmente comprendidas por el proyecto.

Calificó como interesantes las reflexiones efectuadas por el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile en torno a la jefatura de curso y al papel que podría cumplir en materia de convivencia. Relató que, durante la etapa prelegislativa, el magisterio centró sus observaciones en que el coordinador de convivencia solo pudiera ser un profesional de la educación. Al respecto, aclaró que la opinión de la Cartera es que puedan ser otros profesionales, en la medida que se trate de personas idóneas y siempre que estén apropiadamente definidos los perfiles del cargo. Retomando el tema de los profesores jefe, sostuvo que la inclusión de innovaciones -como una mayor cantidad de horas no lectivas o alguna bonificación- generaría un impacto en el gasto que tendría que ser estudiado con mayor profundidad.

A continuación, el **Senador señor Velásquez** señaló que la convivencia educativa es un asunto complejo que podría ser examinado por largo tiempo. En consecuencia, y dada la gravedad de los conflictos que se han observado, instó por centrar los esfuerzos en lograr algunas herramientas concretas que permitan mejorar efectivamente el actual clima.

No hay lugar a dudas acerca de la directa relación entre una sana convivencia y un buen proceso de aprendizaje, agregó. No obstante, abogó por trasladar el foco desde los puntajes académicos hacia los indicadores relativos al clima escolar, considerando que lo primero es el resultado de lo segundo. A su juicio, se debería premiar de alguna manera a aquellas escuelas que logran mejorar su clima escolar.

Igualmente, remarcó que sería importante permear el currículum - incluso con los mecanismos actualmente existentes- para fortalecer la educación en el ámbito socioemocional bajo la guía de los profesores de asignatura y los profesores jefe.

Más adelante, el **Presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile** coincidió en que las agresiones que sufren los alumnos son diferentes a las que experimentan los docentes, añadiendo que las primeras tienen su origen -generalmente- en otros estudiantes, mientras que las segundas tienen fuentes más amplias. Por lo tanto, compartió que el tratamiento de cada caso podría requerir mayor precisión.

En lo tocante a las paralizaciones, remarcó que el derecho a huelga está garantizado tanto por la Constitución como por tratados internacionales, de manera que relativizarlo sería grave. Adicionalmente, recordó que las clases que se pierden como consecuencia de movilizaciones deben ser y, efectivamente, son luego recuperadas, de acuerdo a la normativa vigente. Puntualizó que, evidentemente, lo ideal sería no tener que recurrir a este mecanismo; sin embargo, en ocasiones, es necesario. Indicó que la mejor forma de evitar las movilizaciones es respetar los derechos de los profesionales de la educación.

Acerca del currículum, consideró imprescindible introducir modificaciones, toda vez que actualmente es excesivamente academicista y se encuentra sobreesaturado. Así, por ejemplo, subrayó que una de las actividades que más motiva a los jóvenes y que mejora el equilibrio emocional es el deporte, pese a lo cual tiene mínima presencia en el currículum.

Por último, razonó que reforzar la autoridad docente es clave, ya que el debilitamiento que ha sufrido durante los últimos 20 años ha ocasionado un enorme daño. En tal sentido, mencionó que es relevante fortalecer la autoridad en distintos niveles, desde el director hasta el profesor de aula.

Por su parte, el **Director Ejecutivo de Acción Educar** profundizó en las condiciones a que se ajusta la Subvención Escolar Preferencial. Al efecto, detalló que ninguna subvención es de libre disposición, ya que todas están limitadas por el [decreto supremo N°582, de 2016, del Ministerio de Educación](#), que aprueba reglamento sobre fines educativos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 3º y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación.

Más allá de lo anterior, puso de relieve que esta proposición de ley introduce mayores exigencias para los establecimientos y no trae aparejados recursos adicionales suficientes para darles cumplimiento. Si recurrir a la SEP es la fuente correcta para cubrir estos nuevos gastos -o no-, es un asunto totalmente secundario, afirmó.

6. Subsecretaría de Prevención del Delito¹⁰

La **Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao**, se dirigió a la Comisión, abordando los siguientes aspectos:

I. Introducción

Consignó que el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas tiene por objetivo dotar al sistema educativo de un marco normativo integral a través de:

1. La promoción del bienestar de los integrantes de la comunidad.
2. El fortalecimiento de las políticas para la prevención de factores de riesgo que afectan el clima educativo.
3. La entrega de orientaciones, lineamientos y herramientas para la gestión interna de la convivencia.

Puso de relieve que todo lo anterior busca erradicar los actos de violencia, acoso y discriminación y evitar climas de miedo, intolerancia y exclusión que, indudablemente, deterioran la convivencia. En esa línea, afirmó que, para erradicar la violencia escolar, se debe fomentar una convivencia armónica, garantizar trayectorias educativas seguras y promover el bienestar en las comunidades escolares.

II. Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización en NNA (2023)

1. Aspectos generales

¹⁰ La presentación acompañada puede ser descargada desde el siguiente link:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/2d6e639e-1511-400a-9995-a46566957edf?includeContent=true>

Enseguida, se refirió a la Encuesta Nacional de Polivictimización en Niños, Niñas y Adolescentes, la cual constituye el único estudio en Chile que permite caracterizar en profundidad las experiencias de victimización que sufre dicho grupo desde una perspectiva integral, esto es, en su entorno escolar, familiar y social (la muestra incluye 13.385 casos). Detalló que la primera Encuesta se realizó en 2017 y la segunda en 2023, de manera que ya hay indicadores para comparar.

Luego, recalcó que está dirigida a NNA escolarizados -de 7º básico a 3º medio-, permitiendo medir ocho tipos de victimizaciones que pueden ocurrir en forma separada, pero que, en algunos casos, también pueden ocurrir de forma integrada y acumulada progresivamente en el tiempo (polivictimización).

Asimismo, destacó que, por primera vez, la medición contempló una submuestra cualitativa respecto de NNA del Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito (con riesgo sociodelictual) para contrastar e identificar victimización y polivictimización (muestra de 61 casos).

2. Resultados

Recalcó que los resultados de 2023 muestran que, en general, se mantiene el patrón de 2017, existiendo una mayor proporción de ocurrencia de victimizaciones indirectas de exposición a la violencia en la comunidad, seguido de ataques físicos, y victimizaciones de parte de pares y de cuidadores o padres.

Agregó que se observan aumentos significativos respecto a 2017 en la prevalencia de:

- Maltrato por pares (8 puntos).
- Maltrato por cuidadores o padres (4 puntos).
- Delitos comunes, como el delito de “amenazas” (4 puntos).

Asimismo, destacó que hay un incremento de la victimización en espacios de interacción íntimos de los NNA, como establecimientos educacionales, el hogar o la comunidad (por parte de compañeros, amigos, y cuidadores o padres).

Al comparar entre tipos de establecimientos educacionales, señaló que se advierten patrones similares por tipo de dependencia entre ambas aplicaciones (2017 y 2023). Con todo, detalló algunos aumentos significativos de prevalencias en las diferentes clases de establecimientos:

- Municipales: maltrato de pares.
- Subvencionados: maltrato de pares, maltrato de cuidadores y delitos de amenazas.
- Particulares: delitos de amenazas.

III. Programa Lazos

Acerca del Programa Lazos, comentó que está dirigido a niños, niñas y adolescentes (NNA) de 10 a 17 años con necesidades de atención para reducir su participación en actividades delictuales.

Enseguida, se refirió a los componentes de esta iniciativa, cuales son: 1) Detección temprana; 2) Orientación en parentalidad; 3) Intervención en parentalidad; y 4) Terapia multisistémica.

En lo que atañe a la cobertura del Programa, revisó los datos que constan en la siguiente tabla:

Cobertura		
	Comunas con, al menos, un componente	Comunas con los cuatro componentes
2021/2022	50	5
2023	67	25
2024	73	70
2025	82	82

Más adelante, abordó los resultados arrojados el año 2024 a propósito de cada componente:

1. Detección temprana:

- 15.427 NNA con evaluación sociodelictual.
- 17.188 atenciones / evaluaciones.

2. Orientación en parentalidad:

- 19.475 padres, madres o cuidadores de NNA asistieron a seminario de parentalidad.
- 95,6% consideró que adquirieron habilidades de crianza.

3. Intervención en parentalidad:

- 4.881 padres, madres o cuidadores de NAA recibieron intervención de parentalidad.

- 98,25% declaró un mejoramiento conductual luego de la intervención.

4. Terapia multisistémica:

- 4.269 familias de NNA con alto riesgo sociodelictual recibieron tratamiento con terapia multisistémica.

- 95,68% de los jóvenes vivían en su casa.

- 90,2% de los jóvenes estaban estudiando.

- 89,42% de los jóvenes no tuvieron nuevas detenciones.

En relación con lo anterior, puso de relieve los positivos efectos que percibe la propia comunidad. Añadió que los conflictos de convivencia no pueden ser resueltos únicamente con un trabajo en las escuelas, sino que necesariamente se debe involucrar a las familias. Al efecto, comentó que la violencia que experimentan los jóvenes fuera de los establecimientos educacionales se traslada a estos últimos. Razonó que el Programa Lazos implica una contribución importante, y lo mismo se espera del Programa Piloto Cure Violence.

Más adelante, analizó el presupuesto total asignado a la iniciativa en análisis y, al efecto, precisó que ha aumentado un 151,5% entre 2022 (\$7.078.774) y 2025 (\$17.796.213).

IV. Análisis del proyecto

1. Participación de la Subsecretaría de Prevención del Delito

Recordó que el artículo 16 I) que se propone para la [Ley General de Educación](#) exige a la Subsecretaría de Educación desarrollar una coordinación interinstitucional y una articulación intersectorial sobre aquellos ámbitos de la Política Nacional de Convivencia Educativa y del Plan de Acción de la Convivencia Educativa que requieran en su elaboración y ejecución de la participación de otros órganos de la Administración del Estado.

La misma disposición prescribe que deberá establecer mecanismos eficientes de gestión y funcionamiento, teniendo que considerar aquellos que contempla el inciso segundo. La letra b) de este último tiene el siguiente tenor:

“b) Con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objeto de articular aquellas acciones que garanticen la seguridad del entorno de los establecimientos educacionales, con especial énfasis en la ejecución conjunta de medidas para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, considerando el desarrollo óptimo de la oferta pública para la prevención, atención, resguardo de derechos y mitigación de factores de riesgo. Asimismo, en la elaboración de estudios e investigaciones que permitan generar evidencia para el diseño, monitoreo y evaluación permanente de las políticas públicas, con énfasis en su eficacia.”.

2. Propuestas

Con posterioridad, subrayó que el proyecto de ley se centra en la coordinación interinstitucional para la prevención del delito; medidas de protección a estudiantes en riesgo; y la aplicación efectiva de medidas en casos de violencia, con un enfoque de reinserción educativa.

En atención a lo anterior, formuló una serie de recomendaciones en torno al trabajo de la Subsecretaría de Prevención del Delito con el Ministerio de Educación. En concreto, instó por considerar las siguientes ideas:

- Acciones y medidas generales para la prevención de factores de riesgo, tales como desvinculación educativa, consumo de drogas o alcohol, entre otros.

- Identificación temprana de estudiantes con conductas y factores de riesgo.

- Fomento del Programa Lazos a través de la activación de programas de intervención o acompañamiento, en conjunto con establecimientos y familias, dirigidos a estudiantes con conductas disruptivas.

- Aplicación de estrategias de acompañamiento psicosocial.

- Incorporación de los jefes de los Departamentos Provinciales de Educación en los Consejos Comunales de Seguridad Pública (en el contexto del proyecto de ley de seguridad comunal).

- Actualización de los Planes Comunales de Seguridad Pública para incluir medidas específicas en resguardo de establecimientos educacionales. (en el marco del proyecto de ley, que modifica la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de

seguridad pública y prevención del delito, [Boletín N° 15.940-25](#)).

- Identificación, seguimiento y acompañamiento de estudiantes sancionados con expulsión o cancelación de matrícula, con miras a su adecuada reinserción educativa.

7. Escuelas Abiertas¹¹

La **Directora Ejecutiva de Escuelas Abiertas, señora María Teresa Romero**, realizó una exposición, mediante la cual trató los aspectos que constan enseguida:

I. Introducción

Declaró que el examen de la iniciativa recoge la experiencia docente de los integrantes de la fundación que representa. En esta línea, remarcó que es indispensable prestar apoyo a los profesores que, en el día a día, deben desarrollar sus funciones en el contexto de una sobrecarga laboral y en clases con numerosos alumnos, muchos de los cuales pueden presentar conductas disruptivas o necesidades educativas especiales.

II. Críticas a la proposición de ley

Estimó que el proyecto de ley no soluciona el fenómeno de la mala convivencia educativa. En ese sentido, se abocó a examinar las que serían - a su juicio- las principales deficiencias de la propuesta:

1. Primer problema: ¿más Estado?

Remarcó que la iniciativa supone:

- Más puestos públicos en la Superintendencia de Educación
- Desconfianza hacia los directores y, en general, hacia los equipos directivos de las escuelas.
- Cuestionar la independencia proyecto educativo.
- Relegar la alianza familia-colegio.
- Debilitamiento de la autoridad docente: profesore jefe.
- Consejos escolares que pueden dificultar a los profesores y

¹¹ El documento acompañado puede ser revisado en:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/9a47b4a5-8ad6-4594-b1f5-c23d626375e6?includeContent=true>

equipos directivos tomar decisiones drásticas, cuando son necesarias.

2. Segundo problema: mayor burocracia

Más adelante, planteó que la mayor carga administrativa que contempla el proyecto se traduce en:

- Más “papeleo”.
- Más deberes para los profesores, lo que genera un desgaste y un menor grado de atención para los alumnos.
- Menos herramientas.
- Un excesivo protagonismo de las denuncias ante la Superintendencia, y de las fiscalizaciones y sanciones.
- Procesos rígidos, largos y lentos.

3. Tercer problema: no otorga financiamiento

Después, en relación con el aspecto presupuestario, recalcó que se pueden realizar las siguientes observaciones:

- No se aportan nuevos recursos ni herramientas.
- Falta implementar programas de prevención, que son esenciales.
- No permite trabajar en las habilidades socioemocionales, incluyendo a las familias.
- Hay una ausencia de asistencia jurídica.

III. Sugerencias

En términos generales, sentenció que el foco de la iniciativa debería estar puesto en la sala de clases, que es el lugar en que ocurren los aprendizajes y donde se produce la interacción profesor-estudiante. En consonancia con lo anterior, formuló una serie de recomendaciones:

1. Autonomía de los proyectos educativos

En lo que concierne a este tema, hizo un llamado por:

- Confiar en las decisiones de las escuelas, que conocen mejor su propia realidad y todas sus particularidades.

- Otorgar mayor autonomía a los establecimientos y a sus equipos directivos.

- Potenciar la alianza familia-colegio.

2. Autoridad docente

Al efecto, instó por:

- Alivianar la carga administrativa, ya que los docentes deben volver a la sala de clases y al recreo, y retomar el contacto con los alumnos.

- Reforzar a los profesores jefe, liberándolos de tareas administrativas y entregándoles incentivos para asumir ese papel.

- Fortalecer el concepto de autoridad.

3. Financiamiento

Adicionalmente, planteó que la proposición de ley debería incluir mayores recursos destinados a:

- Subir los sueldos.

- Contratar expertos que apoyen a los profesores que requieran de ayuda para abordar situaciones complejas y que contribuyan a implementar programas de prevención o de desarrollo de habilidades socioemocionales.

IV. Conclusiones

A modo de síntesis, opinó que la iniciativa debería experimentar algunas modificaciones, especialmente, en el siguiente sentido:

1. No aumentar el rol del Estado y, en cambio, dar un mayor grado de autonomía e independencia a cada proyecto educativo.

2. Disminuir la burocracia y ampliar el terreno para la confianza hacia los profesores, potenciando especialmente a la figura del profesor jefe.

3. Incluir más recursos y herramientas para los colegios, otorgando financiamiento para contar con más especialistas.

8. Agencia de Calidad de la Educación¹²

¹² El documento utilizado como apoyo puede ser descargado desde el siguiente link: <https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/e23b88a8-5aeb-43ef-99c2-0513faa02389?includeContent=true>

El **Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Gino Cortez**, efectuó una presentación, que dividió en los siguientes puntos:

I. Rol de la Agencia en el ámbito de la convivencia y bienestar socioemocional

Comentó que, desde hace más de 10 años, la Agencia tiene un rol clave en el seguimiento y monitoreo de la convivencia y el bienestar socioemocional.

Asimismo, enunció que dicho organismo promueve un modelo de toma de decisiones basada sobre la evidencia y, por tal motivo, proporciona diversas herramientas orientadas a una gestión apoyada en datos. En esa línea, relató que, a través de las herramientas e indicadores que ha ido creando, entrega información al sistema educativo, a sostenedores, a establecimientos, y a madres, padres y apoderados.

Su capacidad de adaptación a las necesidades del sistema, agregó, le ha permitido desarrollar mecanismos altamente valoradas por las comunidades -como el diagnóstico integral de aprendizaje (DIA) socioemocional y el DIA convivencia-, que ofrecen información clave para realizar un diagnóstico y monitoreo.

II. Apoyos para el sistema educativo

Hizo hincapié en que la discusión pública sobre bienestar socioemocional y convivencia escolar tomó fuerza durante la pandemia y en años posteriores. Sin embargo, señaló que la discusión respecto a una visión integral de la calidad de la educación data desde hace más de una década.

Indicó que las iniciativas han apuntado a distintos niveles de toma de decisiones:

Nivel	Herramientas
Macro	-Ley N° 20.529, que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad -Decreto supremo N° 381, de 2013, del Ministerio de Educación, que establece otros indicadores de calidad -Política de Reactivación
Meso	-Portal de categorías de desempeño -Reportes a las autoridades regionales -Orientaciones a los sostenedores
Micro	-DIA Socioemocional -DIA Convivencia -Reportes para establecimientos

-Plataforma de datos

III. Indicadores de desarrollo personal y social (IDPS)

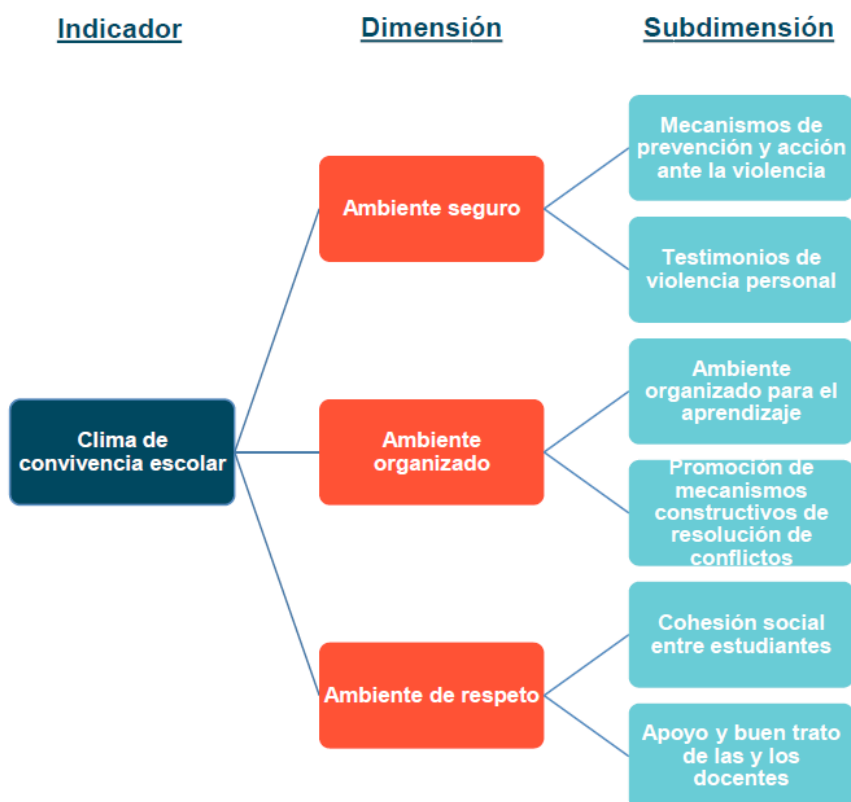
Los IDPS son índices elaborados por el Ministerio de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación mediante el [decreto supremo N° 381, de 2013, del Ministerio de Educación](#), que establece los otros indicadores de calidad educativa a que se refiere el artículo 3º, letra a), de la ley N° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización.

Tales indicadores, detalló, amplían el concepto de calidad educativa al incluir aspectos que van más allá del conocimiento académico, en línea con los objetivos generales de la educación establecidos en la ley.

Enunció que los aspectos medidos son:

Autoestima y motivación escolar	2 dimensiones	4 subdimensiones
Clima de convivencia escolar	3 dimensiones	6 subdimensiones
Participación y formación ciudadana	3 dimensiones	6 subdimensiones
Hábitos de vida saludable	3 dimensiones	6 subdimensiones

A modo de ejemplo, se refirió al indicador de clima de convivencia escolar, el cual se basa sobre la percepción de los miembros de la comunidad educativa acerca del ambiente de respeto, seguridad y organización en el establecimiento, según consta enseguida:



Sostuvo que, con miras a fortalecer la toma de decisiones apoyada en evidencia, las comunidades educativas cuentan con un nuevo resultado, a saber, los niveles de desarrollo. Consignó que estos incluyen:

- Indicador: resultados promedio de cada establecimiento, con sus tendencias, y comparación con GSE comparable y nacional.
- Dimensión: resultados promedio de cada establecimiento, con sus tendencias.
- Subdimensión: distribución de estudiantes en distintos niveles de desarrollo.

IV. Diagnóstico integral de aprendizajes (DIA) socioemocional y convivencia

Relató que se trata de un instrumento creado en el marco de la pandemia de COVID-19, como una manera de aportar a los establecimientos educacionales, desde una perspectiva formativa.

Luego, precisó que está referido a 8.228 establecimientos inscritos, con un total de 1.254.018 estudiantes.

Más adelante, se refirió a los elementos evaluados, a saber:

1. Actividad socioemocional evaluativa (1° a 3° básico): espacios de expresión y diálogo que evalúan habilidades socioemocionales de niñas y niños según el nivel, como la conciencia de sí mismo; la conciencia de otros; inclusividad; colaboración y comunicación; empatía; y prosocialidad.

2. Cuestionario de aprendizaje socioemocional (4° básico a IV medio): aprendizaje en habilidades socioemocionales específicas (aprendizaje socioemocional personal, comunitario y ciudadano), considerando:

- El desarrollo de los estudiantes.
- La gestión que lleva a cabo el establecimiento para favorecer los aprendizajes.

3. Cuestionario de convivencia (4° básico a IV medio): experiencia y percepción de los estudiantes en cuanto a la convivencia en su curso y establecimiento; y a la forma en que este último genera acciones, en distintos niveles, para promover y asegurar una convivencia basada sobre el buen trato, el bienestar y la participación.

V. Monitoreo de la convivencia

Posteriormente, indicó que este monitoreo surge como respuesta a los desafíos en convivencia escolar tras el cierre prolongado de escuelas por la pandemia de COVID-19. Añadió que forma parte del Plan de Reactivación Educativa 2022, que fue impulsado por el Ministerio de Educación.

Recalcó que se centra en los componentes de convivencia y salud mental, evaluando la convivencia en las comunidades educativas, a la vez que atiende aspectos socioemocionales y de bienestar subjetivo.

Adicionalmente, planteó que tiene por base los datos de los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la Educación (se aplican el día del SIMCE), y del Programa Habilidades para la Vida de JUNAEB.

Subrayó que esta herramienta permite mejorar estrategias de convivencia y diseñar políticas públicas para fortalecer el bienestar socioemocional en las escuelas.

Ahondando, después, en los temas evaluados, se refirió a los siguientes:

Ambiente	4	Mide la percepción y experiencia de
----------	---	-------------------------------------

seguro	subdimensiones	seguridad en la comunidad educativa.
Ambiente organizado	3 subdimensiones	Mide la existencia y cumplimiento de normas de convivencia.
Ambiente de respeto	2 subdimensiones	Mide el trato respetuoso y la confianza relacional.
Gestión de la convivencia	2 subdimensiones	Mide los mecanismos para prevenir la violencia y resolver conflictos.
Bienestar	4 subdimensiones	Mide la satisfacción laboral, fatiga, y bienestar escolar y laboral.
Participación	3 subdimensiones	Mide la identificación con el establecimiento y la participación de estudiantes y apoderados.

Constató que los principales resultados obtenidos en cada aspecto fueron:

- Ambiente seguro: un 78,3% percibe su comunidad educativa como segura, pero un 20% aún reporta situaciones de inseguridad.

- Ambiente organizado: el 64,1% percibe un ambiente normado y ordenado. Los estudiantes muestran menor percepción positiva en comparación con docentes y apoderados.

- Ambiente de respeto: el 75,2% de los actores percibe respeto en la comunidad educativa, aunque los alumnos de II medio reportan una menor percepción de respeto que en 4° básico.

- Gestión de la convivencia: la percepción es menor en educación media que en básica, para todos los actores.

- Bienestar: mientras en 4 básico el 86,2% de los estudiantes reporta bienestar, en II medio el porcentaje baja a 60,6%.

- Participación: los alumnos y apoderados de II medio perciben menor participación en comparación con los de educación básica.

Finalmente, remarcó que la Agencia cuenta con los tres mecanismos que fueron revisados, cada uno de los cuales tiene un propósito diferente. Así, mencionó que el monitoreo de la convivencia es un mecanismo más flexible que otros, pues permite incluir preguntas sobre dimensiones contingentes de cada época. Sostuvo que el IDPS, en tanto, tiene ventanas de modificación cada seis años, ya que de ese modo se busca estabilidad y comparabilidad. Por su parte, enunció, el DIA hace posible entregar detalles por estudiante, para que sea el establecimiento educacional el que tome decisiones particulares, en función de lo que ocurre en su interior.

Al término de las últimas tres exposiciones, los señores Senadores plantearon algunas observaciones y consultas.

El **Senador señor Espinoza** solicitó a los representantes del Ejecutivo profundizar en el financiamiento dispuesto para el proyecto de ley. En esa línea, razonó que ha habido otras iniciativas que, generando muchas expectativas, no han producido los efectos esperados, debido a la insuficiencia de los recursos asignados para su implementación.

De igual forma, pidió a la invitada de Escuelas Abiertas que ahondara en aquellos elementos que serían esenciales para que la propuesta legislativa esté en sintonía con la realidad que se vive en las escuelas.

A su turno, el **Senador señor Velásquez** preguntó a la señora Subsecretaria cuál es su percepción acerca de la utilización de los espacios públicos a lo largo del país. Sobre el particular, coligió que un trabajo a nivel de los barrios podría cambiar algunas conductas conflictivas que se advierten en el ámbito educativo.

Consultó la opinión de Escuelas Abiertas sobre la estrategia que habría que seguir para fortalecer la autoridad de los docentes y de los equipos directivos.

Adicionalmente, planteó que los resultados académicos que arrojan las mediciones que aplica la Agencia de Calidad de la Educación siempre generan mayor interés que aquellos relativos a la convivencia y al bienestar socioemocional. A su juicio, los esfuerzos deberían concentrarse en este segundo campo, toda vez que los aprendizajes es consecuencia del clima escolar. Solicitó al Secretario Ejecutivo de la Agencia expresar su opinión al respecto.

Con posterioridad, el **Senador señor Quintana** lamentó que no se hayan entregado sugerencias más concretas en relación con el proyecto de ley.

Luego, manifestó que -a su parecer- el Programa Lazos es una herramienta que podría ser potenciada para contribuir a cumplir los fines previstos por la normativa en estudio, toda vez que permite pesquisar conductas disruptivas a nivel de territorios. Sentenció que el coordinador de convivencia educativa debería tener algún nexo directo con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Al efecto, aclaró que, evidentemente, no todos los NNA van a cometer conductas penales, pero pueden incurrir en actividades que resultan anticipatorias de una posterior trayectoria delictiva.

Más adelante, pidió a la representante de Escuelas Abiertas

detallar la manera en que la relación escuela-familia puede ser reforzada, pues se trataría de un elemento central para mejorar la convivencia. Sentenció que, en cambio, la búsqueda de una mayor autonomía para los establecimientos no es una fórmula que vaya a solucionar el mal clima, ya que hasta el momento no ha dado buenos resultados. En lo que atañe a la contratación de más profesionales, consignó que no contribuirá necesariamente a resolver el problema, mientras no haya una estrategia a seguir.

La **Subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitaó**, comentó que se han hecho relevantes esfuerzos por recuperar espacios públicos, tanto desde el nivel central, como desde los gobiernos regionales y las municipalidades. Agregó que hay iniciativas vinculadas a la infraestructura y otras como el Sistema Nacional de Seguridad Municipal que logran mejorar los barrios y, así, motivar a la comunidad a utilizarlos nuevamente, por ejemplo, para actividades culturales, deportivas, etcétera. Acotó que esto -a su vez- erradica un uso no deseable de esos espacios.

Después, se refirió al Programa Lazos y a la forma en que el coordinador de convivencia educativa podría vincularse con ese u otro mecanismo de la Subsecretaría. Al efecto, consignó que, pese a no estar previsto expresamente por el articulado, no habría inconvenientes en implementar esa relación, por cuanto la normativa propuesta contiene un mandato de coordinación interinstitucional.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó que la mayoría de los NNA que llegan al Programa Lazos están desescolarizados o tienen una asistencia irregular a los establecimientos educativos. Dado que la deserción escolar está fuertemente conectada a la delincuencia, constató que se está trabajando con fuerza en la revinculación.

Adicionalmente, previno que la intervención de la Subsecretaría podría darse a propósito de los establecimientos públicos, pero no de los particulares pagados o subvencionados. En ese sentido, recordó que estos últimos son los que concentran la mayor matrícula en el país y, por tanto, habría que buscar una fórmula que permita incluirlos dentro de un trabajo colaborativo, sin vulnerar su autonomía. Anunció que se intentaría elaborar una propuesta al respecto.

A continuación, la **Directora Ejecutiva de Escuelas Abiertas, señora María Teresa Romero**, manifestó que lo central es apoyar a los profesores que están en la sala de clases por medio de especialistas. Relató que los actuales encargados de convivencia dedican alrededor de un 90% de su tiempo a trámites administrativos, en lugar de colaborar con los docentes con programas de desarrollo socioemocional y de prevención.

Igualmente, puso de relieve que potenciar a los profesores jefe es

fundamental para realizar un trabajo junto a las familias y a los estudiantes. Para ello, constató, es imprescindible liberarlos de cargas y generar incentivos para que asuman ese rol. Además, señaló que, en ese marco, es necesario fortalecer la autoridad docente.

El **Senador señor Quintana** remarcó que hay bastante consenso en torno a la pertinencia de reforzar la figura del profesor jefe, lo que tendría incidencia también en la recuperación de la autoridad docente. Hizo un llamado al Ejecutivo a tomar en consideración estas ideas.

A su turno, el **Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, señor Gino Cortez**, consignó que está claro el diagnóstico respecto a los problemas de convivencia educativa y que es menester avanzar en las soluciones. Comentó que, desde el papel que corresponde cumplir a la Agencia, se han hecho esfuerzos por entregar oportunamente información relevante a los distintos actores del sistema, así como herramientas de análisis de los datos aportados.

Añadió que la entidad que dirige forma parte de distintas alianzas con otras instituciones. Al efecto, recalcó que enfrentar el mal clima escolar exige un trabajo conjunto y coordinado entre diferentes instituciones -tanto públicas como privadas- que pueden contribuir en ese sentido. Así, por ejemplo, hay algunas fundaciones que han implementado algunas iniciativas interesantes que pueden ser replicadas a mayor escala.

Acerca de los resultados que arroja el SIMCE, enunció que para la prensa es más atractivo resaltar los puntajes asociados a los aprendizajes de cada establecimiento. No obstante, destacó que la Agencia, a través de diferentes instancias, ha intentado difundir entre las comunidades una noción de calidad educativa más amplia e integral. En efecto, remarcó que no es casual que las escuelas con conflictos de violencia obtengan peores puntuaciones en las áreas de aprendizaje.

Seguidamente, la **asesora del Ministerio de Educación, señora Francisca Córdova**, expresó que existe un diagnóstico compartido al interior del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, del que forman parte tanto el Ministerio como la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación.

En lo que atañe al papel de la Superintendencia, previno que hay una sobrecarga que deriva de las múltiples denuncias que son recibidas. Sobre el particular, recordó que se pretendía entregar nuevas atribuciones a este organismo en materia de gestión colaborativa de conflictos, a fin de brindar una alternativa diferente a la aplicación de sanciones; no obstante, las normas relativas a este punto fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. Indicó que esta medida -que se buscará reponer- permitiría un mejor abordaje de los problemas al interior de los establecimientos.

Más adelante, recordó que este proyecto de ley no representa el comienzo de la preocupación por los problemas de convivencia. En esa línea, hizo hincapié en que, desde 2011, todos los establecimientos deben contar con un encargado de esta materia. Sin embargo, comentó que, luego de estos años de experiencia, se han advertido una serie de defectos: no siempre hay personal idóneo; no hay una orientación clara en cuanto al rol que debe cumplir el encargado, que opera muchas veces de forma reactiva; y no hay una dedicación exclusiva. Detalló que la iniciativa, junto con cambiar el nombre del encargado por el de coordinador -lo que da cuenta del involucramiento de toda la comunidad en la solución de las dificultades-, resuelve los temas señalados.

De igual modo, sostuvo que había preceptos que estaban encaminados a relevar el respeto por la autoridad pedagógica y la autoridad de los asistentes de la labor pedagógica; no obstante, fueron rechazados en el primer trámite constitucional. Mencionó que la intención del Ejecutivo es instar por su reincorporación. Asimismo, destacó que existe el compromiso del Ejecutivo de estudiar eventuales enmiendas para reforzar la figura del profesor jefe.

Se refirió, luego al financiamiento de la proposición de ley. Al efecto, planteó que hoy los establecimientos cuentan con recursos altos en comparación con su nivel histórico, lo que les permitiría cubrir la brecha horaria respecto a los coordinadores de convivencia. Agregó que existen otras herramientas a las que ya pueden recurrir, como la participación voluntaria en el Diagnóstico Integral de Aprendizajes de la Agencia de Calidad de la Educación, que permite acceder a información relevante para la toma de decisiones. Adicionalmente, recalcó que el Ejecutivo abogará por la reposición de normas que incluían la asesoría del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas en los procesos de capacitación de los establecimientos en cuanto a la gestión colaborativa de conflictos.

9. Fundación Trabùn¹³

El **Director Ejecutivo de Fundación Trabùn, señor Juan Antonio Álvarez**, realizó una exposición, abordando los aspectos que constan enseguida:

I. Introducción

Inició su intervención señalando que existe un diagnóstico compartido en cuanto a los problemas de convivencia educativa, que

¹³ La presentación puede ser revisada en:

<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/f0eb5361-31db-44a9-88bf-cc2b9fe6fe6e?includeContent=true>

considera los siguientes elementos: a) El foco ha estado puesto en resolver urgencias más que en prevenir; b) Faltan herramientas; y c) Ha habido un aumento en la complejidad y gravedad de los conflictos.

Luego, comentó que, desde la Fundación que representa, se ha desarrollado un trabajo en torno a las habilidades socioemocionales en conjunto con más de 250 comunidades educativas, lo que ha incluido a más de 2.000 docentes y 120.000 estudiantes.

II. Aspectos a valorar de la iniciativa de ley

1. Participación colaborativa

Manifestó que la participación responsable lleva a fortalecer el sentido de pertenencia y la adherencia a las normas. En ese sentido, celebró que el proyecto considere este elemento en relación con: a) La creación de la Política de Convivencia Educativa; y b) Un trabajo intersectorial en materia de educación.

2. Relevancia transversal

Asimismo, calificó como positivo que, para la elaboración de esta proposición de ley, se hayan tenido a la vista diversas iniciativas previas que han logrado posicionar en el debate público la necesidad de regular los ejes de la convivencia. Añadió que ello se ve reflejado en: a) La relevancia que se ha dado a legislador sobre este tema; y b) Un acuerdo político transversal al respecto.

3. Mínimos establecidos

De igual modo, destacó los siguientes aspectos:

a) Coordinador de convivencia a tiempo completo: se fortalece el rol de los coordinadores de convivencia con una jornada completa, la integración a los equipos educativos y el establecimiento de perfiles adecuados.

b) Inclusión de la educación parvularia en la Política: se propone cambiar el nombre de la Política, reemplazando la expresión “convivencia escolar” por “convivencia educativa”, para abarcar toda la trayectoria y modalidades de enseñanza.

III. Elementos generales a perfeccionar

Luego, se refirió a algunos aspectos globales que sería recomendable mejorar; a saber:

1. Aprendizaje socioemocional para una formación integral: es necesario ahondar los esfuerzos en el desarrollo de habilidades intrapersonales (orientadas a conocer, regular y gestionar las emociones propias), las habilidades interpersonales (que están asociadas a las relaciones con los otros y al desarrollo de aptitudes como la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de la empatía); y las habilidades de ciudadanía.

2. Foco promocional-preventivo vs. foco reactivo-punitivo: la propuesta de ley aplica, más bien, un enfoque reactivo-punitivo, ya que -más allá de lo meramente declarativo- no incluye realmente soluciones promocionales y preventivas.

3. Implementación como la clave del éxito: es indispensable diseñar apropiadamente la manera en que los lineamientos de la Política se concretarán en el quehacer de los establecimientos.

4. Asignación de recursos y tiempo: si bien es complejo pensar en la asignación de un mayor financiamiento en el contexto actual, se podría evaluar la posibilidad de priorizar de otra forma el presupuesto destinado al sector educacional, en lugar de pedir a los establecimientos que asuman nuevas tareas con los mismos recursos.

IV. Propuestas

Después, realizó una serie de sugerencias específicas:

1. Respecto a los estudiantes

a) A corto plazo

Instó por destinar 90 minutos semanales a la asignatura de orientación, asegurando -al menos- 45 minutos para la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales desde la educación parvularia, ya que cumplen un rol preventivo.

b) A largo plazo

Hizo un llamado por:

- Establecer estándares nacionales de aprendizaje socioemocional, articulando los marcos conceptuales hoy dispersos (y que hoy se encuentran, por ejemplo, en instrumentos como los IDPS y el DIA).

- Impulsar programas de aprendizaje socioemocional - desarrollados por el Ministerio, organizaciones o los propios establecimientos-, dado su impacto comprobado en la convivencia escolar y

el bienestar estudiantil.

2. Respecto a los profesionales de la educación

a) A corto plazo

Abogó por avanzar en:

- La formación continua para asistentes de la educación, docentes y directivos en habilidades socioemocionales, convivencia escolar y resolución de conflictos.

- El fortalecimiento del rol del profesor jefe, pues es clave en el desarrollo socioemocional y el sentido de pertenencia de los estudiantes

b) A largo plazo

Asimismo, exhortó a realizar esfuerzos con miras a:

- Reforzar la formación inicial docente en aprendizaje socioemocional, gestión de conflictos y convivencia escolar positiva, lo que podría ser considerado a la hora de evaluar la acreditación.

- Mejorar las condiciones laborales, esto es, reducir la sobrecarga laboral y asegurar mejores remuneraciones e incentivos.

V. Una voz desde las escuelas

Al finalizar la exposición, se dirigió a la Comisión la **Directora de la Escuela Piloto Pardo de Valparaíso, señora Gisela Rivera**, que ha trabajado junto a la Fundación Trabùn.

Citando al señor Juan Andrés Zúñiga -Director de la Escuela Carlos Prats González de Huechuraba-, señaló que quienes se desempeñan al interior de establecimientos educacionales “no estamos ajenos a las necesidades de aprendizaje socioemocional, porque en la vida diaria debemos nutrirnos con estos elementos en las relaciones con nuestras familias, relaciones con los apoderados y en las relaciones de nosotros como funcionarios de la escuela. Necesitamos tener herramientas para llevar adelante un aprendizaje socioemocional adecuado”.

Hizo un llamado a adoptar medidas sistemáticas y a inyectar recursos suficientes, a fin de generar un impacto real en materia de convivencia educativa. Asimismo, instó por la implementación de programas estratégicos y con enfoque preventivo, que nazcan a partir del currículum y que se inserten en el día a día de las escuelas. De igual modo, abogó por garantizar una formación continua de los distintos actores de las

comunidades educativas.

10. Municipalidad de Temuco¹⁴

El **Alcalde de Temuco, señor Roberto Neira**, efectuó una presentación, mediante la cual abordó la situación que vive la referida comuna en materia de convivencia escolar y la forma en que ello ha impactado en la seguridad al interior de los establecimientos.

I. Introducción

Expresó que la realidad en materia de convivencia y violencia escolar de Chile ha cambiado, volviéndose más compleja. En este escenario, remarcó, los alcaldes han debido adoptar decisiones al respecto

II. Contexto regional y comunal

1. Región de La Araucanía

En lo que respecta a la salud mental, detalló que el año 2024 hubo 2.300 intentos suicidas, lo que representa un incremento del 93% en comparación con el año anterior. Agregó que el 71,9% de los casos reportados corresponde a personas del rango etario de 10 a 19 años. Advirtió que Temuco es la comuna con mayor cantidad de casos.

2. Temuco

En cuanto a la convivencia en los establecimientos educacionales municipales de Temuco, consignó que existe un aumento significativo -tanto a nivel cuantitativo como cualitativo- respecto de la complejidad de los casos: en 2023 hubo 2.717 y en 2024 hubo 2.908. Al efecto, planteó que hay una predominancia de supuestos de maltrato escolar e incremento de casos asociados a salud mental. Sobre estos últimos, precisó que en 2023 hubo 468 casos, mientras que en 2024 hubo 582.

Adicionalmente, comentó que se presentaron tres episodios de violencia con arma blanca en el Liceo Superior de Comercio (INSUCO) Tiburcio Saavedra Alarcón. Relató que, en este contexto, se resolvió la implementación de un nuevo programa, que incluía -entre diversas medidas- la instalación de un pórtico detector de metales.

III. Programa “Temuco educa y protege”

Seguidamente, se refirió al instrumento de planificación diseñado y

¹⁴ Se acompañó un documento que puede ser descargado desde el siguiente link:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/01237112-c03c-46b7-b408-3a00537f2c42?includeContent=true>

a sus principales características:

1. Primer eje: protección social

Explicó que este eje supone la instalación de un esquema de protección social integral que articule la oferta municipal a familias vulnerables del sistema de educación municipal de Temuco.

Solo en 2024, añadió, se atendió a 120 estudiantes y sus familias con ayudas sociales y paliativas.

2. Segundo eje: prevención y salud mental

Al efecto, sostuvo que implica mejorar las condiciones para que el alumno pueda enfrentar los aprendizajes y su relación con el entorno escolar de manera más exitosa, a través de una política comunal de cuidados y salud mental escolar integral.

Detalló que se ha traducido en los siguientes mecanismos: a) Encargado de convivencia y dupla psico-social en todos los establecimientos educacionales municipales; b) Creación de las unidades Espacio Joven y Oficina Municipal de la Juventud, para un abordaje comunitario; y c) Diseño de un modelo de salud mental escolar con uso de tecnología.

3. Tercer eje: seguridad escolar

Puso de relieve que este eje entraña promover un entorno escolar seguro, inclusivo y propicio para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes, incorporando la prevención de situaciones de riesgo (como vendedores de droga que rondan las escuelas)

Al respecto, se han implementado las siguientes medidas: a) Patrullaje preventivo en los establecimientos; b) Mesa de Seguridad Escolar en cada establecimiento; c) Diseño de protocolo de seguridad ante situaciones críticas constitutivas de delitos; y d) Instalación de pórticos detectores de metales.

IV. Pórtico detector de metales

Más adelante, ahondó en la iniciativa consistente en implementar detectores de metales en los establecimientos educacionales y, al respecto, remarcó que su objetivo general es mejorar la seguridad escolar, garantizando un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

En cuanto a los objetivos específicos de esta medida, manifestó que busca: a) diagnosticar necesidades de seguridad en los

establecimientos; b) fomentar la participación de la comunidad educativa en seguridad escolar; y c) planificar la implementación de detectores de metales.

Enseguida, se refirió a la experiencia piloto del pórtico detector de metales que se instaló en el INSUCO de Temuco, detallando las distintas etapas de trabajo:

1. Antes: amplio proceso de consulta a la comunidad educativa. Señaló que el proceso de consulta a la comunidad educativa se aplicó en 10 establecimientos educacionales (con participación de 3.000 personas), donde más de un 80% de la comunidad educativa aprobó la instalación de este dispositivo.

2. Durante: elaboración de un protocolo claro y debidamente difundido. Consignó que el protocolo debía ser aprobado por el consejo escolar y luego difundido a la comunidad (incluyendo un diagrama). Preciso que el procedimiento no considera la revisión de la mochila, salvo si el estudiante voluntariamente muestra el contenido; en caso contrario, se contacta a los apoderados.

3. Después: evaluación positiva y sin incidentes en el funcionamiento. Mencionó que el período de marcha blanca operó en total normalidad, sin incidentes y con una recepción positiva por parte del estudiantado. Añadió que, ante la detección de metales y emisión de la alarma, 40 estudiantes han accedido a mostrar voluntariamente el contenido de sus mochilas. Asimismo, relató que se han concretado visitas de organismos como la Superintendencia de Educación, la Defensoría de la Niñez, y el INDH.

V. Observaciones en torno al proyecto de ley

Refiriéndose, luego, al contenido de la proposición legislativa, valoró positivamente los siguientes elementos:

- Incluye con fuerza el componente de la participación de las comunidades educativas.
- Establece un estándar mínimo necesario de orientación y lineamientos claros para la gestión de la convivencia.
- Considera la coordinación interinstitucional para abordar la convivencia escolar.

Sin perjuicio de lo anterior, sentenció que el Estado no puede cerrarse a buscar nuevas formas de abordar la problemática asociada a la violencia y la mala convivencia escolar a partir de iniciativas participativas

que incorporen el uso de tecnología en materia de seguridad. Recalcó que herramientas como los pórticos detectores de metales son empleados en diferentes espacios, como tribunales o aeropuertos, y nadie cuestiona su utilización en menores de edad en ese marco. Hizo un llamado a dejar de lado los sesgos ideológicos que puedan existir al respecto.

11. Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo¹⁵

La **Presidenta de la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo, señora Erika Castro**, realizó una exposición, mediante la cual trató los siguientes asuntos:

I. Introducción

Comenzó su intervención recalcando que la Fundación que dirige busca alcanzar un mundo más justo, pacífico e inclusivo, especialmente para todas las infancias, y para ello, se trabaja en la consolidación de la educación como un espacio de transformación mediante programas formativos y recursos didácticos que promuevan una cultura de paz, resiliencia e inclusión.

Adicionalmente, explicó que su exposición fue desarrollada en conjunto con la Federación Nacional de Orientadores Educativos de Chile.

II. Factores centrales a propósito de la violencia escolar

1. Factores de riesgo

Explicó que los factores de riesgo son condiciones, dinámicas o interacciones que, en distintos niveles del sistema (familiar, escolar, institucional, comunitario y social), aumentan la probabilidad de que ocurra la violencia o se perpetúen los conflictos dentro de una comunidad educativa.

Enunció que este enfoque reconoce que la violencia no surge de forma aislada ni individual, sino como el resultado de múltiples influencias interrelacionadas; a saber: a) Violencia en la familia; b) Malas prácticas docentes; c) Climas laborales deteriorados o fracturados; d) Redes sociales sin educación ni mediación adulto-pedagógica; y un mal uso de las pantallas y exposición a contenidos violentos; e) Ausencia de herramientas del equipo directivo (las jefaturas no modelan una convivencia saludable o evitan abordar conflictos); f) Ausencia de herramientas del equipo de convivencia; g) Descoordinación o descalificación entre los adultos de la comunidad educativa; h) Fragmentación del trabajo intersectorial (salud, infancia,

¹⁵ La presentación se encuentra disponible en:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/3437a047-758d-4e80-94d5-3a31fdd43006?includeContent=true>

seguridad, justicia, etc.); i) Aulas sobrepobladas, patios de recreo sin descansos y hacinamiento escolar; y j) Ausencia de contención, escucha activa y validación emocional, lo que propicia la acumulación de tensión, rabia y frustración.

2. Factores protectores

Comentó que los factores protectores son pilares para el bienestar, el aprendizaje y la gestión resiliente de los vínculos en la comunidad educativa.

Detalló que entre ellos se encuentran los siguientes: a) Integración curricular de la convivencia educativa, con un enfoque técnico-pedagógico; b) Un equipo docente empático y bien coordinado; c) Una familia que colabora con la escuela desde el respeto mutuo; d) Espacios físicos adecuados para el descanso, el juego y las experiencias positivas en el vínculo; e) Equipos docentes, profesionales y directivos formados en resolución pacífica de conflictos para contextos de alta complejidad; f) Orientación como un espacio dedicado a los aprendizajes sustantivos para las relaciones interpersonales; g) La filosofía como un espacio privilegiado para el desarrollo ético y la capacidad reflexiva; h) Innovación en las prácticas de aula; i) Los niños sanan aprendiendo: innovación, creatividad, amor por aprender y enseñar; j) Presencia activa y capacitada de equipos de convivencia; y k) Clima laboral saludable.

III. Observaciones generales en torno al proyecto de ley

Más adelante, advirtió que hay deficiencias estructurales que comprometen la viabilidad de la iniciativa. En esa línea, destacó los problemas críticos identificados:

1. Diagnóstico deficiente: carece de base científica sólida; y no comprende en profundidad la complejidad de la violencia.
2. Sobrecarga docente: impone responsabilidades excesivas a los educadores, comenzando por las que derivan de la interinstitucionalidad.
3. Falta de claridad: contiene roles y funciones ambiguamente definidos.
4. Ausencia de enfoque formativo: carece de estrategias preventivas.
5. Intersectorialidad inefectiva: la coordinación institucional es burocrática.
6. Equipos ignorados: excluye a equipos de convivencia educativa

existentes.

7. Falta de innovación: metodologías obsoletas para gestionar la convivencia.

8. Gestores confusos: la figura de los gestores colaborativos no tiene una definición operativa clara.

9. Familia ausente: ignora el papel fundamental del entorno familiar.

10. Implementación curricular ausente: omite la integración pedagógica para una prevención efectiva.

En términos generales, instó por efectuar una revisión profunda de la proposición de ley para garantizar políticas de convivencia escolar efectivas y sostenibles, sin generar cargas administrativas excesivas.

IV. Comentarios específicos en relación con la iniciativa

1. Definición de buena convivencia educativa

Acerca de la definición de buena convivencia educativa (artículo 16 A propuesto para la [Ley General de Educación](#) por el artículo 1° numeral 4) del proyecto), estimó que, si bien incluye elementos valiosos, su redacción presenta importantes limitaciones. Planteó que, por un lado, desde una perspectiva técnico-pedagógica, el uso del verbo "promover" resulta insuficiente. En este sentido, subrayó que promover no es lo mismo que formar activamente, y así se diluye la responsabilidad pedagógica del sistema educativo en la enseñanza explícita de la convivencia como contenido curricular y formativo.

Por otro lado, sentenció que el texto no reconoce el rol de los equipos docentes, las familias, ni los actores formativos especializados - como orientadores, psicólogos o encargados de convivencia-, cuya participación es clave para que la convivencia no solo se gestione, sino que se enseñe, se acompañe y se viva.

Declaró que la propuesta se percibe como incompleta y carente de profundidad pedagógica, al no asumir la convivencia como una dimensión estructural del desarrollo educativo. Sostuvo que, para que esta definición tenga real impacto, debe reforzarse con acciones curriculares concretas, recursos pedagógicos, tiempo protegido para la formación en habilidades socioemocionales, y un enfoque explícito de ciudadanía para la paz.

2. Financiamiento para una infraestructura educativa que permita un buen convivir

Remarcó que es indispensable asignar recursos destinados a:

a) Ampliación y aumento de salas en los establecimientos: para eliminar la sobrepoblación en las aulas.

b) Mejoramiento de espacios formativos: optimizar la infraestructura de espacios dedicados a artes, deportes, música, espiritualidad y ecología, reconociendo su importancia para fortalecer la convivencia y promover el bienestar integral.

c) Fortalecimiento de patios de recreo: se trata de espacios didácticos que fomenten el descanso activo, el juego cooperativo y la vivencia de valores.

3. Reequilibrio en el enfoque: de lo sancionador a lo formativo-preventivo

Al efecto, abogó por considerar las siguientes ideas:

a) Espacios curriculares específicos: incorporar espacios como las EPAC (Estrategias para el Aprendizaje Circular) en cada asignatura, de manera de enseñar convivencia educativa y fortalecer los objetivos transversales.

b) Evaluación continua: crear mecanismos de evaluación que verifiquen la aplicación de los objetivos transversales en el aula y el desarrollo de aprendizajes para la vida.

c) Programas formativos: fortalecer la capacitación de equipos educativos en ciudadanía para la paz, y en competencias socioemocionales y socioecológicas

d) Protocolos de prevención: implementar protocolos de intervención temprana y prevención efectiva en todos los niveles educativos.

En este orden de ideas, hizo hincapié en las siguientes reflexiones:

a) La filosofía como pilar formativo: actualmente, filosofía solo se imparte en 3º y 4º medio, pese a que constituye un espacio clave para desarrollar capacidades esenciales en la formación ciudadana (pensamiento crítico, diálogo y tolerancia, decisiones éticas, reflexión comunitaria y prevención de la radicalización). Su naturaleza reflexiva y ética, agregó, fortalece habilidades fundamentales para la convivencia que se proyecta hacia una ciudadanía para la paz.

b) La promoción del juego como estrategia pedagógica: se debería
 i) Reconocer el juego como estrategia fundamental para desarrollar habilidades socioemocionales y éticas en todo el ciclo escolar; ii) Incorporar orientaciones para que los establecimientos incluyan metodologías lúdicas y cooperativas, tanto en el aula como en espacios de recreo; y iii) Implementar patios didácticos, talleres de juegos cooperativos y recursos gamificados que fortalezcan la convivencia desde el aprendizaje activo.

4. Relevancia de los profesores orientadores educacionales

En relación con este punto, remarcó que sería positivo:

a) Reconocer el rol de los profesores orientadores: su integración en equipos de convivencia es clave para estrategias formativas preventivas. Asimismo, planteó que es necesario consolidar el desarrollo de los ejes de las bases curriculares de forma real.

b) Fortalecer la asignatura de orientación: sería apropiado ampliarla a dos horas pedagógicas semanales para implementar estrategias formativas y preventivas en concordancia con los ejes de las bases curriculares.

En este marco, puso de relieve que la iniciativa debería considerar las siguientes funciones clave del profesor orientador: participación intersectorial activa; mediación y resolución de conflictos en los establecimientos; apoyo socioemocional para estudiantes; implementación curricular efectiva de la asignatura de orientación; funciones técnico pedagógicas (artículo 8° de la [ley N° 19.070](#), Estatuto Docente); y participación obligatoria en los equipos de convivencia.

5. Implementación curricular de la convivencia educativa

A su juicio, el Ministerio de Educación debería acelerar la incorporación de procesos formativos de convivencia educativa en las asignaturas de orientación, consejo de curso, filosofía y formación ciudadana.

En esa línea, constató que es recomendable:

- Desarrollar programas que alineen a todos los actores educativos con el propósito formativo del currículum nacional, integrando la convivencia educativa como eje transversal mediante las EPAC, y fortaleciendo habilidades y criterios orientados al desarrollo integral estudiantil.

- Promover la ciudadanía para la paz como elemento transversal en la convivencia educativa.

- Incorporar recursos pedagógicos innovadores que potencien el aprendizaje socioemocional y la resolución pacífica de conflictos.

6. Profesionalización de los equipos de convivencia educativa y mayor dotación

Estimó que es imprescindible avanzar en:

a) Innovación en estrategias de intervención en crisis, tales como i) Implementar metodologías basadas en evidencia para gestión de crisis escolares; ii) Desarrollar protocolos de actuación para atención temprana de conflictos; y iii) Apoyar al equipo docente con estrategias preventivas en aula.

b) Formación especializada, lo que supone i) Capacitar en gestión de crisis y entrevistas complejas a los equipos de convivencia, profesores jefes, psicólogos, orientadores e inspectores; y ii) Dotar de herramientas efectivas para consolidar entornos educativos resilientes y seguros.

c) Evaluación de resultados e impacto, lo que implica i) establecer indicadores de medición de impacto; y ii) Fomentar la transparencia y presentación de resultados ante la comunidad educativa y las familias.

7. Incorporación formal del coordinador de convivencia al equipo directivo

Manifestó que el coordinador de convivencia debería integrar oficialmente al equipo directivo de cada establecimiento, reconociendo su rol estratégico en la gestión institucional y en la promoción de una convivencia basada en el respeto, inclusión y bienestar comunitario.

8. Modernización del perfil del psicólogo educacional

Hizo hincapié en que esta tarea requiere:

a) El fortalecimiento de su rol: reforzar su participación activa en el diseño e implementación de estrategias de prevención socioemocional y manejo de crisis.

b) Formación continua: garantizar su capacitación en intervenciones terapéuticas breves, apoyo psicoeducativo, prevención del acoso escolar y resolución de conflictos.

c) Lineamientos específicos: establecer pautas para su actuación en la promoción del bienestar estudiantil, intervención en conflictos y

desarrollo de programas socioemocionales.

d) Perfeccionamiento de informes: mejorar la estructura de los informes psicológicos para alinearlos con los actuales desafíos socioemocionales, educativos y curriculares.

9. Modernización del perfil del inspector educacional

Más adelante, sostuvo que la transformación del rol del inspector educacional abarca tres áreas clave, a saber:

a) Fortalecimiento del rol formativo: potenciar su función basada en valores para la gestión disciplinaria y marcos normativos, asegurando su participación en el manejo efectivo de situaciones complejas.

b) Lineamientos específicos: definir pautas concretas para promover el cumplimiento del reglamento interno, con base en la disciplina formativa sustentada en valores.

c) Formación continua: asegurar capacitación en disciplina formativa, contención emocional, entrevistas en crisis, prevención del acoso escolar y resolución pacífica de conflictos.

10. Plan Nacional de Formación Psicoeducativa para las Familias

Resaltó que las familias deben retomar su rol colaborador en este ámbito, para lo cual sería recomendable implementar medidas que impliquen:

a) Metodologías innovadoras: incorporar métodos formativos accesibles para todas las familias, independiente de su nivel de participación escolar.

b) Prevención de violencia intrafamiliar: desarrollar programas para erradicarla.

c) Desarrollo de competencias: fortalecer habilidades parentales para la resolución de conflictos y el apoyo efectivo a los procesos educativos.

Finalizadas las tres exposiciones anteriores, se abrió un espacio para formular comentarios y consultas.

El **Senador señor Velásquez** valoró las propuestas concretas que han efectuado los invitados, ya que constituyen un aporte que permitirá perfeccionar la iniciativa.

Asimismo, subrayó que se han puesto de relieve ciertas ideas que

han sido compartidas en sesiones anteriores, como la necesidad de potenciar el papel de los orientadores y de introducir un mayor acompañamiento profesional para los establecimientos.

Solicitó profundizar en la manera en que las actuales herramientas disponibles en el sistema podrían ayudar a resolver los problemas vinculados a la convivencia educativa. En definitiva, solicitó destacar los aspectos positivos del actual esquema.

Por su parte, el **Senador señor Quintana** celebró igualmente que se hayan realizado sugerencias específicas para mejorar el proyecto.

Luego, hizo hincapié en que algunos elementos generan bastante consenso entre los diferentes especialistas que han sido escuchados, como la pertinencia de aplicar un enfoque promocional y preventivo; potenciar la figura del profesor jefe; y reconsiderar el rol de orientadores e inspectores. Preguntó cuáles deberían ser los incentivos para motivar a los docentes a adoptar el papel de profesor jefe.

Después, planteó que las municipalidades y los demás sostenedores no pueden sino asegurar un ambiente seguro para las comunidades escolares. En el caso de la municipalidad de Temuco, estimó que esa tarea ha sido asumida con responsabilidad. Al efecto, destacó que la instalación de un pórtico detector de metales -que podría asociarse a un enfoque punitivo- no es una medida aislada, sino que está acompañada por una planificación que incluye otras acciones desarrolladas junto a las familias. En relación con esto último, consultó qué trabajo se debe realizar junto a las familias para mejorar el clima escolar.

Coincidió con los expositores en cuanto a la necesidad de contar con mayores instancias de capacitación de los profesionales de la educación y reiteró -tal como lo había hecho en sesiones previas- la pertinencia de recurrir al CPEIP para estos efectos.

A su turno, el **Senador señor Sanhueza** compartió la importancia de potenciar los conocimientos en materias asociadas a la convivencia. Sobre el particular, hizo un llamado a reflexionar en torno al papel que están jugando las universidades en la formación de los profesionales en el marco de un ambiente generalizado de mayor violencia. En esa línea, constató que se debe poner atención tanto en la instrucción de los futuros docentes como en la actualización de los profesores ejercicio.

En lo tocante a los enfoques que pueden aplicarse en este campo, estimó que es incorrecto plantear que alguno es preferible a otro, ya que no operan en un mismo nivel. Así, remarcó que una mirada punitiva -que incluye mecanismos como Aula Segura- dice relación con hechos ya consumados, respecto de los cuales se debe generar una respuesta. Consignó que, en

tanto, la perspectiva preventiva debe estar presente en fases anteriores, que son aquellas a las que apunta la iniciativa en análisis.

Concordó también acerca de la relevancia de fortalecer la figura del profesor jefe, así como los equipos directivos.

En lo que atañe a la asignatura de filosofía, si bien consideró que su contenido es de máxima importancia, razonó que podría no ser el mecanismo más amigable o motivador para que los alumnos adquieran habilidades socioemocionales. A su juicio, hay ramos más lúdicos -como religión- para formar en principios y valores. Adicionalmente, planteó que las referidas habilidades deben formar parte integral de la enseñanza y de la comunidad educativa, ya que ninguna asignatura o estamento debería estar excluido de esta materia.

Acerca de la seguridad al interior de los establecimientos, remarcó que se trata de un aspecto central. En este orden de ideas, valoró que en Temuco haya sido abordado a partir de un programa amplio, que incluye medidas que van mucho más allá de la instalación de un pórtico detector de metales y que fueron implementadas con la participación de la comunidad involucrada.

Seguidamente, el **Senador señor Espinoza** agradeció las recomendaciones y también las críticas formuladas en torno a la proposición de ley. Comentó que puede haber muy buenas intenciones detrás del diseño de las normas; sin embargo, es necesario reforzar las medidas que se han propuesto para que cumplan efectivamente su cometido.

En lo tocante a los planteamientos de los señores Senadores, el **Director Ejecutivo de Fundación Trabùn, señor Juan Antonio Álvarez**, consignó que -en su opinión- uno de los aspectos positivos del actual sistema es el entusiasmo y la buena disposición de los docentes y los diferentes trabajadores de la educación para aprender y avanzar en una mejor convivencia.

Luego, manifestó estar de acuerdo con el carácter central de la formación continua en este ámbito. Añadió que debe comenzar en las mallas de las carreras de pedagogía, siempre con la mirada puesta en lo preventivo, ya que -tal como afirmó el Senador Sanhueza- la perspectiva punitiva tiene lugar ante hechos ya ocurridos.

Acerca de la instancia en que deben aprenderse habilidades socioemocionales, remarcó que deberían ser transversales a todas las asignaturas y a toda la comunidad educativa. Sin perjuicio de ello, reconoció que algunos ramos -como filosofía, religión y orientación- son más afines a la enseñanza explícita de contenidos éticos, lo que luego puede servir de base para el resto del proceso.

En términos generales, hizo un llamado a considerar los mecanismos que se han propuesto para concretar los lineamientos que contiene el proyecto. En ese sentido, mencionó que -por ejemplo- se podría disminuir las horas lectivas de los profesores jefe para que dispongan de más tiempo para vincularse con los estudiantes y sus familias; o considerar la jefatura de curso dentro de la carrera docente.

Con posterioridad, el **Alcalde de Temuco, señor Roberto Neira**, subrayó que toda medida de seguridad a aplicar en los establecimientos debe enmarcarse en una planificación mayor e incluir una intervención integral.

Agregó que la solución a las dificultades que se advierten en esta área debe mirar no solo a los individuos involucrados, sino también al entorno en que se desenvuelven. En esta línea, afirmó que los problemas y la violencia presente en los barrios o en las familias se trasladan hasta las escuelas. En atención a lo anterior, manifestó que el trabajo intersectorial es fundamental para que los establecimientos se coordinen con los organismos públicos competentes en diferentes ámbitos.

Adicionalmente, puso de relieve que es menester asignar recursos suficientes para mejorar, entre otros aspectos, la infraestructura de las unidades educativas, de manera de asegurar ciertas condiciones mínimas.

De igual modo, consideró que el papel de los profesores jefe y de los orientadores debería ser reforzado.

Después, la **Presidenta de la Fundación Conexiones Inclusivas para el Mundo, señora Erika Castro**, consignó que el eje formativo y preventivo debe inspirar esta iniciativa de ley, la cual debe incluir mecanismos concretos y operativos, a fin de que las habilidades socioemocionales formen parte de la vida cotidiana de las comunidades educativas.

Añadió que esta clase de formación debe estar en las aulas y en los patios de recreo. En ese sentido, recalcó que debe existir infraestructura apropiada para el descanso y el juego colaborativo entre los estudiantes.

Más adelante, sentenció que los profesores no son educadores emocionales, sino que son quienes transmiten los saberes de la humanidad. Razonó que los docentes deberían estar en la sala de clases innovando y despertando el amor por aprender entre los alumnos. Complementando lo anterior, señaló que es indispensable profesionalizar a los integrantes de los equipos de convivencia, ya que son quienes deberían estar centrados en este asunto y, pese a ello, no cuentan con las herramientas suficientes para enfrentar las complejidades actuales vinculadas a la violencia.

Por último, el **señor Ministro** puso énfasis en que la divergencia de opiniones es propia de todo debate democrático. Manifestó que el sistema educacional constantemente se ve enfrentado a desafíos emergentes, que son propios de una sociedad que cambia en el tiempo, todo lo cual exige una adaptación que -lamentablemente- no siempre se produce con la velocidad requerida.

Agregó que esta es la primera vez que se presenta una propuesta de marco normativo integral acerca de la convivencia educativa -y sus múltiples dimensiones-, la cual estuvo precedida de un profundo y extenso trabajo prelegislativo que incluyó a diversos actores, como organizaciones de la sociedad civil, entidades gremiales, especialistas, etcétera. Asimismo, recordó que el proyecto del Ejecutivo fue refundido con mociones parlamentarias que buscaban contribuir en esta materia.

A continuación, remarcó que los conflictos de convivencia tienen múltiples expresiones e intensidades. Sostuvo que hay consenso acerca de la pertinencia de excluir una mirada punitiva de esta iniciativa, pues la aplicación de mayores sanciones no ha mejorado el escenario. Así, planteó que al interior de las comunidades educativas debe emplearse un enfoque colaborativo en la gestión de los conflictos, para resolverlos antes de que escalen; de ahí que es más relevante otorgar a la Superintendencia de Educación atribuciones que vayan en esa línea, antes que fortalecer su facultad de fiscalización.

Enseguida, estimó relevante distinguir entre los asuntos que son propios del proyecto en examen y aquellos que no lo son. En ese sentido, explicó que, por ejemplo, temas como los programas de estudio y la distribución de las horas del currículum forman parte de otra discusión y tienen mecanismos propios de modificación. Sin perjuicio de ello, declaró que la convivencia educativa está considerada transversalmente en la propuesta de bases curriculares que está en evaluación.

En lo que atañe a las supuestas deficiencias en el diagnóstico y a la insuficiencia de bases científicas, replicó que la aproximación a esta materia se encuentra sustentada en los antecedentes de las instancias técnicas del Ministerio, así como en datos obtenidos de otras fuentes, como instituciones de educación superior y evidencia comparada.

En relación con el papel de los docentes en la implementación de la ley, remarcó que el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile participó en el análisis de los mecanismos para mejorar la derivación de los estudiantes a organismos de otros sectores. Por lo demás, subrayó que el gremio expresó su adhesión a la proposición de ley, más allá de las sugerencias que efectuaron, verbigracia, respecto a fortalecer la figura del profesor jefe.

Luego, negó que el proyecto carezca de un enfoque formativo y de estrategias preventivas, y refutó que los equipos de convivencia estén siendo ignorados. Al efecto, afirmó que, por primera vez, se habla de la construcción de equipos de convivencia, que contarán con instrumentos de gestión y con responsables que cambian en su concepción (esto es, los coordinadores de convivencia).

12. Fundación Educación 2020¹⁶

La **Directora Ejecutiva de la Fundación Educación 2020, señora Ingrid Olea**, realizó una exposición, que dividió en los siguientes puntos:

I. Escenario actual

Entregó una serie de antecedentes que -a su juicio- resulta pertinente tener a la vista para discutir en torno a la convivencia educativa:

a) Estudiantes:

- En 2023, un 57% consideraba que sus compañeros respetaban las normas de convivencia; mientras que en 2028 ese porcentaje era de 71%.

- Uno de cada tres cree que la violencia “es un medio válido para lograr lo que uno quiere” (2018).

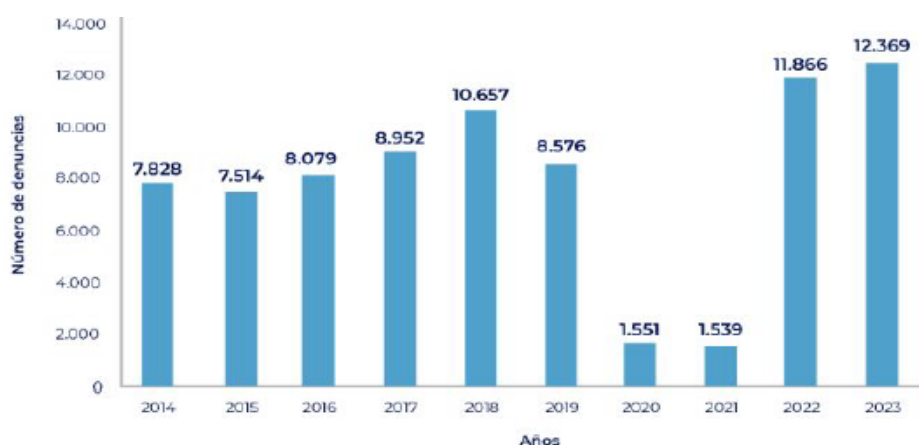
b) Docentes:

- Un 40% deja el ejercicio profesional en los primeros cinco años, y un 10,7% lo hace durante el primer año.

- Solo un 15% cree su profesión es valorada en la sociedad.

En lo que respecta al número de denuncias por problemas de convivencia escolar ingresadas a la Superintendencia de Educación, exhibió el siguiente gráfico:

¹⁶ La presentación acompañada puede ser revisada en el siguiente link:
<https://microservicio-documentos.senado.cl/v1/archivos/cdc97aab-041c-4a51-bf8e-d48a78ab3bea?includeContent=true>



En lo que atañe a la percepción de convivencia escolar en estudiantes de 4° básico, revisó los datos que constan a continuación:

Porcentaje de estudiantes que perciben que:	2018	2023	Var. (p.p.)
Los profesores les tratan con respeto	91,1%	88,8%	-2,3
Los estudiantes se tratan con respeto	59,7%	53,3%	-6,4
Los estudiantes respetan las normas de convivencia	71,3	57%	-14,3

A partir de la información anterior y desde la experiencia de Educación 2020, efectuó los comentarios que siguen:

- Las comunidades educativas que han sufrido daños y violencia requieren mayor acompañamiento y apoyo por parte del nivel local y central.

- Hay debilidades en la cantidad de profesionales que trabajan en la educación socioemocional (los equipos psicosociales son pocos y no dan abasto).

- Hoy recaen altas expectativas sobre los colegios, y se les exige más de lo que pueden y deben abarcar.

II. Opinión acerca de la convivencia educativa

Seguidamente, sentenció que la escuela no es solo “un lugar” que los alumnos pasan un tiempo, sino que forman parte integral de la sociedad. En ese sentido, expresó que:

- La violencia es un fenómeno multicausal que refleja problemas de la sociedad en su conjunto.

- Los establecimientos y sus profesionales no pueden hacerse cargo de todo: las escuelas deben ser vistas como parte de una red

intersectorial.

III. Análisis de la proposición de ley

1. Aspectos positivos

a) Del proyecto original

En cuanto al texto inicialmente planteado, valoró los siguientes aspectos:

- Aborda la convivencia desde un enfoque formativo y no punitivo.
- Armoniza las políticas nacionales, optimizando recursos y esfuerzos.
- Recopila datos y evidencia para la toma de decisiones pedagógicas.

b) De las enmiendas introducidas en el primer trámite constitucional

En lo tocante a las modificaciones que fueron incorporadas en la Cámara de Diputados, celebró que:

- Refuerzan el rol de apoyo de la Superintendencia en materia de capacitación.
- Explicitan el papel de la Agencia en relación con la provisión de datos y evidencia.
- Reconocen el rol de los actuales encargados de convivencia y lo ajustan al nuevo esquema.
- Otorgan al sistema un período de adecuación.

2. Áreas de mejora

a) Intersectorialidad

Acerca de la intersectorialidad que considera la iniciativa, realizó las siguientes observaciones:

- Entendiendo la convivencia como un fenómeno social, no se puede pedir al colegio que lo solucione solo.
- Se incorporó la coordinación intersectorial a nivel nacional, pero

se debe apoyar en el intersector local (principalmente, en los dispositivos disponibles a nivel municipal).

- La [ley N° 21.430](#) -sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia- da un marco legal para que el municipio juegue un rol clave.

b) Enfoque de derechos

Después, realizó una serie de comentarios inspirados en un enfoque de derechos:

- Los contextos donde ocurren vulneraciones se deben considerar para definir los cursos de acción.

- El uso de información (incluso desagregada) supone un riesgo de estigmatización de ciertas comunidades o lugares que se debe sopesar y, por tanto, se deben implementar salvaguardias para proteger la privacidad y dignidad.

IV. Conclusiones

Sobre la base de lo precedentemente señalado, efectuó algunas reflexiones finales:

- Es valorable la discusión y avance de este proyecto.

- La prevención y promoción son elementos clave, pero son medidas costosas y complejas que no pueden recaer únicamente en la escuela; en consecuencia, la coordinación intersectorial en todos los niveles y el enfoque de derechos es indispensable.

- Desde Educación 2020 existe plena disposición para continuar aportando en la tramitación, y posterior implementación y seguimiento de la ley.

13. Movimiento con mis hijos no te metas

La **Presidenta del Movimiento con mis hijos no te metas, señora Ingrid Bohn**, declaró que valora la intención que hay tras el proyecto en examen, cual es hacerse cargo de la mala convivencia escolar que afecta diariamente a los alumnos, profesores y directivos.

Sin embargo, expresó su inquietud por la mirada impositiva de la proposición legal. Al efecto, indicó que el articulado establece cargas de distinto tipo para los sostenedores, los establecimientos educacionales, los equipos directivos y los profesores, sin asignar una ayuda económica adecuada. En su

opinión, esto llevará a un aumento del nivel de trabajo, desviando la atención que corresponde a la educación de los alumnos.

A modo ilustrativo, hizo alusión al deber de promover la participación de todas las personas de la comunidad educativa, facilitando medios físicos o tecnológicos; y a la obligación de contar con un equipo de convivencia liderado por un coordinador, el cual deberá cumplir con ciertos requisitos profesionales y tendrá dedicación exclusiva. Acerca de los gastos que generarán las medidas anteriores, manifestó su preocupación por la utilización de la Subvención Escolar Preferencial, toda vez que sus recursos están orientados a ayudar a los estudiantes más vulnerables.

Enseguida, criticó que la iniciativa esté estableciendo la obligatoriedad del Consejo Escolar en todos los establecimientos, con un importante rol en la actualización de algunos instrumentos como el Plan de Gestión de Convivencia Educativa y el reglamento interno. A su juicio, ello sería problemático, pues altera la organización de cada establecimiento y afecta la libertad de enseñanza en su interior.

Por último, se refirió a una norma que -según estimó-, probablemente, el Ejecutivo intentará reponer. En concreto, aludió al artículo 16 E que el mensaje presidencial proponía para la [Ley General de Educación](#) y que fijaba los contenidos de los reglamentos internos sobre convivencia educativa y buen trato. Consignó que tal precepto, que fue rechazado en la Cámara de Diputados, disponía que se debía promover el respeto y reconocimiento a la diversidad de identidad sexoafectiva y de género.

Al efecto, opinó que de ese modo se busca imponer una determinada visión de la sexualidad, en circunstancias que los colegios y los padres tienen la libertad de enseñar al respecto, sin discriminar, pero de acuerdo a sus convicciones. Aseveró que, como organización, reciben constantemente denuncias sobre niños muy pequeños que han sido víctimas de operativos y talleres en que se les pregunta su identidad de género y orientación sexual.

Relató que, en una reunión sostenida entre el Ministro de Educación y distintas organizaciones, hubo un compromiso por suprimir el artículo en comento; sin embargo, durante el primer trámite constitucional, el Ejecutivo defendió con fuerza esa disposición.

14. Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile (CONFEP)

La **Presidenta de CONFEP**, señora **Erika Muñoz**, celebró que se esté debatiendo un proyecto sobre convivencia escolar, dado que los problemas en este ámbito -aunque se han agravado últimamente- siempre han estado presentes. No obstante, estimó que es indispensable tramitar la

iniciativa con suficiente tiempo y reflexión, remarcando que -a su juicio- se está incurriendo en algunas desprolijidades.

Advirtió que el articulado debería poner mayor énfasis en el trabajo que se debe llevar adelante con las familias en la prevención, y que vaya más allá de la mera entrega de información de parte de los establecimientos sobre el Plan de Gestión de Convivencia Educativa y el reglamento interno.

A modo ilustrativo, recalcó que la letra c) del inciso tercero del artículo 16 D que se propone incorporar a la [Ley General de Educación](#), exige que el Plan citado contenga “acciones de promoción del bienestar y salud mental, orientadas a los distintos estamentos de la comunidad educativa, con especial énfasis en la prevención de conductas suicidas, en la salud mental laboral y en el abordaje de factores de riesgo, tales como el consumo de drogas, alcohol, tabaco, y de aquellas conductas que infringen la ley”.

Ese punto, coligió, debería quedar abarcado por el trabajo intersectorial que se debe realizar con otros Ministerios, como el de Salud; sin embargo, cabe preguntarse cómo esta última Cartera -que ya está bastante saturada- va a desarrollar tareas de prevención junto a las familias y las personas que trabajan en los establecimientos. En esa línea, hizo presente que -por ejemplo- conseguir una hora con un especialista de salud mental dentro del sistema público es muy complejo.

Adicionalmente, previno que la iniciativa no se hace cargo de la responsabilidad que corresponde asumir a los padres y apoderados por las conductas violentas que puedan ejecutar los alumnos en los establecimientos. Si bien la normativa propuesta impone el deber de poner en conocimiento de los padres y apoderados los instrumentos normativos y de planificación internos, estimó que aquellos deberían asumir un compromiso acerca del cumplimiento de las reglas y lineamientos asociados a la convivencia.

En otro orden de ideas, abogó por establecer con mayor claridad que el Consejo Escolar tiene un carácter meramente consultivo. Aunque la preceptiva contempla que dicho órgano puede emitir su opinión en el proceso de actualización del Plan de Gestión, consideró que es menester precisar que su parecer no es vinculante. En relación con este tema, señaló que todos los establecimientos que reciben recursos del Estado tienen el deber de contar con un Consejo Escolar. No obstante, planteó que el proyecto también es aplicable a los colegios particulares pagados, que no tendrían -a su entender- esa obligación.

Adicionalmente, sentenció que la proposición legislativa no sería inclusiva, toda vez que no considera la situación de los alumnos con

necesidades educativas especiales, como los niños con trastorno del espectro autista. En este orden de ideas, remarcó que se menciona a la [ley N° 21.430](#) -sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia- y se hacen remisiones a otros cuerpos legales que consagran categorías especiales de protección, pero no se contempla el caso de aquellos estudiantes. Las comunidades educativas, agregó, no tienen herramientas para abordar supuestos de violencia en que estos alumnos se ven involucrados, sea como víctimas o como agresores.

Después, sostuvo que algunas medidas que se pretende implementar no estarían suficientemente avaladas por la evidencia, como ocurre con la gestión colaborativa de conflictos, mecanismo respecto del cual no hay experiencia previa.

En lo que respecta al financiamiento, criticó que se haya optado por recurrir a los fondos de la SEP para solventar los mayores gastos, ya que no todos los establecimientos educacionales -como las escuelas de lenguaje- reciben esos recursos.

Asimismo, objetó que desde el Estado se vayan a tomar decisiones respecto a los establecimientos particulares subvencionados o pagados, considerando que los padres han elegido esos proyectos educativos debido -precisamente- a la insatisfacción con la oferta pública.

15. Escuela de Educación Emocional

El Fundador de la Escuela de Educación Emocional, señor Juan Casassus, declaró que, en términos generales, apoya esta iniciativa de ley; con todo, estimó que podría tener una mayor envergadura.

Indicó que el tema de la violencia y el malestar de los profesores es bastante grave. La evolución de las sociedades, añadió, ha generado un perjuicio muy serio entre los jóvenes. En esa línea, planteó que la OCDE ha concluido que estos últimos se encuentran en una posición sin precedentes en la historia: se caracterizan como individualistas, indiferentes, solitarios, estresados y menos sensibles.

Puso de relieve que la proposición de ley importa un proceso de apoyo del Estado y sigue un principio interesante que puede resumirse en la expresión “a convivir se aprende”. Recalcó que el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes en esta materia no está siendo totalmente comprendido y por ello las acciones que ejecutan las familias, los establecimientos y demás entidades no están produciendo el efecto esperado. Sin duda, planteó, las nuevas tecnologías deben ser tenidas en consideración a este respecto, ya que han generado una suerte de abandono de lo corporal y lo emocional: un mundo sin materialidad ni emociones no tiene ética, no distingue entre el bien y el mal, y no distingue entre la violencia y la paz.

Instó por celebrar, al término de la tramitación de este proyecto, un gran seminario o congreso académico, a fin de examinar la situación socioemocional que están viviendo hoy los estudiantes y recabar ideas sobre la mejor forma de implementar la normativa.

Al finalizar las cuatro presentaciones anteriores, el señor Ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo, comentó que, efectivamente, mantuvo una reunión con algunas organizaciones -entre otras, el Movimiento con mis hijos no te metas- para tratar normas específicas de la iniciativa; concretamente, las relativas a la identidad sexoafectiva y de género de los estudiantes, y al Consejo Escolar.

Sobre el primer tema, explicó que el artículo 16 B que el mensaje presidencial proponía para la [Ley General de Educación](#) fue modificado durante el primer trámite constitucional y ya no hace alusión a categorías especiales de protección. En efecto, el inciso tercero original rezaba lo siguiente:

“Respecto a los actos u omisiones que constituyan discriminación, se estará a lo dispuesto en la ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación. Asimismo, se deberán contemplar medidas especiales de prevención y protección, cuando concurren razones de pertenencia étnica, nacionalidad, posición socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, orientación sexual o afectiva, género, identidad y expresión de género, enfermedad, discapacidad, características genéticas o condición de salud mental o física.”.

Subrayó que, en tanto, el actual inciso sexto del artículo 16 B, que pasó a regular esta materia y que es fruto de una indicación del Ejecutivo, prescribe que:

“Cada establecimiento y comunidad educativa deberá prestar especial y preferente protección a las y los estudiantes, de acuerdo con su edad y condición, en el marco del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, establecido en la ley N° 21.430.”.

En atención a lo anterior, estimó que es delicado señalar que hubo incumplimiento de los compromisos asumidos por parte del Ministerio.

En lo tocante al segundo tema, aclaró que los lineamientos principales del Consejo Escolar están contemplados por el [decreto supremo N° 24, de 2005, del Ministerio de Educación](#), que los reglamenta. Dicho cuerpo normativo, agregó, dispone que ese órgano tiene un carácter informativo, consultivo y propositivo, salvo que el sostenedor decida otorgarle

-además- un carácter resolutivo. Acotó que, entonces, se trata de un asunto que queda entregado a la autonomía de cada sostenedor.

C.- VOTACIÓN EN GENERAL Y FUNDAMENTO DE VOTO¹⁷

- Puesta en votación la idea de legislar, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión, Senadores señores Espinoza, Quintana, Sanhueza y Velásquez.

Al fundamentar su voto, el **Senador señor Sanhueza** manifestó que, sin duda, es indispensable legislar en torno a los problemas de convivencia educativa. Remarcó que, a lo largo del debate, se han expresado distintas visiones y opiniones sobre la normativa propuesta, las cuales deberán ser consideradas a la hora de discutir en particular la iniciativa.

Por su parte, el **Senador señor Espinoza** expresó que, si bien votaría favorablemente el proyecto en esta etapa, será menester resolver -en lo sucesivo- una serie de aspectos que han generado preocupación entre los distintos actores y organizaciones del sistema educativo.

El **Senador señor Quintana**, en tanto, señaló que los diversos invitados que fueron escuchados han entregado luces acerca de la problemática que se está abordando. Destacó que, por cierto, hay consenso en torno a la necesidad de avanzar en soluciones legislativas para los conflictos de convivencia educativa, algunos de los cuales han tenido graves consecuencias. Con todo, indicó que algunos elementos de la iniciativa deben ser perfeccionados en las siguientes fases de tramitación. Así, por ejemplo, se refirió al rol de los orientadores y de los profesores jefe, que debería ser fortalecido. De igual modo, consignó que es necesario precaver una mayor carga administrativa para los establecimientos.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

A continuación, se transcribe literalmente el texto del proyecto de ley despachado por la Cámara de Diputados, y que la Comisión de Educación propone aprobar en general:

PROYECTO DE LEY:

¹⁷ Los fundamentos de voto que se transcriben en esta parte del Informe de la Comisión deben entenderse complementados con las opiniones y observaciones planteadas por sus integrantes durante todo el transcurso de la discusión en general con ocasión de las intervenciones que hicieron los distintos invitados a la instancia.

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005:

1. Reemplázase en el inciso primero del artículo 9° la frase “señalados en esta ley” por “de todas las personas integrantes de la comunidad educativa”.

2. Reemplázase el artículo 15 por el siguiente:

“Artículo 15.- Los sostenedores asegurarán las condiciones para que en los establecimientos educacionales de su dependencia, a través de sus directores, se promueva la participación de todas las personas de la comunidad educativa, especialmente, por la vía de facilitar los medios físicos o tecnológicos que tengan a disposición, para la conformación del Centro de Alumnas y Alumnos o de Estudiantes, del Centro de Padres y Apoderados, del Consejo de Profesores, del Consejo Escolar y, en los casos que determina la ley, del Consejo de Educación Parvularia, con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje de párvulos y estudiantes.

En los casos que corresponda, los representantes de las instancias señaladas en el inciso precedente deberán informar al director las fechas previstas para la elección de sus directivas y sobre las etapas que se encuentren establecidas en sus respectivos reglamentos, con el objeto de que sean incorporadas al calendario escolar o instrumento de planificación anual y que su realización no impida el normal funcionamiento del establecimiento educacional.

En cada establecimiento educacional deberá existir un Consejo Escolar, que tendrá el objetivo de estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato, conforme a lo establecido en el Párrafo 3° de este Título y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de su competencia.

Lo dispuesto en el inciso precedente también se aplicará a los Consejos de Educación Parvularia, en los establecimientos que en virtud de la ley deban contar con dicha instancia.

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un equipo a cargo de la convivencia educativa, cuyo objetivo será la implementación del Plan de Gestión de Convivencia Educativa del establecimiento y las demás materias relacionadas que determine el equipo directivo. Este equipo tendrá especial preocupación por la activa participación del estudiantado en la elaboración y desarrollo de estrategias y

actividades de reflexión, promoción y resguardo de la buena convivencia y el buen trato.

El equipo de convivencia será liderado por una persona a cargo de la Coordinación de la Convivencia Educativa, que deberá ser un profesional de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica, con formación o experiencia en el ámbito pedagógico o de convivencia educativa, de jornada completa con dedicación exclusiva.

Los establecimientos en contexto de encierro, rurales, aulas hospitalarias, de educación parvularia y aquellos que tengan una matrícula inferior a ciento cincuenta párvulos o estudiantes, estarán exceptuados de las obligaciones señaladas en los incisos quinto y sexto precedentes. En dicho caso, al menos, deberán designar un coordinador de convivencia educativa entre los profesionales del establecimiento que cuenten con una jornada o destinación acorde a las funciones que le corresponda desempeñar.”.

3. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 3° del Título Preliminar por el siguiente: “Convivencia Educativa y Buen Trato”.

4. Sustitúyese el artículo 16 A por el siguiente:

“Artículo 16 A.- Se entenderá por buena convivencia educativa, aquella en donde se promueven relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomentan la cohesión entre todos los integrantes de la comunidad educativa, a través de prácticas y procesos de aprendizaje que se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos de forma pacífica, con atención siempre al bien común, respeto por los derechos de sus integrantes y el ejercicio de la autoridad pedagógica y directiva.

Los párvulos y estudiantes, de acuerdo a su etapa de desarrollo, y los padres, las madres, los apoderados, los asistentes de la educación, y los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima educativo que promueva la buena convivencia y el buen trato, con el objeto de prevenir entre los integrantes de la comunidad educativa todo tipo de actos u omisiones que constituyan acoso, violencia o discriminación, sea que ocurran dentro del establecimiento o fuera de éste, y, además, deberán fomentar interacciones armónicas, participativas y respetuosas de los derechos y deberes de cada integrante de la comunidad. Por su parte, los sostenedores deberán promover y fomentar un proceso educativo libre de violencia, acoso y discriminación, que garantice la dignidad de todas las personas que integran la comunidad.

Las relaciones e interacciones de las personas adultas de las comunidades educativas con los niños, niñas y adolescentes deberán regirse por el buen trato. Se entiende por éste como aquel que se proporciona con

atención a los principios, derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de la República y en el Título II de la ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que fomenta, a su vez, el desarrollo de cuidados, afectos y protección, y hace visibles las necesidades y particularidades de los niños, niñas y adolescentes.

A su vez, los párvulos y estudiantes, y los padres, las madres y los apoderados deberán mantener un buen trato con todo el personal que se desempeñe en el establecimiento educacional, con respeto a su dignidad y manifestar sus opiniones de forma pacífica.

Si se advierte la existencia de conflictos o eventuales vulneraciones de derechos por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa, este deberá ser comunicado al establecimiento de conformidad con lo dispuesto en su reglamento interno.”.

5. Reemplázase el artículo 16 B por el siguiente:

“Artículo 16 B.- Los establecimientos educacionales velarán por la prevención de todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa.

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado o actos gravísimos manifestados por única vez, realizados dentro o fuera del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otra u otro estudiante, y provoquen en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave o que cause un clima escolar hostil, tal como el aislamiento injustificado de una o un estudiante, el ignorar deliberadamente a una o un estudiante de forma colectiva, entre otros, sea por medios tecnológicos o por cualquier otro medio, según su edad y condición.

Toda vez que la normativa educacional haga referencia a agresiones u hostigamientos, se entenderán incluidas tanto las agresiones u hostigamientos físicos como psicológicos.

El establecimiento deberá activar oportunamente el protocolo contra el acoso escolar contemplado en su reglamento interno, en los casos que corresponda. Además, deberá adoptar medidas de prevención y promoción, con enfoque formativo, orientadas a toda la comunidad, en especial a los integrantes involucrados, de conformidad a lo dispuesto en la presente ley.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellas conductas de violencia que, sin ser acoso escolar, constituyan una agresión que atente contra la

integridad física o psíquica de una o un estudiante, requerirán, igualmente, la adopción oportuna por parte del establecimiento de medidas formativas o disciplinarias proporcionales con la falta, con el objeto de prevenir la sistematicidad de dichas agresiones u hostigamientos.

Cada establecimiento y comunidad educativa deberá prestar especial y preferente protección a las y los estudiantes, de acuerdo con su edad y condición, en el marco del Sistema de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, establecido en la ley N° 21.430.

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de una o un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de una o un estudiante.

Las conductas descritas en este artículo, cuando sean ejercidas por estudiantes o padres, madres o apoderados u otros que no detenten la calidad de trabajadores del establecimiento, en contra de los profesionales o asistentes de la educación y, en general, en contra de cualquier trabajadora o trabajador del establecimiento educacional, constituirá violencia en el trabajo ejercida por terceros, en virtud de lo dispuesto en el literal c) del inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo.

En virtud de lo dispuesto en el inciso precedente, el establecimiento deberá aplicar los protocolos o procedimientos de su reglamento interno de convivencia escolar que correspondan para la determinación de medidas pedagógicas, disciplinarias o instrucción de acciones reparatorias sobre el estudiante, padre o apoderado que haya cometido la falta. En el caso de que la trabajadora o el trabajador presente una denuncia por violencia en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, el establecimiento deberá realizar ambos procedimientos bajo los principios de coordinación, economía y eficiencia, y dispondrá actuaciones conjuntas cuando resulten compatibles, con el objeto de evitar la sobre intervención de las partes involucradas y adoptar oportunamente medidas de resguardo a la integridad y bienestar de la trabajadora o del trabajador afectado.

Los protocolos de prevención contenidos en los reglamentos señalados en el inciso precedente, que traten sobre acoso, violencia o discriminación, deberán aplicarse de forma conjunta y complementaria.

Cuando las conductas descritas en los incisos precedentes tengan una motivación discriminatoria, el establecimiento deberá adoptar medidas formativas que promuevan la igualdad y no discriminación arbitraria entre los integrantes de la comunidad educativa, especialmente hacia niños, niñas y

adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N° 21.430, sin perjuicio de otras medidas u acciones establecidas en la ley.”.

6. Sustitúyese el artículo 16 C por el siguiente:

“Artículo 16 C.- Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación, elaborar la Política Nacional de Convivencia Educativa con el objeto de definir lineamientos, orientaciones y un conjunto de acciones para la promoción de una buena convivencia educativa, la prevención y erradicación de toda forma de violencia, acoso y discriminación en todo el sistema educativo.

La política contemplará objetivos, enfoques y dimensiones para los distintos niveles y modalidades de la educación parvularia y escolar. Su implementación se realizará a través de la ejecución del Plan de Acción Nacional de Convivencia Educativa, que dispondrá los órganos responsables, las medidas, indicadores, metas y plazos respectivos. Tanto la política como el plan de acción serán elaborados por la Subsecretaría de Educación en coordinación con la Subsecretaría de Educación Parvularia y con los órganos que integran el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en las materias que corresponda.

La política y el plan referidos en los incisos anteriores tendrán una vigencia de ocho años. El plan será evaluado cada dos años por las Subsecretarías de Educación y de Educación Parvularia en los ámbitos de su competencia; considerarán para ello los informes emitidos por la Agencia de la Calidad de la Educación a raíz del seguimiento y monitoreo de la política y la gestión de la convivencia educativa a nivel nacional, y podrán generar ajustes y modificaciones a las acciones, indicadores y metas comprometidas.”.

7. Reemplázase el artículo 16 D por el siguiente:

“Artículo 16 D.- Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa que considere los lineamientos de la Política Nacional de Convivencia Educativa y cuya implementación será responsabilidad del Equipo Directivo, a través del Equipo de Convivencia Educativa.

Los Planes de Gestión de la Convivencia Educativa tendrán por objetivo promover la buena convivencia educativa, el buen trato y la erradicación de todo acto de violencia, acoso o discriminación en la comunidad educativa. Para ello deberán definir objetivos, estrategias, acciones concretas y metas en materias de convivencia educativa, tales como participación, igualdad, resolución pacífica de conflictos, mediación, cuidados y responsabilidades digitales, desarrollo socioemocional y salud mental, desde un enfoque pedagógico y de prevención de factores de riesgo.

El Plan deberá contar con los siguientes contenidos mínimos:

a) Acciones de coordinación con el área técnico-pedagógica, con el objetivo de asegurar el enfoque pedagógico de la convivencia, a nivel transversal en todos sus niveles y, a su vez, acciones de coordinación con el área administrativa para la adecuada aplicación de las estrategias del plan y el reglamento interno.

b) Estrategias y acciones de información, difusión y formación para todos los estamentos de la comunidad educativa.

c) Acciones de promoción del bienestar y salud mental, orientadas a los distintos estamentos de la comunidad educativa, con especial énfasis en la prevención de conductas suicidas, en la salud mental laboral y en el abordaje de factores de riesgo, tales como el consumo de drogas, alcohol, tabaco, y de aquellas conductas que infringen la ley.

d) Estrategias para la gestión colaborativa de conflictos de convivencia o situaciones de riesgo.

e) Calendarización de las actividades a realizar durante el año escolar, con señalamiento de los objetivos de cada actividad, su contribución al propósito del plan, e indicación, además, del lugar, fecha y encargada o encargado de su ejecución.

f) Estrategias y acciones que incorporen a estudiantes como sujetos activos en el proceso de aprendizaje y promoción de una buena convivencia educativa.”.

8. Incorpórase el siguiente artículo 16 F:

“Artículo 16 F.- La Superintendencia de Educación podrá capacitar a los establecimientos para la aplicación, con enfoque pedagógico y formativo, del plan de gestión de la convivencia dispuesto en el artículo 16 D. Para estos efectos, con el fin de resguardar la calidad metodológica de las acciones, la Superintendencia podrá requerir la asesoría técnica del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas.”.

9. Introdúcese el siguiente artículo 16 G:

“Artículo 16 G.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 D, al inicio de cada año escolar los establecimientos educacionales deberán informar a la comunidad educativa sobre los contenidos del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y del reglamento interno, con especial énfasis en los protocolos de prevención y actuación dispuestos frente a situaciones de acoso, violencia y discriminación arbitraria, y señalará las garantías de

seguridad, protección y privacidad de las personas afectadas y los canales para la conducción de denuncias internas.

Los instrumentos mencionados deberán entregarse a padres, madres y apoderados al momento de la matrícula o de su renovación, en formato impreso o digital, y se dejará constancia de su recepción. Asimismo, se informará a la comunidad educativa sobre las modificaciones que se realicen a estos instrumentos durante el año escolar y se deberá contar de forma permanente con ejemplares impresos de éstos, en un lugar visible del establecimiento educacional y en su sitio web.

La difusión de los instrumentos señalados precedentemente deberá ser continua, a través de contenidos o acciones con un lenguaje comprensible para todas las edades, con el fin de alcanzar el mayor conocimiento, difusión y apropiación de la regulación interna.”.

10. Incorpórase el siguiente artículo 16 H:

“Artículo 16 H.- El sostenedor, a través del director del establecimiento educacional, deberá asegurar el desarrollo adecuado de procesos participativos para la actualización del Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y del reglamento interno, al menos cada cuatro años, por curso, nivel o ciclo. Se contemplará la participación de todos los estamentos y sus integrantes, con el objeto de recoger las experiencias y necesidades particulares de la comunidad educativa. Respecto de las trabajadoras y los trabajadores del establecimiento que no desempeñen funciones exclusivamente sobre un curso o nivel, el equipo directivo deberá proponer su participación agrupados en el nivel, curso o ciclo que resulte más idóneo y eficiente para asegurar así la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa.

Estos procesos serán liderados por el director con la asistencia del equipo de convivencia y la colaboración del Consejo Escolar, el cual podrá proponer ejes de trabajo y mecanismos para asegurar la participación de toda la comunidad educativa y la correcta sistematización y levantamiento de sus solicitudes o propuestas.

El director, a través del coordinador de convivencia, presentará un informe al Consejo Escolar con los principales resultados de los procesos participativos y las propuestas recogidas. El Consejo Escolar, si así lo estima, podrá acordar observaciones al informe, siempre que no contravengan la normativa educacional o el proyecto educativo institucional del establecimiento. Sancionado el informe, se pondrán a disposición de la comunidad educativa los instrumentos con sus respectivas actualizaciones, en el plazo que fije su reglamento.

El establecimiento podrá fijar la cantidad de etapas y actividades para el desarrollo de los procesos de actualización participativos, en virtud de las disposiciones señaladas en los incisos precedentes, dentro de un mismo año escolar. Asimismo, podrá disponer instancias para el desarrollo de dichas actividades, tales como, consejos de curso, reuniones de apoderados u otras.

La contravención a lo dispuesto en el presente artículo constituirá una infracción grave a la normativa educacional, cuyo cumplimiento será fiscalizado por la Superintendencia de Educación.

Los procesos de actualización participativos regulados en este artículo, no obstan ni restringen la realización de modificaciones o actualizaciones anuales que determine cada establecimiento.”.

11. Incorpórase el siguiente artículo 16 I:

“Artículo 16 I.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 C, la Subsecretaría de Educación deberá desarrollar una coordinación interinstitucional y una articulación intersectorial sobre aquellos ámbitos de la Política Nacional de Convivencia Educativa y del Plan de Acción de la Convivencia Educativa que requieran en su elaboración y ejecución de la participación de otros órganos de la Administración del Estado. Para lo anterior establecerá mecanismos eficientes de gestión y funcionamiento, y considerará, al menos, los siguientes:

a) Con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, para una adecuada articulación entre las políticas públicas e instituciones del Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que se vinculan con la convivencia educativa, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 21.430.

b) Con el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objeto de articular aquellas acciones que garanticen la seguridad del entorno de los establecimientos educacionales, con especial énfasis en la ejecución conjunta de medidas para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y alcohol, considerando el desarrollo óptimo de la oferta pública para la prevención, atención, resguardo de derechos y mitigación de factores de riesgo. Asimismo, en la elaboración de estudios e investigaciones que permitan generar evidencia para el diseño, monitoreo y evaluación permanente de las políticas públicas, con énfasis en su eficacia.

c) Con el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública, la promoción del bienestar y la salud mental de las comunidades educativas y sus integrantes, mediante la articulación de la implementación de aquellas políticas que inciden en éstas y la entrega de las

orientaciones y directrices necesarias para abordarlas, con especial énfasis en la salud mental y el bienestar psicosocial tanto estudiantil como laboral y en la prevención de conductas suicidas. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para la adecuada coordinación de la derivación a centros de salud y su atención en ellos, en los casos que corresponda.

d) Con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para articular la acción conjunta de las políticas públicas que implementa éste en la prevención y erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres en el marco de la convivencia educativa, con énfasis en el trato justo y no sexista.

e) Con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de Justicia, para una acción coordinada sobre aquellos estudiantes que han infringido la ley, con el objeto de asegurar su continuidad en el sistema escolar, y resguardar sus trayectorias educativas. Asimismo, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para establecer la actuación coordinada en la prevención y erradicación de la discriminación en las comunidades educativas.

f) Con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría del Trabajo, para una acción coordinada en la protección de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Las coordinaciones recién enunciadas podrán implementarse de forma separada, conjunta y/o simultáneamente, según el tipo de intervención pública que se requiera.

La actuación estatal al interior de los establecimientos educacionales será liderada, dirigida y coordinada por sus directores, mientras que aquella a ejecutarse fuera de ellos corresponderá a las autoridades políticas o administrativas que determine la ley o el reglamento que al efecto se dicte.

El ejercicio de estas funciones y atribuciones siempre reconocerá como finalidad preferente la garantía de derechos de párvulos y estudiantes, con especial foco en la protección y continuidad de las trayectorias educativas, considerando el involucramiento de sus familias y adultos significativos.”.

12. Incorpórase, a continuación del artículo 44, siguiente artículo 44 bis:

“Artículo 44 bis.- Convenios de cooperación educativa para prácticas profesionales. A fin de resguardar la salud mental de todas las personas intervinientes en los procesos de prácticas profesionales, los

establecimientos educacionales de cualquier nivel en que se realicen deberán habilitar mecanismos para la suscripción de convenios escritos de cooperación educativa con las entidades colaboradoras. Se entenderá por prácticas profesionales aquellas actividades de naturaleza formativa para estudiantes y supervisadas por la respectiva institución de educación superior a la que aquellos pertenezcan. Los referidos convenios contendrán los términos, derechos y deberes de cada parte en la realización de las prácticas, con los siguientes contenidos mínimos:

a) Los objetivos educativos de la práctica y las actividades en que ella consistirá.

b) Los plazos de duración de la práctica, el régimen de permisos para la evaluación de la asistencia del estudiante, y las condiciones para la rescisión anticipada del convenio en caso de incumplimiento de alguno de sus términos.

c) Los seguros eventualmente aplicables en caso de accidentes.

d) La protección de los datos personales del estudiante.

e) La regulación de los eventuales conflictos surgidos durante desarrollo de la práctica y los mecanismos de resolución a través de protocolos de actuación que resulten aplicables.

f) Los términos del reconocimiento de la institución de educación superior a la labor realizada por los tutores de la entidad colaboradora.

g) Los plazos y procedimientos para la entrega del informe final por parte del estudiante a cargo de la práctica, con la valoración de sus competencias y su calificación.

En ningún caso podrá condicionarse la entrega del informe final de la práctica o su valoración o calificación final, a la entrega de la evaluación que pueda o deba hacer el estudiante del mismo proceso de práctica, de su tutor o tutores, de la entidad colaboradora o de la institución de educación superior a la que pertenezca. Dicha evaluación deberá siempre ser entregada con posterioridad a la evaluación definitiva del proceso de práctica.”.

Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el literal d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales:

1. Incorpórase el siguiente párrafo segundo, nuevo, readecuándose el orden correlativo de los párrafos siguientes:

“Los establecimientos educacionales deberán mantener su normativa interna actualizada de acuerdo a la normativa educacional vigente.”.

2. Reemplázase el párrafo segundo, que ha pasado a ser párrafo tercero, por el siguiente:

“Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a los padres, madres y apoderados; se deberá entregar a éstos, en formato digital o impreso, una copia de los reglamentos al momento de la matrícula. Asimismo, se deberá informar a la comunidad educativa sobre las modificaciones que se realicen a dichos reglamentos durante el año escolar.”.

3. Intercálase en el párrafo trece, que ha pasado a ser párrafo catorce, entre la frase “conforme a lo dispuesto en esta ley” y el punto y aparte, lo siguiente: “y en el Párrafo 3° del Título Preliminar del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”.

Artículo 3.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 7° de la ley N° 19.979, que Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales:

a) Elimínase el vocablo “subvencionado”.

b) Intercálase, entre el vocablo “padres” y la expresión “y apoderados”, la palabra “madres”, precedida de una coma.

Artículo 4.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.529, de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización:

1. Incorpórase, a continuación del artículo 11, el siguiente artículo 11 bis:

“Artículo 11 bis.- La Agencia tendrá a su cargo el monitoreo de la convivencia educativa de los establecimientos educacionales, a partir de la integración de la información que obtenga al implementar las políticas públicas en materia de convivencia, buen trato, prevención de todo tipo de violencia, discriminación arbitraria u otras situaciones de riesgo en las comunidades educativas. Para estos efectos, deberá realizar las siguientes acciones:

a) Mantener un sistema de información integrado en base a los criterios y requerimientos que proporcionen, conjuntamente, la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

b) Elaborar un informe bienal del estado de la convivencia en los establecimientos educacionales a nivel nacional, a partir de la evaluación que realice la Agencia y del análisis y estudio de las denuncias, requerimientos e información de los procesos que sean competencia de la Superintendencia de Educación, conforme al reporte que este órgano emitirá anualmente. Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia podrá solicitar directamente información a otras instituciones públicas que resulten pertinentes para complementar su evaluación.

Los datos personales que estén contenidos en dichos antecedentes deberán tratarse de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y se deberán utilizar sólo para los fines determinados por la ley.

c) Identificar y coordinar la firma de convenios de interoperabilidad con órganos de la Administración del Estado que contribuyan a disponer de informes, bases de datos y estudios, sobre temáticas asociadas a convivencia educativa, violencia, bienestar, salud mental, consumo de drogas lícitas y no lícitas en comunidades educativas, que sean pertinentes. Además de solicitar y sistematizar anualmente bases de datos intersectoriales vinculadas con la implementación de programas y estudios, procurará que contengan datos de cobertura, destinatarios, lugares de implementación y temporalidad, entre otros.

d) Colaborar con la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia en la selección, pertinencia, colaboración y coordinación de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado a nivel de los establecimientos educacionales, y reportar la duplicación o colisión de las intervenciones realizadas que identifique como resultado del monitoreo.

e) Toda otra acción requerida expresamente por la Subsecretaría de Educación y/o la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación.

La Agencia, al menos una vez al año, pondrá a disposición de todos los establecimientos educativos del país un instrumento de evaluación diagnóstica de la convivencia educativa, para el uso interno de los equipos directivos y de educación, de utilización voluntaria, cuyo objeto será monitorear y favorecer la toma de decisiones en torno a los planes de gestión de la convivencia.”.

2. Reemplázase la letra h) del artículo 49 por la siguiente:

“h) Recibir requerimientos y/o solicitudes de gestión colaborativa de conflictos, para luego realizar los procesos de mediación, facilitación, conciliación u otros mecanismos conducentes a su resolución.”.

3. Reemplázase el epígrafe del Párrafo 4° del Título III por el siguiente “De la atención de denuncias y otros requerimientos ciudadanos”.

4. En el artículo 57:

a) Reemplázase en el inciso primero la expresión “los reclamos” por “los requerimientos”.

b) Agrégase el siguiente inciso segundo:

“En aquellos casos en que el requirente no haya previamente activado los protocolos contemplados en el reglamento interno del establecimiento educacional, la Superintendencia podrá orientarlo para su activación, con el objeto de propender a la resolución de los conflictos al interior de las comunidades educativas.”.

5. Reemplázase el inciso segundo del artículo 58 por el siguiente:

“Se entenderá por requerimiento de gestión colaborativa de conflicto, la petición formal realizada a la Superintendencia por alguna de las personas señaladas en el artículo anterior, en orden a que intervenga en la controversia existente entre la parte solicitante y a quien ésta inste a participar en el proceso, cuando el adecuado desarrollo del proceso educativo esté siendo afectado.”.

6. Sustitúyese el artículo 59 por el siguiente:

“Artículo 59.- Formulada una denuncia o recibido un requerimiento de gestión colaborativa de conflicto, la Superintendencia podrá abrir un período de información previo con el fin de conocer las circunstancias concretas del caso y la conveniencia de iniciar un procedimiento sancionatorio o la respectiva gestión colaborativa de conflicto.”.

7. Reemplázase en el artículo 60 la palabra “reclamo” por “requerimiento”.

8. Reemplázase el artículo 61 por el siguiente:

“Artículo 61.- Recibida una denuncia, la Superintendencia designará un funcionario encargado de su tramitación. En las denuncias referidas a la convivencia escolar deberá siempre ofrecerse la gestión

colaborativa del conflicto planteado, salvo en aquellos casos en que los hechos denunciados sean constitutivos de delitos o que la aplicación de dicho mecanismo pueda generar una revictimización de la persona afectada.

En aquellos casos en que se evalúe que la gestión colaborativa de conflicto no es el mecanismo adecuado para abordar el requerimiento, el funcionario notificará al establecimiento sobre el ingreso de la denuncia y le solicitará los antecedentes y documentación necesaria para determinar eventuales infracciones a la normativa educacional que hagan necesario derivar la denuncia a un procedimiento de fiscalización. Con todo, los denunciantes sólo podrán participar durante la tramitación de los procedimientos regulados en los párrafos 2° y 4° del Título III.

Sin perjuicio de lo expuesto, en cualquier momento de la tramitación la persona denunciante podrá solicitar reconducir su requerimiento al procedimiento de gestión colaborativa de conflictos.”.

9. Reemplázase el artículo 62 por el siguiente:

“Artículo 62.- Recibido un requerimiento de gestión colaborativa de conflicto, la Superintendencia designará un funcionario a cargo de su tramitación, quien determinará el mecanismo idóneo para la atención del caso. Para ello, el funcionario a cargo se comunicará con las partes involucradas con el objeto de indagar las circunstancias y evaluar la pertinencia de la aplicación del mecanismo, y verificará la voluntad de las partes de continuar con la gestión colaborativa.

Finalizada la gestión, el funcionario deberá levantar un acta en la que constará el resultado del proceso. En el caso de lograr un acuerdo para la resolución del conflicto, deberá dejar constancia de los compromisos asumidos por los involucrados y los plazos asociados para su cumplimiento.

Para efectos de lo dispuesto precedentemente, cada Dirección Regional contará con funcionarios que se desempeñarán como gestores colaborativos de conflicto, con formación especializada en dicho ámbito. En caso de que el servicio no pueda cubrir el requerimiento oportunamente, podrá asignar a un profesional autorizado para dicha función, inscrito en el Registro de Mediadores para la Gestión Colaborativa de Conflictos, que tendrá a su cargo la Superintendencia.

La Superintendencia fijará, mediante normas de general aplicación, los requisitos y el perfil profesional para el cargo de gestor colaborativo de conflicto. Asimismo, establecerá los requisitos, la duración y los procedimientos para la inscripción, renovación y eliminación de los profesionales que integren el registro señalado en el inciso anterior, y, también, contemplará los honorarios asociados. Además, fijará las

formalidades, etapas, acciones, efectos y plazos de los procedimientos para la gestión colaborativa.”.

10. Reemplázase en el artículo 64 la frase “conocidas y resueltas” por “, gestión colaborativa de conflictos y otros requerimientos conocidos y resueltos”.

Artículo 5.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.070, que aprueba Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, del Ministerio de Educación:

1. En el artículo 8° bis:

a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “tienen derecho a que se respete su integridad física” por “tienen derecho a trabajar en espacios seguros, libres de violencia y acoso, en donde se resguarde y se respete su integridad física”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser sexto, y así sucesivamente:

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente el sostenedor deberá adoptar medidas de prevención, investigación y sanción de aquellas conductas de acoso sexual, laboral y de violencia en el lugar de trabajo, y deberá contar con los protocolos y mecanismos señalados en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo.

En los establecimientos educacionales, los protocolos de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo deberán contemplar para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales de los profesionales de la educación, especialmente, aquellos derivados de las condiciones y modalidades educativas del establecimiento educacional y de las relaciones e interacciones sostenidas durante el trabajo, en relación a éste o como resultado de él, y con los demás integrantes de la comunidad educativa u otros.

Los establecimientos educacionales deberán considerar en la evaluación de los riesgos psicosociales de su dependencia, a lo menos, los antecedentes señalados en el inciso segundo del artículo 37, sin perjuicio de aquellos que determine la Superintendencia de Seguridad Social.

En ningún caso las medidas de protección que se adopten por parte del sostenedor durante la investigación de casos de acoso sexual, laboral o de violencia en el lugar del trabajo podrán implicar un menoscabo en los derechos laborales del docente denunciante. En el caso de que se

contemple la destinación del docente denunciante a otro nivel, jornada o establecimiento de su dependencia, de manera temporal o definitiva, o en general, cualquier medida que modifique sus funciones, deberá contar con su acuerdo.”.

c) Reemplázase el actual inciso segundo, que ha pasado a ser sexto, por el siguiente:

“Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida en contra de los profesionales de la educación por cualquier medio, incluidos los tecnológicos y cibernéticos, ocurrida al interior o fuera del establecimiento educativo, cuando surjan durante el ejercicio de sus funciones, en relación con éstas o como resultado de ellas. Al respecto, sin perjuicio de las obligaciones que recaen sobre el sostenedor, señaladas precedentemente, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para adoptar medidas administrativas y disciplinarias, con enfoque formativo, para imponer el orden en la sala, y podrán disponer el retiro de alumnos, la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“En el caso de que el docente sea afectado por hechos constitutivos de delitos, ejercidos por terceros, sean estos estudiantes, padres, apoderados u otros, el sostenedor del establecimiento deberá proporcionarle apoyo y orientación para el ejercicio y protección de sus derechos, al menos, hasta la presentación de la denuncia. Asimismo, a través del director del establecimiento, deberá siempre denunciar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Su obligación no se entenderá satisfecha por acciones ejercidas por terceros.”.

2. Agréganse en el artículo 37 los siguientes incisos segundo y tercero:

“En las investigaciones que lleven a cabo los organismos administradores de la ley N° 16.744 para la determinación de origen común o laboral de una enfermedad de naturaleza mental que afecte a un profesional de la educación de un establecimiento educacional, se deberán solicitar a los organismos correspondientes, quienes estarán obligados a remitirlos, los siguientes antecedentes de los últimos veinticuatro meses previos, y los demás que determinen las leyes:

a) A la Superintendencia de Educación, las denuncias presentadas en contra del establecimiento y/o las sanciones que se le hayan aplicado por infracciones a la normativa educacional en materia de convivencia escolar.

b) Al Ministerio Público, las sentencias condenatorias de delitos perpetrados en el determinado establecimiento educacional entre integrantes de la comunidad educativa.

c) A los establecimientos, los antecedentes de los procedimientos internos realizados frente a conductas de acoso, violencia física o discriminación que hayan afectado a integrantes de la comunidad, con resguardo de la información privada de las partes involucradas.

d) A los establecimientos, los antecedentes que consideren necesarios para determinar el tipo de establecimiento educativo de que se trata, sus niveles, condiciones y modalidades educativas y el índice de vulnerabilidad que presenta.

Los establecimientos educacionales deberán considerar, a lo menos, los antecedentes señalados precedentemente, en la evaluación de los riesgos psicosociales de su dependencia, sin perjuicio de aquellos que determinen las leyes y la Superintendencia de Seguridad Social a través de normas de carácter general.”.

Artículo 6.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 21.109, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública:

1. En el artículo 2:

a) Reemplázase en el inciso tercero la frase “tienen derecho a que” por la siguiente: “tienen derecho a trabajar en espacios seguros, libres de violencia y acoso, en donde se resguarde y”.

b) Incorpóranse los siguientes incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, nuevos, pasando el actual inciso cuarto a ser inciso final:

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente el sostenedor deberá adoptar medidas de prevención, investigación y sanción de aquellas conductas de acoso sexual, laboral y de violencia en el lugar de trabajo, y deberá contar con los protocolos y mecanismos señalados en el Título IV del Libro II del Código del Trabajo.

En los establecimientos educacionales, los protocolos de prevención del acoso sexual, laboral y de violencia en el trabajo, para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales de los asistentes de la educación, deberán contemplar, especialmente, aquellos derivados de las condiciones y modalidades educativas del establecimiento educacional y de las relaciones e interacciones sostenidas durante el trabajo, en relación a éste o como resultado de él, y con los demás integrantes de la comunidad educativa.

La Superintendencia de Seguridad Social, mediante una norma de carácter general, entregará las directrices específicas para los espacios educativos que deben considerar las entidades administradoras de la ley N° 16.744 en la asistencia técnica de los protocolos señalados en el inciso precedente.

En ningún caso las medidas de protección que se adopten por parte del sostenedor durante la investigación de casos de acoso sexual, laboral o de violencia en el lugar del trabajo podrán implicar un menoscabo en los derechos laborales del asistente afectado. En el caso de que se contemple la destinación del asistente afectado a otro nivel, jornada o establecimiento de su dependencia, de manera temporal o definitiva, o en general, cualquier medida que modifique sus funciones, deberá contar con su acuerdo.

En el caso de que el asistente sea afectado por hechos constitutivos de delitos, ejercidos por terceros, sean estos estudiantes, padres, apoderados u otros, el sostenedor del establecimiento deberá proporcionarle apoyo y orientación para el ejercicio y protección de sus derechos, al menos, hasta la presentación de la denuncia. Asimismo, a través del director del establecimiento, deberá siempre denunciar de conformidad a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal. Su obligación no se entenderá satisfecha por acciones ejercidas por terceros.”.

2. Incorpórase, a continuación del artículo 29, el siguiente artículo 29 bis:

“Artículo 29 bis.- En las investigaciones que lleven a cabo los organismos administradores de la ley N° 16.744 para la determinación de origen común o laboral de una enfermedad de naturaleza mental que afecte a un asistente de la educación de un establecimiento educacional deberán solicitar a los organismos correspondientes, quienes estarán obligados a remitirlos, los siguientes antecedentes de los últimos veinticuatro meses previos, y los demás que determinen las leyes:

a) A la Superintendencia de Educación, las denuncias presentadas en contra del establecimiento y/o las sanciones que se le hayan aplicado por infracciones a la normativa educacional en materia de convivencia escolar.

b) Al Ministerio Público, las sentencias condenatorias de delitos perpetrados en el determinado establecimiento educacional entre integrantes de la comunidad educativa.

c) A los establecimientos, los antecedentes de los procedimientos internos realizados frente a conductas de acoso, violencia física o

discriminación que hayan afectado a integrantes de la comunidad, con resguardo de la información privada de las partes involucradas.

d) A los establecimientos, los antecedentes que consideren necesarios para determinar el tipo de establecimiento educativo de que se trata, sus niveles, condiciones y modalidades educativas y el índice de vulnerabilidad que presenta.

Los establecimientos educacionales deberán considerar, a lo menos, los antecedentes señalados precedentemente, en la evaluación de los riesgos psicosociales de su dependencia, sin perjuicio de aquellos que determinen las leyes y la Superintendencia de Seguridad Social a través de normas de carácter general.”.

Artículo 7.- La Superintendencia de Educación deberá informar anualmente a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado respecto de los montos y porcentajes de la Subvención Escolar Preferencial que han sido usados para cumplir con las obligaciones adicionales creadas por esta ley. Esta información deberá ser informada de manera desagregada por región y por colegio.

Artículo 8.- Suprímese la letra a) del numeral 1 del artículo 79 de la ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia a contar de los tres meses de su publicación en el Diario Oficial, de conformidad con las reglas y excepciones señaladas en los siguientes artículos transitorios. Si la publicación de la ley ocurre en los meses de diciembre, enero o febrero, entrará en vigencia a contar del 1 de junio más próximo.

Artículo segundo.- Para la adecuada implementación de las modificaciones legales contenidas en esta ley, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad en la Educación realizarán, desde su publicación y hasta su entrada en vigencia, un proceso de difusión de información, capacitación y consulta dirigido a los establecimientos educacionales y sus integrantes.

A su vez, durante el periodo de implementación contemplado en el artículo quinto transitorio de la presente ley, la Superintendencia de Educación dispondrá de canales para consultas y capacitaciones para los establecimientos que lo requieran.

Artículo tercero.- La Política Nacional de Convivencia Educativa y su Plan de Acción publicados por el Ministerio de Educación en mayo de 2024 se entenderán vigentes para los efectos del artículo 16 C, que se

incorpora por el numeral 6 del artículo 1 de la presente ley en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, y demás disposiciones legales que le hagan referencia, desde la publicación de la ley hasta el mes de mayo de 2030.

Artículo cuarto.- A la entrada en vigencia de la presente ley, aquellos profesionales de la educación o del área psicosocial o psicopedagógica que se desempeñen como encargados de convivencia en un establecimiento educacional serán homologados al cargo de coordinador de convivencia que crea la presente ley, siempre que cumplan con dedicación exclusiva y jornada completa.

En virtud de lo anterior, la sola entrada en vigencia de la presente ley no podrá ser considerada causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones, pérdida del empleo o término de la relación laboral de los profesionales mencionados en el inciso anterior.

Artículo quinto.- En los establecimientos educacionales subvencionados o que reciben aportes del Estado, la implementación de las disposiciones contenidas en los artículos 16 D, 16 F, 16 G y 16 H, que se incorporan por el artículo 1 de la presente ley en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, deberá realizarse dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigencia.

Los establecimientos educacionales particulares pagados contarán con el plazo previo de tres meses, contado desde la entrada en vigencia de la ley, para la creación de los Consejos Escolares. Vencido dicho plazo, dispondrán de seis meses para la implementación de las disposiciones señaladas en el inciso precedente.

Artículo sexto.- Si durante los seis meses siguientes al vencimiento de los plazos señalados en el artículo precedente, los programas de fiscalización de la Superintendencia de Educación que tengan por objeto monitorear el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley detectan hechos que puedan constituir infracciones a ella, no se dispondrá la instrucción de un procedimiento sancionatorio sino medidas alternativas, tales como observaciones, recomendaciones u otras que determine la Superintendencia y que puedan resultar idóneas para orientar al sostenedor en el cumplimiento normativo.

En todo caso, siempre deberá instruirse un procedimiento sancionatorio respecto de aquellos hechos que así lo ameriten por su gravedad, de conformidad a la normativa vigente, aunque formen partes de los referidos programas de fiscalización.

Artículo séptimo.- Los establecimientos que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley no cuenten con personal contratado de conformidad con

lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 15 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, podrán financiar la diferencia de horas que se requiera aumentar, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 8° bis de la ley N° 20.248, y se entenderán incorporadas a aquellas acciones señaladas en el numeral 3 del inciso segundo del artículo 8° de la referida ley.

Artículo octavo.- El mayor gasto fiscal que irroque la aplicación de este proyecto de ley, durante el primer año presupuestario de su entrada en vigencia, se financiará con cargo a la Partida del Ministerio de Educación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la Partida del Tesoro Público, podrá suplementar la parte del gasto que no se pueda financiar con esos recursos. En los años siguientes se estará a los recursos que contemplen las respectivas leyes de presupuestos del Sector Público.

Artículo noveno.- A los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de una municipalidad o corporación municipal, y en establecimientos educacionales particulares subvencionados o regidos por el decreto ley N° 3.166, de 1980, les serán aplicables, a contar de la entrada en vigencia de la presente ley, las disposiciones contenidas en los incisos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 2 y en el artículo 29 bis de la ley N° 21.109, que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública, y en la letra d) del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005.”

- - -

ACORDADO

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días: 22 de enero de 2025, con la asistencia de los Senadores señor Jaime Quintana Leal (Presidente), señora Carmen Gloria Aravena Acuña, y señores Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; 29 de enero de 2025, con la asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), José García Ruminot, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; 5 de marzo de 2022, con la asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), José García Ruminot, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; 12 de marzo de 2015, con la asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), Fidel Espinoza Sandoval, José García Ruminot, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; 19 de marzo de 2025, con la asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), Fidel Espinoza Sandoval (reemplazado en parte de la sesión por la Senadora señora Isabel Allende Bussi), José García Ruminot, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; 26 de marzo de 2025, con la

asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), Fidel Espinoza Sandoval, José García Ruminot, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez; y 9 de abril de 2025, con la asistencia de los Senadores señores Jaime Quintana Leal (Presidente), Fidel Espinoza Sandoval, Gustavo Sanhueza Dueñas y Esteban Velásquez Núñez.

Sala de la Comisión, a 15 de abril de 2025.



FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART
Secretario de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SOBRE CONVIVENCIA, BUEN TRATO Y BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO ESCOLAR, LA DISCRIMINACIÓN Y TODO TIPO DE VIOLENCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (BOLETINES N^{os} [16.901-04](#), [16.781-04](#) Y [16.881-04](#), REFUNDIDOS)

I. OBJETIVO DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:

Establecer el deber del Estado y de los distintos actores del sistema educativo de adoptar medidas para la promoción de la buena convivencia al interior de los establecimientos, resguardando que los estudiantes se eduquen en espacios libres de violencia, acoso y discriminación. Asimismo, propender al desarrollo de mecanismos para la protección de todos los integrantes de la comunidad educativa.

II. ACUERDOS: Aprobado en general (4x0).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:

Consta de ocho artículos permanentes y nueve disposiciones transitorias.

IV. NORMAS DE QUORUM ESPECIAL: No tiene.

V. URGENCIA: "Suma".

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Cámara de Diputados.

- [Mensaje](#) de Su Excelencia el Presidente de la República, señor Gabriel Boric Font (Boletín N° 16.901-04).

- [Moción](#) de los Diputados señoras Ahumada, Arce, Concha, Olivera, Pérez (doña Joanna) y Schneider, y señores Camaño, Cornejo, Rey y Saffirio (Boletín N° 16.781-04).

- [Moción](#) de los Diputados señoras Molina, Rojas, Schneider, Serrano y Tello, y señores Barría, Cifuentes, Cornejo, Durán (don Eduardo) y Rey (Boletín N° 16.881-04).

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Segundo.

VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS: Aprobado en general por 74 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, con excepción de los números 4), 6), 7), 8), 9), 11), 13) y 14) -que pasaron a ser 2), 4), 5), 6), 7), 8), 10) y 11)- del artículo 1°; los artículos 3°, 4° y 7°; y los artículos tercero, quinto y séptimo transitorios, todos los cuales fueron aprobados por distintas mayorías.

IX. INICIO DE LA TRAMITACIÓN EN EL SENADO: 21 de octubre de 2024.

X. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe, en general.

XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- [Decreto con fuerza de ley N° 2, de 2010, del Ministerio de Educación](#), que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005 (Ley General de Educación).
- [Decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación](#), que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.
- [Ley N° 19.979](#), que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.
- [Ley N° 20.529](#), sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su fiscalización.
- [Decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, del Ministerio de Educación](#), que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
- [Ley N° 21.109](#), que establece un Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública.
- [Ley N° 21.040](#), que crea el Sistema de Educación Pública.
- [Ley N° 16.744](#), que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- [Ley N° 20.248](#), que establece Ley de Subvención Escolar Preferencial.

Valparaíso, a 15 de abril de 2025.

FRANCISCO JAVIER VIVES DIBARRART
Secretario de la Comisión